

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS**

**“LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS EN EL
CASO DE LAS PAPELERAS DEL RÍO URUGUAY”**

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MONTAÑO

DIRECTOR: AB. JUAN MANUEL MARCHÁN

QUITO, JUNIO DE 2011

DEDICATORIA

A mis abuelos quienes siempre me demostraron que la perseverancia y fortaleza son los pilares necesarios para alcanzar todos los objetivos trazados en mi vida. A mis padres, porque gracias a su trabajo y amor constantes he logrado vivir experiencias inolvidables y enriquecedoras.

AGRADECIMIENTO

A Dios, porque gracias a su bendición ha sido posible culminar este trabajo.

A mis padres y hermanos quienes me han apoyado incondicionalmente, al igual que mis compañeros de aula quienes se han convertido en amigos perdurables.

A mi Director de Tesis, quien supo orientarme y corregirme para que este trabajo resulte coherente y genere buenos resultados.

RESUMEN

La siguiente investigación se centra en analizar las reglas y métodos de interpretación y aplicación de los tratados internacionales, constituyendo herramientas elementales para esclarecer su plena significación, todo con la finalidad de permitir el efectivo cumplimiento de cada una de sus cláusulas. La interpretación resulta necesaria a realizarse cuando existen conflictos de aplicación entre las partes contratantes de un tratado en particular. Tal es el caso del Estatuto del Río Uruguay, el mismo que ha generado una controversia entre Argentina y Uruguay, ya que ambos países discrepan respecto de la aplicación e interpretación de algunas de sus cláusulas más trascendentales. Este conflicto llegó a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, quien resolvió el caso mediante un fallo que generó numerosas disidencias entre los Magistrados participantes. En tal razón resulta como objetivo general de esta investigación, estudiar cada una de las partes del fallo que traten sobre la interpretación del mencionado Estatuto además de los antecedentes y hechos relevantes que envolvieron al caso previo a la resolución de la Corte, todo lo cual permitirá realizar un estudio valorativo acerca de la eficacia vinculatoria que genera este y en general todos los tratados y convenios internacionales; por otro lado, determinar la actuación eficaz o insuficiente de la Corte respecto de la resolución de casos vinculados tanto al derecho internacional público como al derecho del medio ambiente.

El método aplicado a esta investigación es el hipotético-deductivo dentro de la corriente del racionalismo, a fin de eliminar toda duda que permita a su vez llegar a conclusiones ciertas e irrefutables respecto de las actuaciones de ambos países y de la Corte Internacional de Justicia.

El caso de las Papeleras del Río Uruguay constituye un antecedente imprescindible que evidencia una determinada actuación de la Corte respecto de la resolución de casos donde existen conflictos sobre la interpretación de los tratados con una clara incidencia en el derecho internacional del medio ambiente, cuyo fallo ha creado grandes discrepancias debido a su criticada falta de análisis de pruebas acompañada del simple reconocimiento de incumplimiento como medio reparatorio.

TABLA DE CONTENIDOS

GLOSARIO.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPÍTULO 1	
LA PROBLEMÁTICA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS.....	12
1.1. Definición de interpretación de los tratados.....	12
1.1.1. Clases de Interpretación.....	14
1.1.2. Principios fundamentales de aplicación.....	17
1.1.3. Métodos de Interpretación.....	24
1.1.4. Medios Complementarios de Interpretación.....	26
1.2 Los efectos y aplicación de los tratados.....	29
1.3 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y su obligatoriedad de aplicación.....	31
1.3.1 Antecedentes.....	32
1.3.2 Contenido.....	33
1.3.3 Obligatoriedad de aplicación.....	37

1.4	El Estatuto del Río Uruguay.....	38
1.4.1	Antecedentes.....	39
1.4.2	Objetivos y contenido.....	41

CAPÍTULO 2

INCUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DEL RIO URUGUAY Y SUSCITACION

	DEL CONFLICTO.....	44
2.1	Hechos y antecedentes del conflicto.....	44
2.2.	Concesión unilateral de autorizaciones previas de construcción.....	46
2.3	Negociaciones diplomáticas.....	49
2.3.1	Actuaciones de Uruguay.....	50
2.3.1.1	Proceso Arbitral ante MERCOSUR.....	52
2.3.2	Actuaciones de Argentina.....	55

CAPÍTULO 3

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ESTATUTO EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.....

3.1	Competencia.....	59
3.1.1	Competencia en materia contenciosa.....	60
3.1.2	Competencia consultiva.....	61
3.1.3	Jurisdicción en el caso particular.....	62

3.2	Desarrollo del proceso.....	63
3.2.1	Alegaciones y actuaciones de Argentina.....	63
3.2.2	Respuesta y argumentos de defensa de Uruguay.....	67
3.2.3	Procedimientos incidentales: medidas provisionales.....	69
	3.2.3.1 Providencias denegatorias emitidas por la Corte Internacional de Justicia.....	71
3.2.4	Examen al fallo de la Corte.....	74
	3.2.4.1 Opiniones Disidentes: falta de debida diligencia de la Corte.....	77
3.3	Análisis de las reglas generales de interpretación de los tratados aplicadas al caso particular.....	80
3.3.1	Interpretación del Estatuto del Río Uruguay según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.....	81
	3.3.1.1 Objetivo y fin.....	81
	3.3.1.2 Contexto.....	82
	3.3.1.3 Análisis de principios de Derecho internacional aplicables al caso y conflictos para su cumplimiento.....	88
	3.3.1.4 Aplicación de medios complementarios de interpretación.....	95
3.4	Determinación de violación del Estatuto del Río Uruguay por parte de Uruguay y efectos del fallo.....	97

CONCLUSIONES.....	100
BIBLIOGRAFÍA.....	103
ANEXO.....	114

GLOSARIO

AAP:	Autorización ambiental previa
BOTNIA:	Oy Metsä – Botnia AB
CARU:	Comisión Administradora del Río Uruguay
CFI:	Corporación Financiera Internacional
CMB:	Celulosa de M'Bopicúa
DINAMA:	Dirección Nacional de Medio Ambiente
EIA:	Evaluación de Impacto Ambiental
ENCE:	Empresa Nacional de Celulosa
GTAN:	Grupo Técnico de Alto Nivel
MERCOSUR:	Mercado Común del Sur
MVOTMA:	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
PROCEL:	Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental en el Río Uruguay en Áreas de Plantas Celulósicas

INTRODUCCIÓN

El Estatuto del Río Uruguay fue suscrito entre los países vecinos de Argentina y Uruguay a fin de reglar el uso óptimo y racional de este recurso hídrico compartido, aunque a pesar de dicho acuerdo, posteriormente surgió una controversia respecto de su aplicación y debido cumplimiento, es así como Argentina puso el caso en conocimiento de la Corte Internacional de Justicia.

Dentro del desarrollo del caso, resulta necesario estudiar cada una de las actuaciones de las partes, con el objetivo de determinar sus intenciones, peticiones y análisis particulares respecto de sus posturas contradictorias. En concordancia con esto, es preciso realizar un estudio exhaustivo de los antecedentes y hechos que provocaron el nacimiento del conflicto a fin de analizar el caso desde una postura real y no solo procesal, todo lo cual hubiese permitido a la Corte que realice un estudio global de todas las consideraciones reales en lugar de causar varios cuestionamientos y disidencias respecto de su decisión ante las solicitudes de otorgamiento de medidas provisionales, al igual que respecto del desacertado estudio de las pruebas en el fallo final y definitivo que pretendió resolver la controversia inicial.

En vista que el conflicto surgió a partir de las discrepancias respecto de la interpretación y aplicación de un tratado internacional bilateral, resulta imprescindible analizar cada uno de los objetivos y contenido del Tratado del Río Uruguay recurriendo a la herramienta eficaz de la interpretación de los tratados, a través de la cual será posible esclarecer el sentido de cada una de las cláusulas del tratado para luego proceder a determinar si existió o no realmente el incumplimiento alegado por una de las partes.

Este análisis debe ser realizado en aplicación de todos los métodos y principios establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, considerando ciertos aspectos característicos del caso como es la práctica bilateral respecto de la celebración de tratados que tratan asuntos limítrofes y uso de aguas.

Luego de realizar la interpretación sistémica del tratado, es necesario determinar si existió o no el incumplimiento a alguna de sus cláusulas y por ende la posibilidad o no de que realmente exista una reparación debida por los perjuicios causados en contra de la otra parte, al igual que la posible afectación de los derechos de sus habitantes; todo ello

considerando el desarrollo del caso conjuntamente con las disidencias de los mismos Magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Este estudio permitirá plasmar en el Tratado del Río Uruguay los principios principales que caracterizan a la práctica de la interpretación, a fin de establecer su verdadera significación y aplicación.

1. LA PROBLEMÁTICA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

1.1. Definición de interpretación de los tratados

La noción general de interpretación consiste en extraer la esencia o importancia de cualquier contenido material, sea un objeto de arte, del comportamiento de las personas, de un documento o texto legal, el objetivo es justamente comprender su sentido y alcance, considerando todos los factores que permitan su elucidación. En derecho se puede decir que la interpretación “*busca clarificar el significado de una norma*”¹. En cuanto a la interpretación de los textos y normas legales, es preciso afirmar que no existen reglas de interpretación universales que apliquen los intérpretes calificados. De acuerdo a cada rama de derecho existen distintos métodos de interpretación, igual diferencia existe entre la interpretación de textos de derecho internacional así como los textos de derecho interno, ya que los autores son distintos en cada caso. Por otro lado, la interpretación es aplicable tanto a prácticas consuetudinarias como a normas codificadas o textuales. En el primer caso, no se trata de examinar un texto, sino de analizar las actuaciones y comportamiento de los sujetos de Derecho Internacional que hayan aportado a la creación de la práctica consuetudinaria en particular², mientras que en el segundo caso es preciso enfocarse en el texto primordialmente. Existen varias concepciones acerca de la forma de analizar los textos convencionales, empezando por la concepción finalista que supone la prevalencia del fin del tratado, sus circunstancias y necesidades sociales, al sostener que “*la letra mata y el espíritu vivifica*”³. Por otro lado, existe la concepción objetivista, la cual da valor a la intención de las partes siempre y cuando haya sido plasmada en el texto, así se evidencia su inclinación a lo gramatical y lógico-sistemático; al contrario, existe la concepción subjetivista que recurre a otros medios más que al texto como son los medios complementarios, en particular los denominados trabajos preparatorios⁴, enfocándose así en lo histórico y práctico. Sea cual fuere la concepción que utilice el intérprete es necesario recordar que “*el objetivo*

¹ (Dir.) Rudolf Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law. Volumen II. Holanda, Editorial Elsevier Science B.V., 1995, p. 1417.

² Cfr. Antonio Remiro Brotons, Derecho Internacional. Madrid, Editorial McGraw.Hill, 1997, p.382.

³ Id.

⁴ Id.; *Infra*. p.18.

*fundamental [...] ha de ser descifrar la verdadera voluntad de compromiso o acuerdo de las partes*⁵, tal como lo menciona la opinión tradicional.

El profesor Fabián Novak⁶ en su prestigiosa obra literaria menciona varias definiciones acerca de la interpretación de los tratados, de las cuales cabe resaltar la de Rousseau quien la define como *“la operación intelectual que tiene por objeto determinar el sentido del un acto jurídico, precisar su alcance y esclarecer los puntos oscuros o ambiguos que puede presentar”*⁷, por otro lado De Visscher señala que la interpretación consiste en *“[...] elegir entre diversas significaciones posibles de un texto o de un comportamiento humano, aquella que aparezca al mismo tiempo la más conforme a los presupuestos respectivos y mejor adaptada a ciertos fines”*⁸. Jennings Watts señala que el propósito de la interpretación de los tratados es *“establecer el sentido que las partes han querido dar al texto”*⁹, conjuntamente Yasseen señala que la interpretación es *“la operación intelectual que tiene como fin comprender el tratado, precisar su sentido y determinar su alcance; es por naturaleza declarativa, ella deduce lo que está y no está enunciado no lo que debería ser, sobre todo no está llamada a revisar las reglas sino a llenar lagunas”*¹⁰. Aunque la definición de Ehrlich es la más completa ya que declara que la interpretación puede emplearse para cinco fines distintos:

*Descubrir la intención de los que han elaborado el texto; o encontrar el sentido del texto sin averiguar la verdadera intención de sus autores; o establecer las consecuencias que se desprenden de un texto para un caso individual; o de establecer una regla para un caso que no fue previsto por los autores del texto; o de restringir o ampliar el alcance de un texto sin considerar el texto en sí ni la intención que quisieron expresar sus autores*¹¹.

La interpretación juega un rol imprescindible en el derecho de los tratados en vista que condiciona la aplicación de un tratado internacional, permitiendo determinar el alcance y sentido a cada una de las partes que han celebrado un tratado en particular. Interpretar es

⁵ Ibid. p.383.

⁶ Fabián Novak Talavera y Luis García – Corrochano Moyano, Derecho Internacional Público, Tomo I, Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000, p.203.

⁷ Id.; En: Charles Rousseau, Derecho Internacional Público, Barcelona, Ediciones Ariel, tercera edición, 1966, p.55.

⁸ Id.; En: Charles de Visscher, L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, En : RCADI, 1976, t. III, n.º 151.

⁹ Id.; En: Robert Jennings y Arthur Watts, Oppenheim's International Law. Oxford University, p.1267.

¹⁰ Id. ; En : Mustafá Yasseen, L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités. En : RCADI, 1976 - III, t. 151, p.9.

¹¹ Id.; En: Ludwik Ehrlich, p.40.

“desentrañar el sentido de una norma jurídica”¹² lo que implica utilizar uno de los indicadores más precisos para evidenciar el significado de un texto el cual consiste en encontrar la intención de las partes tal como afirmó *Groccio* en su Libro *De jure belli ac pacis*¹³. Sin dejar de lado la importancia del texto literal, según lo mencionó *Vattel* en su obra de *Droit de gens ou principes de la loi naturelle*¹⁴, quien afirmaba además que es necesario recurrir a la intención de las partes únicamente cuando el texto es oscuro.

Es necesario considerar que un tratado internacional nace de la voluntad de las partes que han decidido crearlo, cada una de ellas con sus intenciones particulares que llegan a fusionarse con las intenciones de la otra u otras partes involucradas, todo esto a fin plasmarlas en un documento final llamado Tratado Internacional, texto aceptado en su totalidad por todos los signatarios, para así aplicarlo y ejecutarlo, es decir poner en marcha todas las normas jurídicas, derechos y obligaciones recíprocas que se generan a partir de su creación.

Tal es la importancia de la interpretación, que resulta ser el único medio para aclarar el contenido de un tratado a ser aplicado, es por ello que resulta compleja y minuciosa, sobretodo porque debe ser ejecutada de manera imparcial, reiterando la aplicación del principio *pacta sunt servanda*¹⁵ mediante el cual los Estados están llamados a cumplir de buena fe¹⁶ las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por ellos.

1.1.1 Clases de Interpretación

Es preciso identificar qué sujetos están facultados para actuar como intérpretes de los tratados internacionales, por lo cual el tratadista Jorge Pallaes Bossa¹⁷ distingue las clases de interpretación de acuerdo a quién es el intérprete y a su carácter nacional o internacional.

En primera instancia los principales intérpretes son los mismos Estados Partes del Tratado por ellos creado, ya que este texto convencional refleja la expresión absoluta y final de su voluntad, en tal razón los mismos participantes en la creación del Tratado pueden

¹² Carlos Arellano García, Primer Curso de Derecho Internacional Público, México, Editorial Porrúa, quinta edición, 2002, p. 673.

¹³ Id.; En Berhardt, p.1418.

¹⁴ Id.

¹⁵ Infra. p. 11.

¹⁶ Infra. p. 10.

¹⁷ Cfr. Jorge Pallaes Bossa, Derecho Internacional Público. Santafé de Bogotá, Editorial Leyer, 1996, p.137.

interpretarlo de forma tácita al realizar todas actuaciones consecutivas en completa armonía que conlleven a una sola interpretación del documento, sin descartar la posibilidad de hacerlo de forma expresa a través de una interpretación común, sea en el mismo tratado o a través de un acto posterior destinado justamente a la interpretación común del texto anterior; esta forma de interpretar es conocida como interpretación auténtica y es efectuada sea por las mismas partes o por el órgano facultado por ellas para hacerlo.

Por otro lado, existe la llamada “interpretación gubernativa internacional”¹⁸ realizada por uno de los Estados signatarios del tratado a través de sus órganos nacionales, cuya actuación influye directamente en la responsabilidad del Estado ante el Derecho Internacional. Es efectuada mediante actos jurídicos de derecho interno como son las leyes, decretos o reglamentos del poder ejecutivo generalmente a través de los órganos de la función exterior estatal¹⁹.

Asimismo, cabe la interpretación jurisdiccional realizada por un juez nacional o internacional cuya importancia para la doctrina es altamente considerable siempre y cuando sea debidamente motivada. El juez nacional interpreta un tratado al aplicar una disposición del mismo para la resolución de conflictos de interés privado únicamente²⁰, por lo que causa menores repercusiones y connotaciones que la realizada por el juez internacional, sin que signifique una desvalorización total. Al contrario la “interpretación jurisdiccional internacional”²¹ ocurre cuando existen divergencias acerca de la interpretación y aplicación de un tratado y los Estados partes someten a conocimiento de un juez o árbitro internacional para que éste las resuelva. Así principalmente en tratados multilaterales, cabe la interpretación por parte de los órganos de las Organizaciones Internacionales, sea porque se establezca esta posibilidad en los estatutos constitutivos de la Organización en particular o

¹⁸ Charles Rousseau, op.cit. p.55.

¹⁹ NB.: Implica todas las autoridades que componen la organización institucional interna de cada Estado, quienes aplican a diario los Tratados Internacionales son las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Cancillería, Cuerpo Consular, Diplomáticos y demás afines, quienes se manifiestan mediante Notas Diplomáticas o Circulares.

²⁰ En este caso resulta difícil determinar de qué manera el juez interno debe interpretar un tratado internacional vigente dentro de un caso particular, pero en vista que la mayoría de legislaciones de derecho interno no plantean la posibilidad de aplicar los métodos de interpretación de la normativa interna de igual manera a los tratados, sí cabe recurrir a los métodos establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.//Cfr. Jaime Harris Fernández y Enrique Campusano Puelma, El juez nacional y la interpretación de los tratados internacionales, En: Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Interpretación, integración y razonamiento jurídicos. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992, p.257.

²¹ Id.

porque el mismo Estatuto Constitutivo suponga la primacía de la aplicación de sus normas antes que cualquier otro Acuerdo entre Estados, tal como lo define la Carta de las Naciones Unidas²².

De igual manera, la Corte Internacional de Justicia, al ser el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, es competente para resolver las controversias sobre la interpretación de un tratado, tal como lo menciona el Estatuto de la Corte²³. Entre las varias funciones que cumple la Corte, emite las llamadas Opiniones Consultivas sobre distintas cuestiones jurídicas, entre ellas, la interpretación de determinados tratados, tal como lo menciona el artículo sesenta y cinco del Estatuto de la Corte²⁴, lo cual será tratado más adelante. Cabe decir que solamente determinados órganos internacionales tienen la facultad de solicitar opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia acerca de una cuestión jurídica en particular²⁵; aunque es necesario precisar que la Asamblea y Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han heredado la facultad de interpretar textos, de acuerdo a la facultad conferida con anterioridad mediante el Pacto de la Sociedad de las Naciones, respecto a la Corte Permanente de Justicia Internacional²⁶, así lo declara el artículo 96 de la

²² “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. Organización de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, Artículo 103, Internet. <http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm>, Acceso: 18 de noviembre del 2010, 16:33.

²³ “Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: (a) la interpretación de un tratado”. Organización de las Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Art. 36: (2), Internet. <http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm>, Acceso: 18 de noviembre del 2010, 16:29.

²⁴ “La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma; (2) Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañarán todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión.”, *Ibíd.*, Artículo 65 (1).

²⁵ NB: Algunos de los principales organismos facultados son: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Marítima Internacional (OMI), Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

²⁶ NB: La Corte Permanente de Justicia Internacional fue creada mediante el Pacto de la Liga de Naciones constituyendo el primer tribunal internacional con jurisdicción general. Se inauguró en 1922 y disolvió el 1946, para dar paso a la actual Corte Internacional de Justicia. // Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9>, Acceso: 18 de noviembre de 2010, 16:45.

Carta de las Naciones Unidas²⁷, aunque ésta ha sido mayormente empleada por la Asamblea General antes que por el Consejo de Seguridad²⁸. Esta interpretación es conocida como la interpretación judicial, y comprende igualmente a los Tribunales internos que aplican el Derecho Internacional.

Finalmente, es preciso referirse a la interpretación doctrinaria realizada por juristas a través de sus publicaciones, resoluciones y dictámenes; los más reconocidos son *Grocio, Rousseau, De Visscher, Vattel, Puffendorf, Wolff, Oppenheim*, entre otros, todos coincidiendo en que es necesario aplicar el principio *pacta sunt servanda*²⁹ en el desarrollo de toda interpretación que se realice.

1.1.2 Principios fundamentales de aplicación

Reconociendo que el proceso de interpretación es complejo y arduo, es necesario que todo el procedimiento sea realizado aplicando los principios básicos e imprescindibles para realizar una interpretación imparcial y completa. Siguiendo el hecho de que los tratados son creados de buena fe por sus suscriptores, resulta necesario seguir esta misma línea incluso en el momento de su aplicación y cuando se requiera su interpretación. La importancia del principio de buena fe es aplicable tanto en el derecho convencional así como en el derecho consuetudinario, ya que si no se aplicaría este principio, ningún tratado o regla consuetudinaria finalmente podrían generar efectos. Este principio resulta indispensable al momento de ejecutar las obligaciones internacionales de los Estados, ya que es preciso connotar que la mayoría de tratados internacionales implican obligaciones en cuanto al comportamiento de los Estados, antes que el resultado que generen sus acciones³⁰.

²⁷ “(1) La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. (2) Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.”, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, op.cit., Artículo 96.

²⁸ Cfr. Luis Fernando Álvarez Lodoño S.J., Derecho Internacional Público. Santafé de Bogotá, Centro Editorial Javeriano, 1998, p.102.

²⁹ Infra. p. 11.

³⁰ Cfr. Julio D. González Campos et al., Curso de derecho internacional Público. Madrid, Editorial Civitas, 1998, p.290.

Justamente en relación con las normas convencionales el artículo veintiséis del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dispone que: “*todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.*”³¹

Al mismo tiempo, el párrafo primero del artículo treintauno menciona lo siguiente:

*Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objetivo y fin.*³²

En concordancia con la Convención, el artículo dos punto dos de la Carta de las Naciones Unidas afirma que: “*Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta*”³³, esta norma extiende el deber de cumplir de buena fe las obligaciones internacionales contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos, hayan sido creados por la vía de la costumbre o del tratado.

Gracias a estas disposiciones normativas es posible determinar que el principio de buena fe se complementa directamente con el principio *pacta sunt servanda*, en vista que este último principio tiene como objetivo destacar que todos los Estados y demás sujetos de Derecho Internacional se encuentran obligados a cumplir las disposiciones acordadas y contenidas en el texto del tratado internacional por ellos suscrito y en vigor, además que están imposibilitados a invocar su derecho interno para justificar la falta de aplicación de un tratado³⁴. Precisamente como su nombre lo indica “los tratados deben ser cumplidos”, reflejando así el carácter obligatorio de las reglas convencionales también conocido como la “*santidad de los tratados*”³⁵ suponiendo una regla “*moral internacional*”³⁶ universal la cual

³¹ Organización de las Naciones Unidas, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Otorgado el 23 de mayo de 1969, entró en vigencia el 27 de enero del 1980, Series de Tratados Volumen 1155, p.331, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, Acceso: 18 de noviembre de 2010, 17:14.

³² Id.

³³ Carta de las Naciones Unidas, op.cit. artículo 2.2.

³⁴ NB: “*Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado [..].*”, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Op.cit., Artículo 27.

³⁵ (Edit.) Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público. México, Fondo de Cultura Económica, México, séptima reimpresión, 2000, p. 158.

³⁶ NB: “*La imagen de un Estado, frente a la opinión de los demás se deteriora y amerita el desprecio de los Estados de bien si realiza una conducta contraria a los cánones morales*”. Arellano, op.cit.

justamente solo puede entrañar obligaciones de tipo moral descartando todo carácter jurídico, razón por la cual varios tratadistas recurren al derecho natural a fin de darle al *pacta sunt servanda* la validez necesaria y equivalente que una regla de derecho positivo. La práctica internacional demuestra que este principio es aplicado en todo tratado internacional que se celebre, convirtiéndose en un elemento clave de la ejecución de todo sistema internacional, ya que si se omite la validez otorgada a este principio, el derecho internacional perdería su razón de ser y la comunidad internacional se vería afectada, por esta razón se ha considerado al *pacta sunt servanda* como un principio general de derecho y ocupa una “posición preeminente [...] entre las normas del derecho internacional”³⁷ sin dejar de lado que es justamente la práctica la que han permitido que este principio alcance este relieve de importancia y obligatoriedad de aplicación, razón por la cual se reconoce su naturaleza consuetudinaria. Por otro lado, el doctrinario *Max Sorensen* precisa que a partir de la buena fe se subordinan ciertas reglas que deben aplicarse al momento de realizar la interpretación de un tratado, como es la de omitir errores obvios de redacción o reproducción, entender que las partes tuvieron la intención de darle un significado al texto antes que ninguno, aplicar al tratado como una unidad permitiendo que una cláusula esclarezca a otra en caso de ambigüedades, suponiendo que las partes no han buscado algo absurdo, y otras similares³⁸.

Ligado con la buena fe, el principio de la equidad es un “*criterio jurídico alternativo*”³⁹ ampliamente conocido por su uso en la solución de controversias, el cual se basa en la ética común apartándose de la “*aplicación automática*” del derecho⁴⁰. La Corte Internacional de Justicia creado una interesante jurisprudencia al resolver múltiples casos de delimitación marítima basándose en los denominados “principios equitativos”⁴¹, justificados en el artículo 38 párrafo 2 del Estatuto de la Corte, el cual menciona lo siguiente:

p.130. Lo que demuestra que la conducta de los Estados frente a otros sí tiene una valoración por parte de los otros Estados y demás sujetos del Derecho Internacional.

³⁷ Sorensen op.cit. p.158.

³⁸ Cfr. Ibíd., p. 230.

³⁹ Juan José Quintana, Derecho Internacional Público Contemporáneo. Medellín, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 2001, p.88.

⁴⁰ Cfr. Alvarez Lodoño, op.cit. p.137.

⁴¹ Es preciso rescatar lo concerniente a la aplicación de la equidad en la interpretación de los tratados, la misma que se ha evidenciado en los antes mencionados principios equitativos utilizados por la Corte Internacional de Justicia en soluciones de controversias, como fue el caso destacado de la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine entre Canadá y Estado Unidos de América, donde la Corte rechazó las líneas de delimitación marítima expuestas por las partes y más bien bajo su criterio aplicó el método que consideró era el correcto, definió en un primer segmento una línea única perpendicular, creando así una división en partes iguales, actuó de igual manera en los

Artículo 38

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren⁴². (El subrayado me pertenece)

La doctrina determina tres funciones o clases de equidad que son *contra legem* consistente tomar a la equidad como un medio para reformar al derecho, *praeter legem* que cumple la función de complementar al derecho, y finalmente *infra legem*, consistente la atenuación de la aplicación del derecho por lo tanto cumpliendo una función interpretativa⁴³, es decir la forma más común de aplicación de la equidad⁴⁴.

El Profesor Carlos Arellano García considera incluso que la equidad es mejor que la misma justicia, ya que existen casos en que la justicia y las fuentes resulten inconvenientes por su rigidez, pero la flexibilidad de la equidad permite llegar a una solución mucho más justa y afín a las circunstancias de las partes, impidiendo así resultados injustos⁴⁵. Sin embargo, en la interpretación y aplicación de los tratados es necesario que la equidad complemente al derecho, no es preciso publicitar a la equidad como un principio contrario al derecho, la intención de la equidad en este campo de aplicación es que intérprete aprecie

otros dos segmentos restantes. Este caso evidencia que la equidad si es una fuente de aplicación para interpretar los tratados internacionales a fin de que se llegue a una solución más acorde a las circunstancias y necesidades de las partes implicadas. // Cfr. Corte Internacional de Justicia, Fallo sobre el caso de la Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine entre Canadá y Estado Unidos de América, 12 de octubre de 1984, § 190-229, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/67/6369.pdf>, Acceso 15 de noviembre del 2010, 12:32.

⁴² Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, op.cit. artículo 38.

⁴³ Cfr. Quintana, op.cit. 89.

⁴⁴ Cfr. Alvarez Lodoño, op.cit. pp.137-138.

⁴⁵ Cfr. Arellano García, p.202.

“los elementos individualizadores del caso, para complementar la aplicación de las normas”⁴⁶.

Pese a la aplicación de la equidad, al interpretar un tratado se recurre en primera instancia a la literalidad o sentido ordinario, es decir leer y entender los términos del tratado según su significación ordinaria y natural en la totalidad del texto, incluyendo el preámbulo y anexos del mismo, siempre descartando toda clase de subjetividades. Se trata dar a los términos un sentido común, considerando que los convenios no son siempre redactados por juristas, es decir que no necesariamente se aplica una terminología técnica⁴⁷.

En 1925 la Corte Permanente de Justicia Internacional ha señalado la importancia de este principio a través de la Opinión Consultiva acerca del Servicios Postales Polacos en el Danzig, tal como se evidencia a continuación:

*Es un principio esencial de interpretación que las palabras sean interpretadas en el sentido que tendrían normalmente en su contexto, a menos que dicha interpretación conlleve a algo irracional o absurdo*⁴⁸.

Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia en 1950 en la Opinión Consultiva acerca de la competencia de la Asamblea General para la admisión de un Estado en las Naciones Unidas, afirmó lo siguiente:

*La Corte considera necesario decir que el primer deber de un Tribunal llamado a interpretar y aplicar las disposiciones de un tratado, es el esforzarse en darles un efecto según su sentido natural y ordinario a estas disposiciones tomadas dentro del contexto. Si las palabras pertinente, una vez que se les atribuye su sentido natural y ordinario, tienen sentido en su contexto, se pone fin al examen en ese momento*⁴⁹.

⁴⁶ González, op.cit. p.291.

⁴⁷ Novak, op.cit. p.207.

⁴⁸ “C’est un principe fondamental d’interprétation que les mots doivent être interprétés selon le sens qu’ils auraient normalement dans leur contexte a moins que l’interprétation ainsi donnée ne conduise a des résultats déraisonnables ou absurdes.” (Texto original) Corte Permanente Internacional de Justicia, Opinión Consultiva sobre los Servicios Postales Polacos en el Danzig. Serie B, No.11, 16 de mayo de 1925, p.39, Internet. http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_11/01_Service_postal_polonais_a_Danzig_Avis_consultatif.pdf, Acceso: 17 de noviembre de 2010, 18:40.

⁴⁹ “La Cour croit nécessaire de dire que le premier devoir d’un traité, appelé a interpréter et a appliquer les dispositions d’un traité, est de s’efforcer de donner effet, selon leur sens naturel et ordinaire, a ces dispositions prises dans leur contexte. Si les mots pertinents, lorsqu’on leur attribue leur signification naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l’examen doit s’arrêter là.” (Texto original) Corte

A partir de esta declaración, es posible afirmar que la primacía del texto es un principio esencial para toda interpretación en el campo del derecho internacional, en tal razón *“cuando un juez o árbitro internacional se aparta de un texto, lo hace porque cree que debe prevalecer otro texto u otra práctica, es decir otra fuente de derecho”*⁵⁰, sin alejarse de la aplicación literal de otros documentos semejantes y aplicables al caso en particular.

A pesar de esto, existe una posible controversia ya que los términos de un tratado pudieron haber sido aplicados en su sentido común y técnico, pero en ambos casos su significación puede variar con el paso del tiempo, por lo que puede surgir el cuestionamiento sobre qué sentido de un término las partes han empleado, para lo cual cabe indicar que en aplicación de este principio, si alguien alega que se ha atribuido una significación excepcional a un término, es ineludible que debe probar la validez de su afirmación⁵¹.

Por otro lado, el contexto es un principio que estudia más allá del contenido del texto, se enfoca en analizar otros elementos que rodean las circunstancias de la creación del texto hasta su aplicación. No es posible entender un tratado solamente a través de sus palabras de forma aislada, por lo que resulta indispensable indagar en los eventos y consideraciones fuera del marco textual, incluso extendiéndose a la significación que se otorga al conjunto de tratados interrelacionados entre sí, al igual que las resoluciones acerca de las negociaciones, en fin todos los instrumentos conexos que hayan permitido la conclusión y aplicación tratado.

En concordancia con lo mencionado, la Corte Permanente Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva antes analizada sobre los servicios postales polacos en el Danzig señaló que se debe entender a los términos *“según su sentido natural y ordinario a esas disposiciones tomadas en su contexto.”*⁵²

*Max Sorensen*⁵³ plantea que el contexto se relaciona con la “regla intemporal” es decir el determinar el derecho vigente en el tiempo de redacción del tratado, ya que los

Internacional de Justicia, Opinión Consultiva acerca de la competencia de la Asamblea General para la admisión de un Estado en las Naciones Unidas. 3 de marzo de 1950, p.8, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/9/1883.pdf>, Acceso: 17 de noviembre del 2010, 19:50.

⁵⁰ Paul Reuter, Introducción al Derecho de los Tratados. México, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 2001, p.127.

⁵¹ Cfr. Corte Permanente de Justicia Internacional, Fallo sobre el asunto del Estatuto Jurídico de Groenlandia Oriental. 5 de abril de 1933, p.63, Internet. http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf, Acceso: 19 de noviembre del 2010, 20:46.

⁵² Danzig, op.cit. p.39.

⁵³ Max Sorensen, op.cit. p. 231.

términos técnicos y disposiciones legales pueden variar en cuanto a su significación con el pasar del tiempo, por lo tanto es necesario aplicar este principio para lograr una comprensión más amplia de los términos del tratado y finalmente interpretar al tratado de la manera más eficiente.

Es necesario además que el intérprete analice la totalidad del texto considerando que éste fue creado para que sea eficaz y válido, es decir orientado a cubrir necesidades de las partes que buscan satisfacerlas a través del tratado suscrito. De tal manera que si en el tratado se menciona el objetivo y fin que busca, no habrá mayores dificultades en su interpretación, ya que es indispensable adecuar el tratado al propósito buscado por las partes, semejante al principio *ratio legis* en referencia a los contratos civiles.

Así la Corte Internacional de Justicia a través de su Opinión Consultiva acerca del Estatuto Internacional del África Sudoccidental, acogió este principio al hacer no tomar la significación usual en derecho interno del término “mandato” sino que lo interpretó en su concepción internacional, constituyendo un instrumento a través del cual se entiende que los derechos de los Estados no habrían caducado únicamente por la disolución de la Sociedad de Naciones, sino que este Mandato cumplía el objetivo de salvaguardar los derechos de los Estados y pueblos en todas las circunstancias y consideraciones, hasta que cada territorio esté ubicado bajo el Régimen de Tutela tras la disolución de la Sociedad de Naciones⁵⁴; así la Corte evidenció que cuando el sentido natural y ordinario de los términos no es compatible con el espíritu y objetivo del instrumento jurídico, no resulta válida una interpretación literal aislada.

Las negociaciones previas a la suscripción del tratado permiten dilucidar la autenticidad de la intención y voluntad de las partes que se encuentran plasmadas en las declaraciones unilaterales que estas realicen en Notas Diplomáticas, circulares, y demás comunicados o actuaciones creadas sin ninguna clase de presión, fuerza o coerción que los obligue a actuar consecuentemente. Aunque es necesario identificar la forma y momento en que la parte haya expresado su intención, siempre “otorgando la precedencia a su manifestación más inmediata.”⁵⁵

⁵⁴ Cfr. Corte Internacional de Justicia, Opinión Consulta sobre el Estatuto Internacional del África Sudoccidental. 11 de julio de 1950, p.8 y 10, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/10/1891.pdf>, Acceso: 22 de noviembre del 2010, 14:12.

⁵⁵ Paul Reuter, op.cit. p.128.

Finalmente, en caso de que alguna norma convencional del tratado genere dudas respecto de su aplicación, es preciso interpretarla en base a los principios de derecho internacional, además de tomar en consideración el tema y objeto del tratado ya que a partir de éste podemos determinar los principios específicos aplicables, sea en materia medioambiental, marítima, administrativa, territorial, etc. permitiendo así una clarificación técnica y amplia del tratado. Así nos encontramos ante la llamada interpretación evolutiva, justificándose en la prevención de causar un daño, tal como ha sido ampliamente desarrollada en derechos humanos⁵⁶, actualmente se pretende extender su aplicación a otras áreas del derecho, más aun en materia medioambiental en concordancia con el principio precautorio el cual pretende ejercer todo control o sanción en contra de toda acción que pueda poner en riesgo al ambiente.

1.1.3 Métodos de Interpretación

Existen distintos métodos empleados en la interpretación de los tratados, sea centrándose de manera objetiva en el texto aplicando un razonamiento lógico y gramatical, sea desde un punto de vista subjetivo analizando la intención y voluntad de los Estados partes, o buscando el objetivo y fin del tratado⁵⁷; aunque en todos los casos siempre se debe realizar una interpretación imparcial y total del texto que permita clarificar el contenido del tratado internacional y así ser aplicado para que genere los efectos para el cual fue creado en un principio.

El método textual es el más usual debido a que la primacía del texto es reconocida por el derecho internacional como una aplicación necesaria en toda interpretación que se realice, es así como se analiza al texto o conjunto de textos relacionados como una unidad, considerando si los términos han sido empleados en el sentido corriente o técnico al

⁵⁶ *“Esta orientación adquiere particular relevancia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado mucho mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación de los tratados consagradas en la Convención de Viena de 1969. Tanto esta Corte [...] como la Corte Europea de Derechos Humanos [...] han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.” “[...] Esta Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo”.* Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-16/99 “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, solicitada por México, 1 de octubre de 1999, § 114 y 115, Internet. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf, Acceso: 22 de noviembre del 2010, 22:40.

⁵⁷ Cfr. González, Ibíd. p. 301.

momento de la creación del texto, porque incluso con el pasar del tiempo las palabras pueden cambiar de significado⁵⁸, en tal razón prima la lógica y la gramática. Este método supone que en el texto final ya se encuentra plasmada la intención y voluntad de las partes, por lo que no es necesario indagar sobre la voluntad de las partes como tal. Además toma en consideración todos los idiomas en los cuales haya sido creado el instrumento a fin de evitar confusiones en las distintas adaptaciones. Pero este método no es absoluto, ya que en ciertos casos el tenor resulta insuficiente al momento de interpretar un texto, por lo que cabe recurrir a otros criterios complementarios⁵⁹.

Al contrario del método textual, se recurre al método subjetivo cuando se busca establecer la intención y voluntad de las partes, es decir explorar qué necesidad los Estados partes desean satisfacer y por qué razón mediante ese tratado internacional determinado, para lo cual se requiere analizar el comportamiento de las partes en el tiempo antes y después de crear dicho tratado. Se puede considerar como un criterio insuficiente al momento de interpretar el texto⁶⁰ por lo que se complementa con el estudio tanto de la voluntad histórica plasmada en los trabajos preparatorios⁶¹ previos a la creación del tratado, al igual que con la conducta ulterior de las partes.

Cabe decir que este método ha sido fuertemente criticado e incluso descartado por varios tratadistas, entre ellos *De Visscher* al afirmar que el indagar en la intención de las partes no siempre arroja resultados totalmente confiables y no siempre constituyen una fiel evidencia de la intención de las partes⁶², ya que puede haber errores o cambios en los trabajos preparatorios, negociaciones, incluso falta de participación de algunos Estados cuando se trata de tratados multilaterales.

Finalmente es posible acudir al método teleológico consistente en identificar los fines, objetivos y función general que busca el tratado, considerando el medio social que están atravesando los Estados partes según el cual el tratado fue creado⁶³. Resulta interesante que este método es más dinámico que los demás porque indaga todos los elementos externos

⁵⁸ Cfr. Sorensen, op.cit. p.230.

⁵⁹ Cfr. Matthias Herdegen, Derecho Internacional Público. México, Universidad Autónoma de México, 2005, p.135.

⁶⁰ Ibid. p. 136.

⁶¹ Infra. p. 18.

⁶² Marco Gerardo Monroy Cabra, Derecho de los Tratados. Santafé de Bogotá, Editorial Leyer, segunda edición, 1995, p. 142.

⁶³ Cfr. Novak, op.cit. p. 205.

que rodean al tratado en particular, por lo que cabe analizar varias dimensiones de los Estados partes como es el análisis de la situación económica e interés social, la relación que mantengan con los demás Estados, la posibilidad de que se encuentren atravesando una crisis social y demás situaciones que influyan de alguna manera en la conclusión y aplicación del tratado.

Supremamente entre estos tres métodos existe una prelación del método textual, en vista que el texto configura el *consensus* de las partes, es decir que constituye la máxima y más pura expresión de voluntad de las partes que han suscrito el tratado internacional, por lo que si es posible leer y entender el texto en su sentido común, no es necesario recurrir a ningún método de interpretación ya que no existirían convergencias relevantes entre las partes. Ahora bien, se puede discrepar al respecto en el caso de los tratados bilaterales, quienes al guardar una gran similitud con un contrato, se evidencia una preeminencia del método subjetivo ya que la intención de las partes prima tanto en el momento de la creación del mismo como en el momento de su aplicación, al contrario de los contratos multilaterales donde las intenciones de los Estados partes se difuminan y pierden una relevancia significativa⁶⁴.

1.1.4 Medios Complementarios de Interpretación

Como su nombre lo indica, se trata de medios supletorios a los cuales es necesario recurrir únicamente cuando las fuentes principales y más próximas aún no nos permitan esclarecer los términos del tratado que estamos interpretando. Constituyen una herramienta útil, efectiva, imparcial y cierta que busca analizar otros elementos menos resaltados acerca de las condiciones, conductas y situaciones en las que se haya encontrado o encuentre alguno de los Estados partes.

Un primer medio complementario de interpretación son los trabajos preparatorios, expresados principalmente en actas, propuestas, debates, declaraciones unilaterales y negociaciones previas que han llevado a cabo las partes antes de concluir con la redacción del texto final del tratado, permitiendo confirmar el sentido del tratado a fin de evitar interpretaciones divergentes. Se trata del procedimiento donde se indaga en la voluntad

⁶⁴ Cfr. Julio Barboza, Derecho Internacional Público. Argentina, Editor Zavallía S.A., 2001, pp.123-124.

histórica de las partes durante todo el proceso de la elaboración del texto hasta su firma y adopción.

La Corte Permanente de Justicia Internacional afirmó lo siguiente en la Opinión Consultiva sobre la Interpretación de la Convención de 1919 relativa al trabajo nocturno de mujeres:

*En el transcurso de los debates [...] múltiples delegados, expertos en la materia, expresaron categóricamente la opinión de que la convención se aplicaba únicamente a obreras. Sus opiniones afectaron de tal manera a la Corte, por lo que fue obligada a examinar los trabajos preparatorios de la convención a fin de indagar si estos confirmaban o no las opiniones expresadas en Ginebra. [...] la Corte no pretende derogar la regla expuesta precedentemente por ella en varias ocasiones, a saber que no hay lugar para recurrir a los trabajos preparatorios cuando el texto de una convención es suficientemente claro por sí mismo.*⁶⁵

Por otro lado, en el Asunto de *Lotus* la Corte afirmó que no se debe considerar a los trabajos preparatorios como una regla de aplicación inmediata, tal como se evidencia a continuación:

*La Corte debe recordar en este orden de ideas lo que ha dicho en varios de sus fallos y opiniones consultivas, a saber que no hay lugar para tener en cuenta a los trabajos preparatorios si el texto de una convención es suficientemente claro por sí mismo*⁶⁶.

Es preciso señalar que los trabajos preparatorios no siempre permiten esclarecer dudas acerca de la voluntad de las partes, ya que hay lugar a errores, por ejemplo en tratados multilaterales ciertos Estados pudieron no haber concurrido a las negociaciones, incluso existe la posibilidad de que los trabajos preparatorios hayan sido desechados o

⁶⁵ “*Au cours de débats [...] plusieurs délégués, experts en la matière, ont exprimé catégoriquement l’opinion que la convention ne s’appliquait qu’aux ouvrières. Ces opinions ont tellement frappé la Cour que celle-ci a été amenée à examiner les travaux préparatoires de la convention afin de rechercher s’ils confirmaient ou non les opinions exprimées à Genève [...] la Cour n’entend en rien déroger à la règle précédemment posée par elle à diverses reprises, à savoir qu’il n’y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires lorsque le texte d’une convention est suffisamment clair en lui-même*”. (Texto original) Corte Permanente de Justicia Internacional, Opinión Consulta sobre la Interpretación de la Convención de 1919 relativa al trabajo nocturno de mujeres, 15 de noviembre de 1932, p.17, Internet. http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_50/01_Travail_de_nuit_Avis_consultatif.pdf, Acceso: 23 de noviembre del 2010. 12:40.

⁶⁶ “*La Cour doit rappeler dans cet ordre d’idées ce qu’elle a dit dans certains de ses arrêts et avis précédents, savoir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des travaux préparatoires si le texte d’une convention est en lui-même suffisamment clair*.” (Texto original). Corte Internacional de Justicia Internacional, Fallos sobre el Asunto de Lotus, 7 de septiembre de 1927, p.16, Internet. http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf, Acceso: 23 de noviembre del 2010, 13:26.

efectivamente adoptados, por lo que no es preciso tomarlo como un principio absoluto o certero en su totalidad⁶⁷. De todas maneras, los trabajos preparatorios permiten clarificar términos técnicos empleados al igual que el fin y objetivo del tratado, por lo que resulta ser una herramienta útil en todo proceso de interpretación.

Un segundo medio complementario supone que los tratados internacionales deben ser interpretados de manera tal que cumplan un efecto útil antes que ninguno, ya que cada una de sus cláusulas fue creada a fin de cubrir alguna necesidad o solucionar algún problema determinado, en tal razón cuando una cláusula no es clara en cuanto a su contenido, cabe recurrir al Estado parte que la creó o propuso inicialmente a fin de que clarifique sus intenciones primitivas además de los fines y objetivos buscados por él al momento de plantearla⁶⁸. Asimismo, para encontrar un efecto a las cláusulas o cuando exista una duda de su contenido se debe recurrir al derecho consuetudinario para realizar una correcta interpretación del tratado en cuestión, tal como lo establece el artículo 31 (3) (c) de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, el cual se tratará más adelante.

La jurisprudencia internacional reconoce esta herramienta en el asunto del Canal de Corfú donde la Corte Internacional de Justicia afirmó que sería contrario a las reglas de interpretación que una disposición no genere ningún compromiso o efecto y resalta la importancia de los efectos prácticos de un tratado antes que los motivos que inspiraron a su creación, y por otro lado, afirma que es necesario interpretar las cláusulas de tal manera que permitan desplegar sus efectos útiles⁶⁹.

En fin, buscar el efecto útil de un tratado pretende suponer que las partes quisieron darle un significado y propósito a las palabras empleadas para que el tratado opere y genere efectos tendientes a satisfacer el objetivo y finalidad del mismo. Aunque es preciso recordar que debe ser aplicado en base a las herramientas verídicas del tratado descartando la creación de expectativas más allá de las disponibles.

De la mano con este medio complementario, encontramos el llamado *in dubio mitius* el cual afirma que cuando exista una duda acerca de una cláusula convencional que pueda suponer una restricción a la libertad de actuar de un Estado, se debe procurar afectarlo lo

⁶⁷ Cfr. Sorensen, op.cit. p.232.

⁶⁸ Álvarez op.cit., p. 104.

⁶⁹ Cfr. Corte Internacional de Justicia, Fallo sobre el Asunto del Canal de Corfú: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Albania. 9 de abril de 1949, p.24, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf>, Acceso: 23 de noviembre del 2010, 18:57.

menos posible. Su aplicación se orienta más a los tratados que suponen contraprestaciones entre los Estados signatarios del mismo, similar a un intercambio⁷⁰. No obstante es necesario señalar que cuando no existe duda al respecto, toda restricción de libertad debe interpretarse en sentido estricto⁷¹, es decir que no cabe restringir la aplicación del tratado a fin de favorecer a una soberanía estatal determinada.

Recogiendo todos estos medios complementarios, es preciso realizar un análisis sistemático del tratado, indagado en los elementos intrínsecos del tratado, es decir que además de trabajar sobre el texto, se recurra al preámbulo, anexos y contexto que lo componen; de igual manera trabajando sobre los elementos extrínsecos relacionados al tratado, entre los cuales figura la práctica posterior que ejercen las partes en cuanto a la aplicación del tratado y las circunstancias sociales de los Estados partes en la época de la concesión y conclusión del tratado, tomando en cuenta que “*el derecho internacional refleja las necesidades de la vida social*”⁷², por lo tanto reconocemos que el derecho variará mientras las necesidades sociales sigan emergiendo, en tal razón se da cumplimiento al principio doctrinal de la intertemporalidad, el cual afirma que un instrumento internacional debe ser interpretado según el derecho y circunstancias presentes en el tiempo en el cual fue creado mas no según las vigentes en el momento en que surge las controversia relativa al tratado, por lo tanto el juez debe fallar e interpretar de acuerdo a los hechos o conocimientos que constituyen el caso, excluyendo cualquier acto posterior al fallo o interpretación⁷³.

1.2 Los efectos y aplicación de los tratados

Una vez realizada la debida interpretación de un tratado comprendiendo su texto, objetivos, fines, efecto útil y demás implicaciones, es posible aplicar un tratado internacional entendiendo que las partes lo crearon para que cumpla un propósito real y posible. Es así como el texto plasmado en un documento empieza a generar sus efectos al ser ejecutado por las mismas partes que lo han creado.

Tal como lo evidenciamos con anterioridad, el principio de buena fe se manifiesta en cada una de las etapas de creación, interpretación y aplicación de un tratado internacional.

⁷⁰ Cfr. Herdegen, op.cit. p.137.

⁷¹ Álvarez, op.cit. p.104.

⁷² Ibíd. p.105.

⁷³ Novak, op.cit. p. 215.

Desde el inicio, el consentimiento otorgado por las partes es manifestado de forma libre y voluntaria con la finalidad de concertar un acuerdo y así plasmarlo en un texto, luego cuando se requiere de la interpretación del tratado, de igual manera se realiza un estudio del mismo a fin de encontrar su verdadera significación y finalidad, descartando toda subjetividad que desvíe el objetivo de la interpretación; y finalmente un tratado internacional se aplica considerando el principio *pacta sunt servanda*⁷⁴ reconociendo que un tratado vincula a las partes y debe ser cumplido de buena fe⁷⁵. Debido a que un tratado internacional es creado por voluntad de las partes, no existe justificación para su inejecución, de igual manera el tratado no desaparecerá necesariamente por el simple hecho de que una de las partes lo haya incumplido, sino al contrario, puede entrañar la responsabilidad del Estado que incumplió.

Este carácter obligatorio de aplicación de un tratado internacional se desarrolla en el ámbito de la moralidad de un Estado, por lo que su imagen internacional resultaría en juego si deja de cumplir un tratado, es así como generalmente un tratado tiene fuerza de aplicación en el tiempo, pese a los cambios de gobierno o transformaciones sociales y políticas que pueda experimentar un Estado, además, un tratado prima antes que cualquier disposición de derecho interno que disponga como aplicarlo, razón por la cual no cabe justificar el incumplimiento de un tratado al invocar disposiciones de derecho interno⁷⁶.

Por otro lado, la regla general es que un tratado internacional se aplique en la totalidad de la jurisdicción de cada uno de los Estados parte, salvo que posea colonias o protectorados, donde pueden surgir dificultades en su aplicación en caso de no determinarlo claramente, por lo que es preciso que las partes señalen sus intenciones extensivas o limitadas de la aplicación territorial del tratado que constituyen⁷⁷.

De igual manera, la aplicación temporal del tratado generalmente dispone que las disposiciones de un tratado se aplican para el futuro sin generar un efecto retroactivo, pero la dificultad surge cuando no se logra distinguir si el hecho o situación efectivamente se realizó y concluyó previo a la firma del tratado, o cuando existen tratados consecutivos sobre la

⁷⁴ Supra p.11.

⁷⁵ Charles Rousseau, op.cit. p.50.

⁷⁶ Supra p. 10.

⁷⁷ Cfr. Max Sorensen, op.cit. p. 234.

misma materia, todo lo cual pese a las reglas establecidas, puede aclararse mediante una práctica judicial ampliada⁷⁸.

En cuanto a la aplicación subjetiva de los tratados, se entiende que el tratado internacional solo genera efectos relativos a las partes, salvo ciertas excepciones⁷⁹. En particular, cada Estado contratante aplica el tratado a través de sus gobernantes, es decir a través de las autoridades que ejercen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La doctrina en general señala que un tratado no es una fuente de derecho interno, sino que entraña obligaciones entre Estados, por lo que en la práctica se considera necesario que el poder ejecutivo promulgue un acto jurídico interno para que un tratado forme parte del su ordenamiento jurídico, sea mediante una ley, ordenanza, etc. pasando a ser una norma obligatoria interna. El mismo caso se aplica al poder legislativo, el cual también es competente para crear una ley que permita que el tratado internacional genere sus efectos. Finalmente el poder judicial ejerce la doble función de aplicar un tratado cuando ya ha sido ratificado y debidamente publicado, e interpretarlo cuando resulta necesario emplearlo para resolver una situación jurídica interna⁸⁰.

1.3 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y su obligatoriedad de aplicación

Hemos ya analizado los principios que se deben cumplir al interpretar un tratado internacional para que éste pueda ser finalmente aplicado, conjuntamente con el respaldo de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, los cuales evidencian una práctica reiterada de los mismos, constituyendo la prueba más transparente acerca de su ejecución. Es preciso determinar a continuación cómo esta práctica consuetudinaria logró plasmarse en un documento que recoja cada uno de los principios y determine los métodos estándares para que los aplique todo Estado al momento de interpretar y aplicar un tratado internacional.

⁷⁸ Cfr. Paul Reuter, op.cit. p.131-132.

⁷⁹ NB: Existen determinados tratados que benefician a terceros Estados, como es el caso de los tratados relativos a las vías de comunicación internacionales; al igual que existen tratados que obligan a terceros no contratantes como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas, la misma que en su artículo segundo afirma que los Estados en general deberán actuar manteniendo la paz y seguridad internacionales, buscando la solución pacífica de controversias y absteniéndose de la amenaza o uso de fuerza, dando cumplimiento a la Carta, Tratado General de la Renuncia de la Guerra y al derecho consuetudinario.

⁸⁰ Cfr. Charles Rousseau, op.cit. p.53-54.

1.3.1 Antecedentes

Es necesario iniciar recordando que desde el último cuarto del siglo diez y ocho *Jeremy Betham* promovió la creación de una serie de intentos de codificación conocido luego como el “*Movimiento de Codificación*” basándose en la presunción de que el derecho internacional escrito permitiría acabar con toda incertidumbre del derecho consuetudinario, al precisar conceptos abstractos que permitan una aplicación práctica⁸¹. Fue así como en 1947 en cumplimiento de uno de sus objetivos⁸², la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un órgano subsidiario denominada Comisión de Derecho Internacional⁸³, cuya función consiste en fomentar el desarrollo progresivo del derecho internacional mediante la elaboración y codificación de proyectos de convenciones sobre temas aun no regulados por el derecho internacional o sobre los cuales no existan normas suficientemente codificadas, pese a la amplia práctica, doctrina y precedentes ya existentes⁸⁴.

A partir de su primera sesión en 1949, la Comisión empezó la ardua tarea de codificar un texto único sobre la Ley de los Tratados, recogiendo todos los preceptos del derecho consuetudinario vigentes en esa época, a fin de que esta Ley comprenda todas las implicaciones de la interpretación, aplicación y efectos de los tratados internacionales de todos los Estados. Fue así como a través de sus Libros Anuales, expresó las conclusiones de sus estudios y resaltó la importancia de la buena fe en toda interpretación y aplicación de un tratado, al igual que la relevancia de recurrir a los trabajos preparatorios para aclarar puntos ambiguos⁸⁵. Incluso la Comisión se basó en los siguientes principios de *Fitzmaurice* para determinar el proceso de interpretación de los tratados: (a) interpretación textual, (b) sentido natural y ordinario de las palabras, (c) considerar al tratado como parte constitutiva

⁸¹ Comisión de Derecho Internacional, Introducción. Internet. <http://www.un.org/law/ilc/index.htm>, Acceso: 24 de noviembre del 2010, 22:03.

⁸² NB: “(1) *La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: (a) fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación*”. Carta de las Naciones Unidas, op.cit., artículo 13.

⁸³ NB: Organización de las Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General No. 174 (II), 21 de noviembre de 1947 sobre la Creación de una Comisión del Derecho Internacional, Internet. [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRes%2F174+\(II\)&Submit=Search&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRes%2F174+(II)&Submit=Search&Lang=E), Acceso: 24 de noviembre, 22:14.

⁸⁴ Comisión de Derecho Internacional, Introducción, op.cit.

⁸⁵ Cfr. Paul Reuter, op.cit. pp.128-129.

de un todo, (d) efecto útil del tratado⁸⁶, (e) práctica ulterior⁸⁷, (f) contemporaneidad del tratado, es decir la época en el cual concluyó⁸⁸.

A partir de todas las recopilaciones y estudios, la Comisión logró codificar lo que luego sería la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo contenido fue adoptado casi en su totalidad, salvo el principio de intertemporalidad⁸⁹, aunque cabe resaltar que cualquier exclusión de reglas subsidiarias no afecta a la Ley de los Tratados, ya que la misma Comisión en uno de sus Libro Anuales señala que los métodos aplicados por la jurisprudencia internacional no son directivas de obligatorio cumplimiento, sino que constituyen directivas para los Estados:

*[...] todas las “reglas” de interpretación tienen el carácter de “directivas” debido a que su aplicación en un caso en particular depende mucho en la apreciación del contexto y de las circunstancias del punto a ser interpretado. Pero en la comunidad internacional, donde el rol de la interpretación de los tratados es tan importante y donde recurrir a la adjudicación depende de la voluntad de las partes, puede existir una valoración particular en codificar como reglas dichos principios básicos de interpretación al ser aceptados generalmente como ley.*⁹⁰

Pese a esto, la jurisprudencia internacional ha demostrado lo contrario al utilizar estos conceptos como principios normativos de aplicación, justamente por considerar a la Codificación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados como la máxima recopilación de los principios de interpretación y aplicación, al evidenciar una síntesis auténtica de las conclusiones alcanzadas por la Comisión.

1.3.2 Contenido

Luego de varias sesiones⁹¹, finalmente el veinte y dos de mayo de mil novecientos sesenta y nueve la Conferencia adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los

⁸⁶ Supra p. 20 y 88.

⁸⁷ Supra p. 28.

⁸⁸ Cfr. Jorge Pallares Bossa, op.cit. p.141.

⁸⁹ Supra 21.// Ver: Novak, op.cit. p. 215.

⁹⁰ Comisión de Derecho Internacional, Libro Anual de 1966, Volumen II, p.94, [http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes\(e\)/ILC_1966_v2_e.pdf](http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1966_v2_e.pdf), Acceso: 25 de noviembre de 2010, 0:37.

⁹¹ Ver: La Asamblea General del 5 de diciembre de 1966 decidió convenir una conferencia internacional de plenipotenciarios a fin de considerar a la Ley de los Tratados y enmarcarla en una convención internacional, a partir de lo cual entre el 26 de marzo y 24 de mayo de 1968 se llevó a cabo la primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, llevada a cabo en Viena, Austria donde se analizó el Borrados de artículos realizado por la Comisión

Tratados, compuesto por su preámbulo, ochenta y cinco artículos y un anexo, cuya aplicación se dirige a los tratados escritos celebrados entre Estados, tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados creados en el seno estas organizaciones, descartando la inclusión de acuerdos no escritos, sin que esto afecte su validez jurídica y aplicación⁹². Es preciso señalar además que todos los Estados tienen capacidad para celebrar tratados⁹³, definiendo a este último concepto como “*un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos cualquiera que sea su denominación particular*”⁹⁴.

Para la adopción un tratado se necesita del consentimiento de todos los Estados que participen en su creación, para así proceder a su autenticación, sea siguiendo el procedimiento prescrito en el mismo tratado o mediante la firma de los representantes de los Estados contratantes⁹⁵. Existen varias formas de manifestación del consentimiento que son las siguientes: canje, firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión⁹⁶. En particular el canje es una forma de obligarse por el consentimiento otorgado por parte de un Estado contratante, ya que una vez celebrado el tratado, se requiere que los Estados canjeen entre sí dicho instrumento a fin de que entre en vigor y genere los efectos para los que fue creado⁹⁷. Una vez que un tratado se encuentra en vigor, según lo señala la misma Convención, los Estados están obligados a cumplirlo de buena fe por lo que no pueden invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento al mismo⁹⁸.

Por otro lado, la Convención destina la sección tercera de la Parte III para referirse a la interpretación de los tratados, donde en su artículo treinta y uno empieza señalando las siguientes reglas generales de interpretación:

de Derecho Internacional. La segunda sesión tuvo lugar entre el 9 de abril y el 22 de mayo de 1969, donde se analizó el contenido de todos los artículos de acuerdo a las consideraciones de los Estados miembros y demás organizaciones presentes. Naciones Unidas, Resumen sobre la Convención de Viena, http://untreaty.un.org/ilc/summaries/1_1.htm, Acceso: 25 de noviembre del 2010, 13:34.

⁹² Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, op.cit. artículos 3 y 5.

⁹³ Cfr. Ibíd., Artículo 6.

⁹⁴ Ibíd., Artículo 2 (1) (a).

⁹⁵ Ibíd., Cfr. Artículo 10.

⁹⁶ Ibíd., Cfr. Artículo 11.

⁹⁷ Ibíd., Cfr. Artículo 13.

⁹⁸ Ibíd., Cfr. Artículos 26 y 27.

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

A partir de este primer enunciado podemos evidenciar la importancia sobre la aplicación de la buena fe no solo en la aplicación de los tratados sino también en su interpretación, donde existe un predominio del texto y del sentido ordinario de los términos, considerando el contexto del mismo, además del objeto y fin del tratado, ya que todo tratado es creado con el fin de satisfacer una necesidad de los Estados contratantes, al igual que un contrato privado.

Como segundo enunciado, la Convención amplía la significación del contexto de un tratado al afirmar que:

2. El contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;

Es indispensable considerar al tratado como una unidad, ya que la clarificación del mismo puede sustentarse en cualquiera de las partes que lo compone, desde el inicio hasta el último renglón escrito evidencian un texto final creado por la voluntad de las partes. Es tal la importancia de las partes asociadas al cuerpo del tratado, que incluso varios doctrinarios consideran que el preámbulo puede crear obligaciones jurídicas a través de las cuales los Estados contraen un compromiso jurídico de cumplimiento, justamente porque en un preámbulo se determina el objeto y fin de un tratado⁹⁹. Adicionalmente, los acuerdos posteriores al tratado también permiten dilucidar aspectos de un tratado al interpretarlo, ya que al seguir una misma línea de orientación, nos permite aclarar las intenciones de las partes acerca de sus fines. Finalmente, todo instrumento creado por al menos alguna de las partes, permite indagar claramente en la voluntad de ellas, ya que una declaración unilateral por ejemplo, constituye la más pura manifestación de las intenciones de uno de los Estados parte.

⁹⁹ Cfr. Marco Monroy Cabra, op.cit. pp. 147-148.

Finalmente en su tercer y cuarto enunciados, la Convención dispone varias reglas de igual importancia a las anteriores:

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones:

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado:

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

La Convención reconoce la interpretación auténtica realizada por los Estados partes de un tratado como una regla general de aplicación, ya que los mismos creadores del texto resultan ser los más aptos para clarificarlo, constituyendo así una interpretación expresa del texto, sin descartar la posibilidad de una interpretación tácita del mismo, la cual consiste en la práctica ulterior a la aplicación del tratado, ya que si una conducta realizada por una de las partes es aceptada por la otra y viceversa, nos encontraríamos frente a una interpretación no expresa pero sí válida. Asimismo, todos los Estados tienen la obligación de cumplir con las disposiciones generales que impone el derecho internacional, por lo que cabe recurrir a éste cuando resulte necesario. En último lugar, en concordancia con el primer enunciado acerca del sentido ordinario de términos, es preciso señalar la necesidad de que las partes expresen su intención de otorgarle un sentido especial a cualquier término, caso contrario el significado ordinario prevalecerá.

Adicionalmente a esta disposición general, la Convención concede la posibilidad de recurrir a medios complementarios de interpretación, donde sin establecer una lista taxativa, señala de manera particular a los trabajos preparatorios y las circunstancias de su celebración, sea para confirmar el sentido tras la aplicación del artículo treinta y uno o para clarificar el sentido ambiguo, oscuro o irrazonable a pesar de haber aplicado dicho artículo¹⁰⁰.

Finalmente, si pese a revelar estas reglas de aplicación e interpretación, una de las partes viola gravemente un tratado, la otra está facultada para darlo por terminado o

¹⁰⁰ Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, op.cit. artículo 32.

suspender su aplicación total o parcialmente¹⁰¹. Se considera una violación grave si se trata de “*un rechazo del tratado no admitido por la presente Convención*”¹⁰² o cuando se viole “*una disposición esencial para la consecución del objetivo o del fin del tratado*”¹⁰³.

1.3.3 Obligatoriedad de aplicación

Tal como se mencionó con anterioridad, la Comisión de Derecho Internacional expresó que las disposiciones del Proyecto de Artículos sobre el Derecho de los Tratados que pasarían luego a ser la Convención de Viena, no son de aplicación obligatoria, al constituir directivas de orientación para la interpretación y aplicación de los tratados internacionales. Aunque existen varias opiniones doctrinarias acerca de la obligatoriedad de aplicación, ya que algunos desconocen esta obligatoriedad, al considerar que solo fueron creadas según los principios lógicos y de sentido común de general aceptación en esta materia; otros afirman que son obligatorias únicamente para los Estados partes de la Convención de Viena ya que la interpretación muchas veces es considerada como un arte antes que una disposición vinculante o ciencia exacta¹⁰⁴, considerando a la Convención como un texto doctrinario o un modelo de conducta; justifican además la interpretación que realizan los órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales, basándose en el principio de independencia de poderes, por lo que podrían crear sus propios criterios de interpretación de manera autónoma, salvo la Corte Internacional de Justicia, quien está obligada a aplicar las disposiciones de la Convención de Viena, tal como lo señala su Estatuto; de igual manera estarían obligados a aplicar la Convención los Estados litigantes que así lo decidan voluntariamente en sus acuerdos¹⁰⁵.

Al contrario, otro sector doctrinario afirma que estas reglas se aplican a todos los sujetos de derecho internacional, aun para quienes no son parte de la Convención de Viena, primeramente porque su intención al crearlas fue la de concertar y unificar el ordenamiento jurídico internacional; en segundo lugar, éstas reglas se han convertido en verdaderas normas jurídicas obligatorias, porque sus artículos se han basado en una amplia jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y fueron elaboradas tras recoger todas las prácticas internacionales que se realizaban al momento de crearla, constituyendo así

¹⁰¹ Ibíd., Artículo 60 (1) y (2).

¹⁰² Ibíd., Artículo 60 (3) (a) y (b).

¹⁰³ Id.

¹⁰⁴ Encyclopedia, op.cit. p.1418.

¹⁰⁵ Cfr. Jaime Harris F., op.cit. p. 260.

efectivas reglas de Derecho Internacional y a su vez normas consuetudinarias plenamente aceptadas por la doctrina internacional¹⁰⁶, por lo que rechazan la posibilidad de considerar a estas reglas como simples patrones de conducta o doctrinarios. Finalmente, considerando que la Convención es un tratado internacional, su violación podría generar responsabilidad internacional en contra del Estado que la incumple.

1.4 El Estatuto del Río Uruguay

El Estatuto del Río Uruguay¹⁰⁷ es un tratado-contrato suscrito por el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Uruguay el veinte y seis de febrero de mil novecientos setenta y cinco, en la ciudad de Salto en Uruguay, debidamente registrado en las Naciones Unidas a fin de dar cumplimiento al artículo ciento dos de la Carta de las Naciones Unidas¹⁰⁸. Para su entrada en vigor fue necesaria la ratificación de ambos países para proceder a su canje, por lo que posteriormente a la firma del Tratado, Argentina aprobó el Estatuto mediante la Ley número 21.413 el nueve de septiembre de mil novecientos setenta y seis permitiendo finalmente su entrada en vigor el diez y ocho de septiembre de mil novecientos setenta y seis¹⁰⁹; mientras que Uruguay lo hizo mediante la Ley número 14.521 por aprobación del Consejo de Estado, el cuatro de mayo de mil novecientos setenta y seis, publicada en el Diario Oficial el veinte de mayo del mismo año bajo el número 19.764, la cual fue luego denominada como Decreto-Ley mediante Ley número 15.738¹¹⁰; en vista que ambas ratificaciones fueron efectuadas correctamente y su canje se llevó a cabo de manera efectiva, el Estatuto se encuentre vigente hasta la presente fecha.

¹⁰⁶ Cfr. Novak, op.cit. p. 215.

¹⁰⁷ República de Argentina y República Oriental de Uruguay, Estatuto del Río Uruguay. Otorgado el 26 de febrero de 1975 en Salto, Uruguay, Registro de Naciones Unidas No. 21425, http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/10/6/00018251.pdf, Acceso: 10 de noviembre de 2010, 14:30.

¹⁰⁸ "1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible." Carta de las Naciones Unidas. op.cit. artículo 102.

¹⁰⁹ Cancillería de la República Argentina, Biblioteca Digital de los Tratados, Ficha del Tratado Estatuto del Río Uruguay, convenido entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=3119, Acceso: 29 noviembre de 2010, 11:24.

¹¹⁰ Parlamento de la República de Uruguay, Ley No. 14.521, Internet. <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ AccesoTextoLey.asp?Ley=14521&Anchor=>, Acceso: 29 de noviembre del 2010, 11:27.

1.4.1 Antecedentes

Primeramente es indispensable diferenciar la noción de un río nacional e internacional, en el primero el Estado en cuyo territorio corre sus aguas, ejerce jurisdicción plena y exclusiva en cuanto a la pesca, uso agrícola e industrial, permitiendo generalmente la navegación extranjera. Al contrario, un río internacional es aquel que corre entre los límites de al menos dos Estados o aquel que los atraviesa, generalmente la soberanía de cada Estado se determina a través de una línea media divisoria media; la pesca sigue siendo un derecho exclusivo del Estado en cuya zona se ejecuta, mientras que el uso industrial o agrícola se somete a una regulación especial a fin de evitar el desvío del curso de las aguas y cualquier perjuicio que pueda ocasionar a los otros Estado¹¹¹, es decir que la regulación de estos ríos se internacionaliza al pasar a ser un instrumento para el desarrollo económico e industrial de varios países.

De manera más puntual es preciso señalar que los ríos americanos difieren de la regulación de los ríos europeos, en vista a la diversidad de condiciones geográficas y situaciones económicas de los países americanos, es así como los ríos sudamericanos no resultan interesantes para la navegación de grandes embarcaciones internacionales, sino que han sido empleados para transportar maderas, producción de energía eléctrica o uso de aguas para propósitos industriales. Es así como América ha creado su propia técnica de reglamentación fluvial caracterizada por la instrumentación de acuerdos bilaterales que generalmente establecen la libertad de navegación para barcos mercantes provenientes de cualquier Estado, al igual que prerrogativas de uso industrial, agrícola y de administración de sus aguas a favor de los Estados ribereños¹¹².

El Río Uruguay es un río internacional al correr entre los límites de los países de Argentina y Uruguay, por lo que ambos países se vieron en la necesidad de delimitar las islas e islotes que se encuentran en el Río a fin de que formen parte de sus jurisdicciones, al igual que establecer mecanismos de cooperación para el adecuado uso de sus aguas a fin de que ambos se beneficien sin perjudicar al otro. Es así como el desconocimiento de comisiones fluviales que caracterizaba a América se vio claramente transformado mediante la creación de un Estatuto que establece un mecanismo de manejo de Río creado por los

¹¹¹ Cfr. Miguel Antonio Vasco, Diccionario de Derecho Internacional. Quito, Editorial del Ministerio de Educación, 1963, p. 232.

¹¹² Charles Rousseau, op.cit. pp. 408 - 409.

países fronterizos de Argentina y Uruguay tras haber delimitado sus jurisdicciones respecto del Río, en un tratado anterior.

El denominado Estatuto del Río Uruguay hace referencia expresa al Tratado de Límites en el Río Uruguay¹¹³, suscrito por Uruguay y Argentina, el siete de abril de mil novecientos sesenta y uno en Montevideo Uruguay, la ratificación de ambos países fue necesaria para su entrada en vigor, por lo cual Argentina aprobó el Tratado mediante la Ley número 15.868 del dos de octubre de mil novecientos sesenta y uno, permitiendo su ratificación el diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis¹¹⁴. Así también, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el Tratado mediante Ley número 13.462 el veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, la cual fue publicada en el Diario Oficial el diez de enero de mil novecientos sesenta y seis bajo el número 17.263¹¹⁵.

Este Tratado además de destinar a la jurisdicción de cada país las islas e islotes que bordean una determinada sección Río Uruguay, en su artículo siete menciona la necesidad de crear el Estatuto del uso del Río a fin de tratar las siguientes materias:

- a) *Reglamentación común y uniforme para la seguridad de la navegación.*
- b) *Régimen de pilotaje que respete las prácticas actualmente vigentes.*
- c) *Reglamentación para el mantenimiento del dragado y balizamiento [...]*
- d) *Facilidades recíprocas para relevamientos hídricos y otros estudios relaciones con el río.*
- e) *Disposiciones para la conservación de recursos vivos.*
- f) *Disposiciones para evitar la contaminación de las aguas.*

Asimismo el texto incluso resalta la importancia de la cooperación argentino-uruguaya en cuanto al uso doméstico e industrial de las aguas de las islas de jurisdicción uruguaya¹¹⁶, además del respeto de los derechos reales adquiridos con arreglo a las legislaciones tanto argentina como uruguaya¹¹⁷.

¹¹³ República Argentina y la República Oriental de Uruguay, Tratado de Límites del Río Uruguay, otorgado el 7 de abril de 1961 en Montevideo, Uruguay, Registro en Naciones Unidas No. 9074., http://untreaty.un.org/unts/1_60000/18/24/00035184.pdf, Acceso: 20 de noviembre del 2010, 13:21.

¹¹⁴ Cancillería de la República Argentina, Ficha del Tratado de Límites en el Río Uruguay entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=3046, Acceso: 29 de noviembre del 2010, 12:43.

¹¹⁵ Parlamento de la República de Uruguay, Ley No. 13.462, Internet. <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ AccesoTextoLey.asp?Ley=13462&Anchor=>, Acceso: 29 de noviembre del 2010, 13:03.

¹¹⁶ Cfr. Tratado de Límites en el Río Uruguay, op.cit. artículo 8.

¹¹⁷ Cfr. Ibíd., Artículo 9.

Es así como Argentina y Uruguay concertaron sus opiniones y necesidades ya previstas en el Tratado limítrofe antes suscrito entre ellos, con el objetivo de realizar una adecuada administración del Río Uruguay, a fin de que el uso de sus aguas responda a las necesidades económicas e industriales de ambos países sin olvidar la importancia de la preservación ambiental de este recurso hídrico además de la cooperación mutua reflejada en la creación de una comisión mixta administradora, todo lo cual se encuentra plasmado en un tratado sesenta y tres artículos descrito a continuación.

1.4.2 Objetivos y contenido

El artículo primero del Estatuto describe claramente el objetivo consistente en:

[...] establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las Partes.

Es preciso mencionar que los países contratantes decidieron crear, a través del mismo Estatuto, un organismo regulador permanente que goce de personalidad jurídica y esté compuesta de número igual de delegados por cada uno de ellos, para que cumpla este objetivo y los demás establecidos en el Estatuto. Es así como se creó la Comisión Administradora del Río Uruguay, un organismo regulado por su propio reglamento interno, con capacidad suficiente para crear órganos subsidiarios y dirigir su Secretaría, cuya sede fue establecida en la ciudad de Paysandú, República Oriental de Uruguay. Entre sus funciones, se encuentra la dictar normas reglamentarias sobre seguridad naviera, prevención de contaminación, preservación de recursos vivos, además de la realización conjunta de estudios científicos, prevención de ilícitos, adopción de sistemas comunes de búsqueda y rescate, establecimiento del régimen jurídico-administrativo aplicable a las obras binacionales para luego ejercer la administración de las mismas, entre otras funciones¹¹⁸.

Una vez establecido el objetivo principal además del organismo administrador, el Estatuto desarrolla sus distintos ámbitos de aplicación, empezando por el Capítulo Segundo, donde se afirma la necesidad de otorgar mayores facilidades y seguridades para la navegación, al igual que la planificación común previa a toda realización de dragado,

¹¹⁸ Cfr. Estatuto del Río Uruguay, op.cit. artículo 56.

balizamiento y obras de conservación, enfatizando en la notificación previa a la Comisión sobre la ejecución de servicios en jurisdicción de la otra Parte.

Aunque lo más importante dentro de este Capítulo se encuentra entre los artículos siete y doce, referente al procedimiento de notificación previa a la Comisión por parte del Estado interesado en la realización de un proyecto de construcción o modificación de canales, construcción de obras nacionales o binacionales que puedan afectar la navegación, calidad de aguas o régimen del Río, así la Comisión resolverá dentro de treinta días, si la obra puede causar algún perjuicio a la otra parte; si así se resolviera o si dentro de este tiempo no se alcanzare una decisión, la Parte interesada deberá volver a notificar a través de la Comisión, pero ahora el destinatario será la otra Parte. La notificación deberá contener información esencial de la obra, datos técnicos y modo de operación, para que así la otra Parte analice las posibilidades de afectación al Río y se pronuncie acerca del proyecto en cuestión, dentro de un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la recepción de la notificación, aunque si la información recibida acerca del Proyecto es incompleta, dispondrán de 30 días para hacérselo saber a la Parte interesada, esto a través de la Comisión, así el plazo de los ciento ochenta días correría una vez que la documentación completa haya sido entregada. En caso de silencio o falta de objeciones de la Parte notificada dentro de los ciento ochenta días, la otra Parte podría autorizar la construcción de la obra proyectada; una vez que se encuentre la obra en construcción o ya en funcionamiento, la Parte notificada tiene derecho de inspeccionarla a fin de verificar si se está cumpliendo con lo establecido en el Proyecto presentado. Pero si la Parte notificada concluye que la obra sí puede causar un perjuicio al Río, deberá comunicarlo a la otra parte, a través de la Comisión, dentro de los ciento ochenta días, precisando los aspectos de la obra que considera afectarían a la navegación, régimen del Río o calidad de sus aguas, todo basado en razones técnicas, a fin de sustentar adecuadamente sus conclusiones y sugerencias de modificaciones al proyecto. Si las partes no llegaren a un acuerdo dentro de este plazo, la Comisión realizará un procedimiento conciliatorio durante ciento veinte días, y si en este plazo no llegan a un acuerdo, lo notificará a las partes para que ellas intenten solucionar la controversia mediante una negociación directa dentro de un plazo de ciento ochenta días contados a partir de esta última notificación, caso contrario como último recurso, la controversia sobre la interpretación o aplicación del Estatuto se someterá a decisión de la Corte Internacional de Justicia.

El Estatuto además de contener disposiciones sobre cooperación y asistencia mutua en el practicaje, salvamento e investigación, y facilidades portuarias, evidencia una mayor orientación hacia la protección ambiental, al destinar el Capítulo VII a la regulación del aprovechamiento de las aguas, donde establece que el derecho de cada Estado para aprovechamiento del río dentro de su jurisdicción se ejercerá para “fines domésticos, sanitarios, industriales y agrícolas” ¹¹⁹, aunque enfatiza en la necesidad de cumplir con el procedimiento de notificación antes explicado, a fin de evitar afectaciones al régimen del Río o a la calidad de las aguas, por lo que incluso señala que las partes deberán presentar semestralmente las actividades y proyectos ejecutados dentro de su jurisdicción a fin de investigar los posibles perjuicios. De la misma forma en el Capítulo VIII, se establece que los recursos del hecho y subsuelo ubicados en la zona de su jurisdicción, pueden ser explorados y explotados por cada parte, además que los residuos deben ser descargados en los vaciaderos que la Comisión determine, finalmente se concluye resaltando en la necesidad de notificar previo a cualquier procedimiento de exploración o explotación que pueda afectar al Río. Asimismo, a partir del Capítulo IX sobresale la intención de evitar la alteración del equilibrio ecológico por lo que buscan regular los volúmenes máximos de pesca, la utilización de aguas subterráneas y afluentes del Río, a fin de preservar y conservar los recursos vivos. Finalmente el Capítulo X, empieza definiendo a la contaminación al decir que: “[...] se entiende por contaminación la introducción directa o indirecta, por el hombre, en el medio acuático, de sustancias o energía de las que resulten efectos nocivos”¹²⁰, y continua estableciendo que las partes deben proteger el medio acuático adoptando las medidas adecuadas de conformidad con los convenios internacionales aplicables; y concluye indicando que si una Parte causa daños a la otra en razón de sus actividades, tiene la obligación de resarcir a la Parte afectada los daños que haya sufrido, como consecuencia de esa infracción en particular.

Es evidente que el contenido del Estatuto del Río Uruguay refleja la necesidad de la cooperación mutua a fin de establecer los mecanismos más adecuados para la utilización óptima del Río Uruguay, evitando la afectación a la calidad del agua o al régimen del Río, además evidencia la intención de preservar el medio ambiente en general; finalmente la Comisión Administradora es la mayor muestra de la importancia del Estatuto cuya intención es aplicarse de manera continua, mas aun el tener una entidad reguladora evidencia el grado

¹¹⁹ Cfr. Ibíd, Artículo 27.

¹²⁰ Ibíd., Artículo 40.

de importancia de este tratado bilateral al constituir una evidencia de la internacionalización del manejo de un recurso hídrico en cuanto al manejo del dominio fluvial.

2. INCUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DEL RIO URUGUAY Y SUSCITACION DEL CONFLICTO

2.1 Hechos y antecedentes del conflicto

El río Uruguay es un recurso hídrico compartido porque constituye la frontera de Argentina con Brasil al igual que con Uruguay, ambas delimitaciones se han establecido mediante tratados bilaterales celebrados entre ellos y vigentes hasta la actualidad¹²¹. Tal como se indicó precedentemente, Argentina y Uruguay decidieron crear el Estatuto del Río Uruguay a fin de establecer un mecanismo conjunto de administración de este río compartido¹²², con el objetivo de aprovecharlo para alcanzar determinados fines industriales y económicos tomando en consideración la necesidad de la conservación del mismo.

Luego de más de dos décadas de vigencia del Estatuto, surgió una controversia entre Argentina y Uruguay, en razón a la autorización unilateral por parte de Uruguay para la construcción de dos plantas industriales de producción de celulosa denominadas Celulosa de M'Bopicúa (de ahora en adelante CMB) y Orion, la primera a cargo de la sociedad uruguaya denominada Celulosa de M'Bopicúa S.A. (CMB)¹²³ creada por la sociedad española denominada Empresa Nacional de Celulosa¹²⁴ (ENCE), y, la segunda a cargo de

¹²¹ NB: El 27 de diciembre de 1927, Argentina y Brasil suscribieron el Tratado bilateral denominado "Convención Complementaria de Límites" que trata de los límites del Río Uruguay principalmente respecto de la Isla Brasileira del Cuareim, Argentina aprobó el tratado mediante la Ley Número 12.639, vigente desde el 9 de julio de 1941. Internet. <http://www.mrecic.gov.ar/portal/serec/ditra/br1.html>, Acceso: 09 de diciembre del 2010, 19:17. Por otro lado, el 7 de abril de 1961, Argentina y Uruguay suscribieron el "Tratado de Límites en el Río Uruguay" cuyas especificaciones ha sido tratadas en el capítulo primero de este trabajo.

¹²² Ver Supra p. 36.

¹²³ NB: Inicialmente la empresa tenía la denominación GABENIR S.A., pero procedió al cambio de la misma a Celulosa de M'Bopicúa. En: DINAMA, Detalles para Celulosas de M'Bopucúa – Gabenir S.A. – Dpto. de Río Negro, Internet. http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=73&tmpl=component&Itemid=372, Acceso: 2 de enero del 2011, 19:12.

¹²⁴ NB: ENCE es una compañía española "*dedicada al cultivo de recursos forestales para su transformación en celulosa y energía renovable*", Internet. <http://www.ence.es/es/index.html>, Acceso: 20 de enero del 2011, 17:22.

las sociedades uruguayas Botnia S.A. y Botnia Fray Bentos S.A., ambas creadas por la sociedad finlandesa Oy Metsä-Botnia AB¹²⁵, de ahora en adelante Botnia.

Es preciso determinar a continuación cada una de las etapas de ambos proyectos encaminados a la construcción de las plantas de producción de celulosa, al constituir los elementos esenciales materia de la controversia establecida.

La controversia surgió cuando ENCE proyectó la construcción de CMB ubicada en la ribera izquierda del río Uruguay, en el departamento uruguayo de Río Negro frente a la región argentina de Gualaguaychú. El diecisiete de julio del dos mil dos, los promotores del proyecto presentaron la solicitud de autorización ambiental previa (AAP) a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA), conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental en relación al proyecto planteado¹²⁶. Luego de esto, los mismos promotores comunicaron su proyecto al presidente de la CARU, quien en dos ocasiones solicitó por escrito al ministro uruguayo del ambiente la concesión de una copia de la evaluación de impacto ambiental (EIA) concerniente a CMB¹²⁷. Fue así como el catorce de mayo del dos mil tres, Uruguay remitió a CARU el documento titulado “Estudio de impacto ambiental, Celulosas de M’ Bopicúa. Resumen”¹²⁸, a partir de la cual la Subcomisión Técnica de la Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental de la CARU¹²⁹ tomó conocimiento y transmitió copias a los consejeros técnicos y a las delegaciones de ambos países, Argentina y Uruguay. Luego, el veintiuno de julio del dos mil tres, se llevó a cabo una audiencia pública en presencia del consejero jurídico y secretario técnico de la CARU, a fin de tratar la solicitud de la autorización ambiental solicitada por CMB a Uruguay¹³⁰, a partir de lo cual CARU nuevamente solicitó en dos ocasiones a Uruguay que le transmita determinada

¹²⁵ NB: Oy Metsä-Botnia AB es la empresa finlandesa que se aproxima a liderar la proveeduría de pasta celulosa a nivel mundial, Internet. <http://www.botnia.com/Products/Pages/Default.aspx>, Acceso: 20 de enero de 2011, 17:33.

¹²⁶ DINAMA, Informe actualización AAP Botnia – Actualización de la información sobre el proceso de Autorización Ambiental de las Plantas de Celulosa al 26 de abril de 2006, Internet. http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=177, Acceso: 3 de enero del 2011, 18:19.

¹²⁷ NB: La primera solicitud fue realizada el 17 de octubre del 2002, la segunda solicitud fue realizada el 21 de abril del 2003.

¹²⁸ DINAMA, op.cit.

¹²⁹ NB: Digesto de la CARU acerca de las disposiciones relativas a la prevención de la contaminación ambiental, Internet. <http://www.caru.org.uy/digestotemacontaminacion.pdf>, Acceso: 20 de enero del 2011, 22:42.

¹³⁰ DINAMA, op.cit.

información complementaria acerca del mencionado proyecto¹³¹. A continuación, DINAMA realiza un reporte de evaluación acerca del proyecto y lo transmite al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y a la vez le recomienda otorgar la autorización ambiental previa a CMB, siempre y cuando ésta cumpla determinadas condiciones¹³². Posterior a esto, la delegación uruguaya dijo a la CARU que DINAMA debía transmitirle inmediatamente un reporte sobre el proyecto CMB, sin respuesta de contraparte¹³³.

2.2. Concesión unilateral de autorizaciones previas de construcción

El primer elemento detonante del conflicto fue cuando el nueve de octubre del dos mil tres, el MVOTMA otorgó una autorización ambiental previa (AAP) a favor de ENCE autorizando la construcción de la planta CMB¹³⁴, cuando al mismo tiempo los entonces mandatarios de Uruguay y Argentina, Jorge Battle y Néstor Kirchner respectivamente, se reunían en Colonia Uruguay, a partir de la cual afirma Kirchner que su homólogo se habría comprometido a no otorgar autorización alguna mientras no se hayan respondido a las preocupaciones ambientales de Argentina; al contrario Uruguay afirma que en esta reunión, las partes habrían decidido tratar este proyecto fuera del procedimiento de consulta contenido entre los artículos siete y doce del Estatuto del Río Uruguay¹³⁵. Al día siguiente de la reunión, CARU retoma la realización de los estudios técnicos debido a la entrega de documentos previamente solicitados a Uruguay, y el diecisiete de octubre del dos mil tres, por solicitud de Argentina convoca a una sesión extraordinaria, con el objetivo de tratar la AAP otorgada por Uruguay el nueve de octubre del dos mil tres¹³⁶, como resultado de esta reunión, las partes no lograron acordar la puesta en marcha del mecanismo de consulta

¹³¹ Cfr. Corte Internacional de Justicia, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Fallo del 20 de abril del 2010, § 30, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf>, Acceso: 24 de mayo del 2010.

¹³² Id.

¹³³ Id.

¹³⁴ MVOTMA, Resolución número 342/2003, Internet. http://www.mvotma.gub.uy/dinama/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&limit=5&limitstart=5&order=date&dir=DESC&Itemid=377, Acceso: 13 de diciembre del 2010, 13:12.

¹³⁵ Cfr. Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Fallo del 20 de abril del 2010, op.cit. § 31.

¹³⁶ Cancillería de la República Argentina, Noticias de la Cancillería, 14 de febrero del 2006, Internet. <http://www.cancilleria.gov.ar/portal/novedades/060214.htm>, Acceso: 02 de enero del 2011, 23:45.

previsto en el Estatuto, por lo que la CARU suspendió sus actividades durante seis meses¹³⁷. En seguida, Uruguay entregó a Argentina copias de la EIA de ENCE, el reporte final de la evaluación de la DINAMA y la AAP concedida, a lo cual Argentina responde afirmando que esta notificación no fue realizada de acuerdo al mecanismo de consulta previsto en el Estatuto, además que esta información entregada resultan ser insuficiente para determinar los posibles daños ambientales¹³⁸. A partir de esto, se dieron varios intercambios de información hasta que el quince de mayo del dos mil cuatro, CARU retomó sus actividades gracias a un arreglo entre los ministros de relaciones exteriores homólogos en la reunión llevada a cabo el dos de marzo del dos mil cuatro en Buenos Aires, Argentina¹³⁹; a partir de esta reunión la Subcomisión de la Calidad del Agua y Prevención de la Contaminación creó el Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental en el Río Uruguay en Áreas de Plantas Celulósicas (PROCEL)¹⁴⁰ a fin de estudiar los posibles impactos ambientales de CMB, entretanto Uruguay ya había autorizado la realización de los trabajos preparatorios¹⁴¹ para la construcción de la planta CMB, aunque el veintiocho de marzo del dos mil seis, sus promotores decidieron suspender sus actividades por noventa días, para luego el veintiuno de septiembre del dos mil seis finalmente comunicar su intención de no construir en esa locación¹⁴².

La segunda planta celulósica Orion constituye igualmente materia principal de la controversia, considerando además que sí fue construida cerca del sitio destinado para CMB y se encuentra en funcionamiento desde el nueve de noviembre del dos mil siete¹⁴³. Todo inicio cuando los promotores solicitaron la AAP a las autoridades uruguayas y a continuación se reunieron de manera extraoficial con varios miembros de la CARU; a partir de dicha reunión, la Subcomisión de Calidad del Agua y Prevención de la Contaminación aprobó un plan de control y monitoreo y solicitó a los promotores cumplir con cierta información acerca

¹³⁷ Cfr. Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Fallo del 20 de abril del 2010, op.cit. § 32.

¹³⁸ Cfr. Ibíd. § 33.

¹³⁹ Cancillería, op.cit.

¹⁴⁰ NB: El plan fue aprobado por la CARU el 12 de noviembre del 2004. Ver Internet. <http://www.caru.org.uy/planmonitoreo091104.html>, Acceso: 21 de enero 2011, 2:19.

¹⁴¹ NB: Los trabajos preparatorios comprenden principalmente la nivelación del terreno.

¹⁴² NB: Corte Internacional de Justicia, op.cit. § 36.

¹⁴³ NB: En el año 2009, la participación accionaria así como la administración de BOTNIA pasó a manos de la empresa finlandesa UPM, Internet. http://www.upmuruguay.com.uy/upm/internet/upm_fray_bentos.nsf/sp2?open&cid=planta&nav1nf=ESP\Navigation\20.%20Planta&nav1nfa=o, Acceso: 1 de febrero de 2011, 22:26.

de la solicitud de la AAP¹⁴⁴. Luego, la DINAMA convocó a una audiencia pública llevada a cabo el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro, en la que adoptó su EIA relativa al proyecto de Orion y recomendó el otorgamiento de la AAP a favor de Botnia, lo cual fue acogido por el MVOTMA el quince de febrero del dos mil cinco, cuando concedió dicha autorización¹⁴⁵, sin considerar el procedimiento previsto en el Estatuto del Río Uruguay. Así, Uruguay autorizó inmediatamente el inicio de los trabajos preparatorios, mientras Argentina mostraba luego su descontento y oposición en las reuniones subsiguientes llevadas a cabo en CARU.

Pese a todas las controversias generadas, es preciso señalar que Uruguay no solo actuó de forma unilateral respecto a la construcción de ambas plantas celulósicas, sino que adicional a ello, autorizó la construcción y puesta en servicio de una terminal portuaria adyacente a la Planta Orion de Botnia el veinticuatro de agosto del dos mil seis¹⁴⁶, para luego simplemente informar a la CARU a manera de notificación el doce de septiembre del dos mil seis¹⁴⁷, cuando el terminal ya se encontraba activo a esa fecha.

Adicionalmente, en este mismo año Uruguay autorizó la construcción y puesta en servicio de un terminal portuario multimodal en Nueva Palmira¹⁴⁸ de la empresa Ontur Internacional¹⁴⁹, lo cual pese a no ser objeto principal de la controversia, es un elemento considerable para determinar el patrón de comportamiento de Uruguay respecto a la forma de actuar en cuanto al otorgamiento de autorizaciones de construcción de obras consideradas de alto impacto ambiental, social y económico.

¹⁴⁴ Cfr. Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Fallo del 20 de abril del 2010, op.cit. § 38.

¹⁴⁵ MVOTMA, Resolución número 63/2005, Internet. http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=177, Acceso: 13 de diciembre del 2010, 13:20.

¹⁴⁶ Cfr. República Argentina, Memoria sobre el caso de las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Corte Internacional de Justicia, 15 de enero del 2007, § 2.85, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15426.pdf>, Acceso: 13 de marzo del 2010, 12:56.

¹⁴⁷ Id.

¹⁴⁸ Cfr. Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Fallo del 20 de abril del 2010, op.cit. § 44.

¹⁴⁹ NB: Ontur Internacional, Terminal Multipropósito, Internet. <http://www.ontur.com.uy/espanol.htm>, Acceso: 2 de febrero de 2011, 0:23.

2.3 Negociaciones diplomáticas

Una vez concedidas ambas autorizaciones previas e iniciados los trabajos preparatorios de construcción de la planta Orion, el cinco de mayo del dos mil cinco los presidentes de Argentina y Uruguay¹⁵⁰ decidieron crear un grupo de técnicos que estudien las posibles consecuencias ambientales sobre el Río Uruguay, causadas por la construcción y funcionamiento de las plantas celulósicas, fue así como el treinta y uno de mayo del dos mil cinco, los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países crearon el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), organismo integrado por representantes de los respectivos ministerios, funcionarios nacionales acompañados de un respaldo universitario de ambos países, a fin de que elaboren un primer informe sobre los posibles impactos ambientales de la planta CMB, dentro de ciento ochenta días. Este grupo mantuvo doce reuniones¹⁵¹, en las cuales ambos países intercambiaron información y documentación complementaria, pese a lo cual las negociaciones fallaron al no realizar el reporte en el plazo previsto, tal como lo constató Uruguay el treinta y uno de enero del dos mil seis y posteriormente Argentina, el tres de febrero del dos mil seis¹⁵².

Finalmente, es preciso recordar que durante todas las negociaciones diplomáticas bilaterales al igual que en las reuniones realizadas en el seno de CARU, Argentina siempre sostuvo su intención y voluntad de solicitar la suspensión de los trabajos iniciales de construcción tanto de la planta CMB como la de Orion, a fin de estudiar con mayor detenimiento los eventuales perjuicios ambientales y económicos que acarrearía la construcción de las plantas celulósicas, ante lo cual Uruguay inicialmente respondió con una clara intención de cooperar y entregar su información disponible, pero en el transcurso de las negociaciones las posturas y compromisos fueron variando y escaseando los pequeños alcances tendientes a poner fin a la controversia generada, razón por la cual resulta ineludible analizar con detenimiento sus posturas y actuaciones tanto de Argentina como de

¹⁵⁰ NB: En ese entonces, el Presidente argentino Néstor Kirchner y el Presidente uruguayo Tabaré Vázquez.

¹⁵¹ Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina, Informe de la Delegación Argentina al Grupo de Trabajo de Alto Nivel, 3 de febrero del 2006, Internet. <http://www.mrecic.gov.ar/portal/novedades/informe.pdf>, Acceso: 1 de febrero de 2011, 23:24.

¹⁵² Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Internet. <http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,1,154,O,S,0,PAG;CONP;276;3;P;1791;1;PAG;MNU;E;106;6;MNU>, Acceso: 21 de enero de 2011, 3:27.

Uruguay, a fin de descubrir sus pretensiones en cada etapa de este conflicto que permitan establecer si ha existido o no un incumplimiento al Estatuto de Río Uruguay.

2.3.1 Actuaciones de Uruguay

A través de todas las participaciones conjuntas con Argentina, Uruguay ha sostenido en varias ocasiones que su intención siempre se ha orientado en satisfacer las necesidades de ambos países, alentando a la cooperación y cumplimiento de todas las disposiciones legales sean de carácter nacional o internacional.

Pese a estas constantes afirmaciones, es preciso señalar cuáles han sido las posturas y verdaderas actuaciones de Uruguay respecto al conflicto de las papeleras, para ello cabe destacar que las autorizaciones de construcción concedidas el nueve de octubre del dos mil tres y quince de febrero del dos mil cinco, a favor de las empresas ENCE y Botnia respectivamente, fueron otorgadas según lo dispuesto la legislación interna uruguaya¹⁵³ mas no según el procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay, en tal razón la DINAMA calificó a ambos proyectos de acuerdo a su categorización y realizó todo el procedimiento de solicitud de autorización ambiental previa, según sus disposiciones y requisitos nacionales. Esta manera de proceder es acorde a la exposición del ex - Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Didier Opperti quien explicó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el veintiséis de noviembre del 2003, que las papeleras celulósicas constituyen una obra nacional, y por lo tanto sujetas únicamente al ordenamiento jurídico uruguayo¹⁵⁴.

Aunque esto resulta contradictorio con otros pronunciamientos oficiales uruguayos que han afirmado evidenciar su espíritu de cooperación y facilitación de información a favor de CARU y Argentina, durante la fase de otorgamiento de las autorizaciones previas respectivas, tal como lo pronunció el Ministro de Relaciones Exteriores Uruguayo Reinaldo Gargano, quien alega haber entregado toda la información disponible y otorgado las autorizaciones en cumplimiento a toda norma nacional e internacional, descartando al

¹⁵³ NB: El MVOTMA concedió las autorizaciones ambientales previas a favor de ambas Plantas, según el Decreto Número 435/994 del 21 de septiembre de 1994, sustituido por el Decreto Número 349/005 del 21 de septiembre del 2005, decretos que reglamentan el régimen de la Evaluación de Impacto Ambiental creado en un inicio por la Ley Número 16.466 del 19 de enero de 1994. MVOTMA, Decreto 349/005 – Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, Internet. http://www.mvotma.gub.uy/dinama/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=376, Acceso: 2 de febrero de 2011, 17:34.

¹⁵⁴ Cfr. República Argentina, op.cit. § 2.26.

Estatuto del Río Uruguay, el cual afirma no resulta aplicable al caso¹⁵⁵; en contradicción a esto, Uruguay afirma que sí informó a CARU, sustentándose en las comunicaciones iniciales enviadas directamente por los promotores de ambos proyectos; adicional a esto, incluso ha invitado a Argentina a participar en la “Comisión de Seguimiento de los Emprendimientos” creada por el MVOTMA¹⁵⁶ a fin de monitorear la actividad de las plantas celulósicas de acuerdo a la legislación uruguaya. Todo ello evidencia que Uruguay no ha logrado mantener una postura clara acerca de la regulación puntual para el manejo y control de las plantas celulósicas, ya que inicialmente planteaba su defensa afirmando que se trata simplemente de una obra nacional por lo que no es justificable la intervención de Argentina o cualquier otro organismo, para luego solicitar incluso su participación en los procedimientos de monitoreo y control de las mismas.

Por otro lado, Uruguay afirma que la aplicación del Estatuto del Río Uruguay fue exceptuada intencionalmente por ambas partes durante todo el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas e iniciación de trabajos para ambas plantas celulósicas y demás obras adyacentes, inicialmente basándose en la interpretación que dio al acuerdo alcanzado por ambos Mandatarios el dos de marzo del dos mil cuatro, mediante el cual Uruguay afirma haber acordado con Argentina, la creación de PROCEL con el objetivo de dejar sin efecto el Estatuto del Río Uruguay¹⁵⁷. En segundo lugar, Uruguay omite la aplicación del Estatuto, al afirmar que GTAN fue creado a fin de concretar negociaciones bilaterales directas, subsanando cualquier omisión o irregularidad referente a este instrumento bilateral¹⁵⁸, por lo que implícitamente supondría la aceptación de parte de Argentina para la construcción de las plantas celulósicas, renunciando a la aplicación del Estatuto del Río Uruguay mediante la adopción de un procedimiento AD-HOC negociador bilateral.

Luego de realizar todos los intentos a través de la negociación directa a nivel diplomático, se frustró el objetivo de alcanzar resultados favorables que reglen el conflicto bilateral acerca de la construcción de las papeleras. Fue así como el seis de abril del dos mil

¹⁵⁵ NB: El Ministro uruguayo Reinaldo Gargano lo declaró mediante Nota dirigida al Embajador de Argentina en Uruguay, Hernán Patiño Meyer, el 27 de diciembre del 2005. República Argentina, op.cit. § 2.74.

¹⁵⁶ Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Comunicado de Prensa Número 34/06, Internet. <http://www.mreee.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,1,154,O,S,0,PAG;CONP;276;3;P;1791;1;PAG;MNU;E;106;6;MNU>, Acceso: 2 de febrero del 2011, 18:34.

¹⁵⁷ Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, op.cit.

¹⁵⁸ Id.

seis, el Gobierno uruguayo declaró finalizadas las negociaciones directas con Argentina afirmando que no se han alcanzado los resultados buscados.

Es preciso mencionar que mientras se llevaban a cabo las negociaciones diplomáticas bilaterales, grupos ambientalistas y habitantes de Gualeguaychú, realizaron manifestaciones pacíficas pronunciándose en contra de la construcción de las plantas celulósicas, a través de las cuales en varias ocasiones se impidió el paso en los puentes internacionales San Martín, General Artigas y el puente sobre Salto Grande, los cuales constituyen vías de comunicación entre Argentina y Uruguay.

Uruguay consideró que estos cortes impidieron la libre circulación de personas y bienes nacionales, afectando sus actividades turísticas y comerciales principalmente, razón por la cual, solicitó una convocatoria al Consejo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el máximo órgano del bloque regional, iniciando así un proceso legal internacional, a conocimiento además de la Corte Internacional de Justicia¹⁵⁹.

2.3.1.1 Proceso Arbitral ante MERCOSUR

La solicitud de Uruguay presentada ante el MERCOSUR tuvo como objeto principal, la supuesta violación por parte de Argentina a varias disposiciones del Tratado de Asunción, principalmente su artículo primero¹⁶⁰, al alegar el impedimento de la libre circulación de personas, bienes y mercaderías hacia su país vecino principalmente, en razón de los cortes de ruta en los puentes internacionales antes mencionados.

Uruguay alegó que los cortes bloquearon todo viaje turístico y comercial, causándole graves pérdidas económicas irreparables, por lo cual solicitó al Tribunal Arbitral AD-HOC que declare la violación por parte de Argentina al Tratado de Asunción, debido a la falta de adopción de las medidas apropiadas orientadas a prevenir y/o cesar los cortes o cualquier

¹⁵⁹ Presidencia de Uruguay, Comunicado de prensa del 6 de abril del 2006, Internet. http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2006/04/2006040704.htm, Acceso: 26 de enero de 2011, 18:00.

¹⁶⁰ “ [...] *Este Mercado Común implica: La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente [...]*.” Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Tratado de Asunción, otorgado el 26 de marzo de 1991 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Artículo 1, Internet. http://www.MERCOSUR.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf, Acceso: 27 de enero de 2011, 17:11.

impedimento para la libre circulación¹⁶¹. Adicionalmente, afirmó que Argentina mantuvo una actitud permisiva que incluso alentaba la realización de los cortes de paso, con el objetivo de presionar a fin de que no se construyan las plantas celulósicas, causando una mayor agravación del conflicto y dificultando seriamente el comercio recíproco¹⁶².

Ante estas acusaciones, Argentina se defendió alegando que este caso es una clara confrontación entre el derecho constitucional de libre expresión, pensamiento y reunión versus el derecho de circulación, lo cual fue absolutamente descartado por el Tribunal¹⁶³, quien de todas maneras reconoció claramente que el gobierno argentino no alentó la generación de los cortes, pese a apoyar el legítimo derecho constitucional de manifestar¹⁶⁴, resaltando además que todas las manifestaciones realizadas fueron pacíficas, sin necesidad de la intervención de la fuerza pública¹⁶⁵.

Finalmente, luego de las exposiciones y alegaciones finales de ambas partes, el Tribunal AD-HOC acogió parcialmente la pretensión de Uruguay y reconoció una actitud permisiva por parte de Argentina, por lo que la declaró responsable por las manifestaciones realizadas por sus nacionales, justamente por omitir agotar todas las medidas necesarias a fin de cumplir con la diligencia debida que prevenga o evite los cortes:

No obstante, en el caso que nos ocupa, la conducta de obstruir la vía de comunicación ha sido desarrollada por particulares y no por el Estado mismo, y en principio, la responsabilidad del Estado no resulta comprometida por los actos de las personas privadas, sino sólo por los actos u omisiones de sus propios agentes. No obstante, el Estado puede igualmente ser considerado responsable, ya no por el hecho ajeno, sino por el hecho propio, si omitiera la

¹⁶¹ Tribunal Arbitral AD-HOC del MERCOSUR, Laudo del Tribunal Arbitral "AD-HOC" de MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por la República Oriental de Uruguay a la República Argentina sobre "Omisión del Estado Argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a los puentes internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la República Argentina con la República Oriental del Uruguay", Árbitros señores Dr. Luis Martí Mingarro, Dr. José María Gamio y Dr. Enrique Carlos Barreira, 6 de septiembre del 2006, § número 17, Internet. <http://www.MERCOSUR.org.uy/innovaportal/file/Laudo%20de%20Cortes%20de%20Ruta%20-20ES.pdf?contentid=375&version=1&filename=Laudo%20de%20Cortes%20de%20Ruta%20-20ES.pdf>, Acceso: 20 de diciembre del 2010, 13:45.

¹⁶² Id.

¹⁶³ Ibíd. § 128.

¹⁶⁴ Ibíd. § 43.

¹⁶⁵ Ibíd. § 46.

*“conducta debida”, esto es, por la “falta de diligencia” en prevenir o corregir actos de los particulares, que puedan causar perjuicio a otro Estado [...].*¹⁶⁶

Aunque, es necesario resaltar que el Tribunal reconoció que Argentina no actuó de mala fe porque no se evidenció ningún tipo de intencionalidad discriminatoria a fin de perjudicar directamente a Uruguay, porque los cortes afectaron el tráfico para ambos países:

*La buena fe debe presumirse y de la prueba acompañada no se desprende que Argentina haya promovido o alentado la actitud asumida por los vecinos. Más bien, la actitud de ellos fue la de llamar la atención del Gobierno argentino sobre el problema. No surge por lo tanto que haya existido en las autoridades argentinas la intención de impedir la libre circulación y burlar el compromiso del art. 1° del Tratado de Asunción [...].*¹⁶⁷

Sin embargo, debido a la extensión prolongada de los cortes, las manifestaciones perdieron su legitimidad al causar un agravamiento en el impedimento de la libre circulación:

*No obstante, dichas manifestaciones fueron perdiendo su legitimidad originaria en la medida en que a través de las vías de hecho adoptadas, fueron acumulando agresiones al derecho de otras personas que se vieron finalmente imposibilitadas de transitar y ejercer el comercio a través de las rutas internacionales en virtud del corte de las mismas, sin previsibilidad ni límite temporal preciso, por períodos desproporcionadamente extensos y durante la época de mayor intercambio comercial y turístico entre ambos países [...].*¹⁶⁸

Por lo que finalmente el Tribunal declaró que:

*Acogiendo parcialmente la pretensión de la Parte Reclamante, declara que la ausencia de las debidas diligencias que la Parte Reclamada debió haber adoptado para prevenir, ordenar o, en su caso corregir los cortes de las rutas que unen a la República Argentina con la República Oriental del Uruguay [...], no es compatible con el compromiso asumido por los Estados Partes en el tratado fundacional del MERCOSUR, de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países.*¹⁶⁹

De todas maneras concluido este proceso, la tensión creció aún más entre ambos países, continuaron los cortes de vías mientras los trabajos preparatorios de construcción de las plantas siguieron su marcha mientras las negociaciones directas se habían agotado.

¹⁶⁶ Ibid. § 116.

¹⁶⁷ Ibid. § 142.

¹⁶⁸ Ibid. § 158.

¹⁶⁹ Ibid., IV Decisión, Segundo.

Una vez examinadas las acciones de Uruguay, es posible determinar que actuó unilateralmente al otorgar las autorizaciones previas de construcción de las plantas celulósicas, además de la autorización de usos de agua del Río Uruguay, todo sin el previo consentimiento tanto de CARU como de Argentina, alegando la falta de necesidad de hacerlo al considerar estas obras como nacionales, es decir, sujetas a su legislación y requerimientos de carácter interno exclusivamente. Su postura demuestra el total desconocimiento y acogida del procedimiento de consulta establecido en el Estatuto del Río Uruguay, aunque es justificable su postura respecto de los cortes de vías, al tratarse de una acción nacionalista de defensa para su economía local.

A continuación, es necesario examinar la postura y actuaciones de Argentina, la contraparte de la controversia, acusada de alentar los cortes de vías e intromisión en el proceso de autorización y construcción de las plantas celulósicas; es preciso determinar los puntos principales de su defensa y motivaciones de sus acusaciones contra Uruguay respecto al incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.

2.3.2 Actuaciones de Argentina

La postura mantenida por Argentina siempre se ha basado en el supuesto incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de parte de su país vecino Uruguay, alegando que éste no actuó de forma debida al conceder las autorizaciones previas de construcción de las plantas celulósicas, sin consultarle previamente acerca del proyecto y sin notificarlo a CARU de la forma convenida. Es así como se atribuye a Uruguay escasa cooperación mutua, inobservancia a los procedimientos de consulta establecidos en el Estatuto y prevalencia de su ordenamiento jurídico interno frente a instrumentos jurídicos internacionales.

Argentina ha demostrado incluso que las actuaciones de Uruguay evidencian el menoscabo a la institucionalización y propósitos de CARU, impidiendo que ejecute sus labores encomendadas, justamente por omitir la notificación previa al otorgamiento de las autorizaciones previas, desconociendo así el tratado internacional bilateral por el cual fue creada esta Comisión.

Es preciso afirmar que Argentina siempre declaró que todo acuerdo concertado con Uruguay no pretendía omitir el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Estatuto, al contrario de lo alegado por su país vecino. Aseveró incluso que el acuerdo presidencial del

dos de marzo del dos mil cuatro reafirmó la necesidad de cumplimiento de este tratado bilateral, además que la creación de GTAN no supuso la aceptación de la construcción de las plantas celulósicas, menos aun tuvo la intención de reemplazar a CARU¹⁷⁰, sino que estuvo siempre orientado a coexistir paralelamente con el fin de concertar de una manera más eficaz las negociaciones que diriman el conflicto existente.

Las concesiones de las autorizaciones previas de construcción de las plantas de parte de Uruguay generaron un gran descontento alarmante plasmado en una carta redactada por Argentina el veintiséis de junio del dos mil cinco dirigida al entonces Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, mediante la cual transmitió su preocupación concerniente al financiamiento por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para la construcción de las plantas celulósicas¹⁷¹, a pesar de lo cual la CFI decidió financiar la construcción de Orion, previa a la realización de varios estudios ambientales de seguimiento llevados a cabo por la empresa Ecometrix¹⁷². Pese a la falta de acogida por parte de esta organización, Argentina mantuvo sus intenciones de negociar con Uruguay e insistió en la necesidad de la cooperación mutua para alcanzar la resolución de esta controversia.

Recordemos que inicialmente en marzo del dos mil seis, el entonces Presidente uruguayo Jorge Battle prometió a su par argentino Néstor Kirchner que no otorgaría ninguna autorización previa de construcción mientras no se aclaren todas las dudas ambientales de Argentina, por lo cual acogió la solicitud de Kirchner y solicitó a ambas empresas promotoras, Botnia y ENCE, que suspendan sus trabajos, ante lo cual ENCE decidió suspender sus actividades por noventa días, mientras que Botnia actuó desatinadamente al comunicar que solo suspendería sus trabajos por diez días, coincidentes con las fiestas uruguayas de Pascuas¹⁷³, lo que demostró una falta de cooperación evidente, incluso por parte de una de las plantas celulósicas. Este hecho, además del comunicado presidencial uruguayo sobre la finalización de las negociaciones, podría considerarse como el detonante

¹⁷⁰ Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, Argentina desmintió haber prestado consentimiento para la construcción de Botnia, Coordinación de Prensa y Difusión, Internet. <http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=7822>, Acceso: 7 de febrero del 2011, 19:51.

¹⁷¹ Cancillería, op.cit.

¹⁷² Empresa cuya actividad principal consiste en realizar mediciones, valoraciones y cuantificaciones sobre el potencial daño ambiental que una actividad humana puede causar, Internet. <http://www.ecometrix.ca/aboutus.html>, Acceso: 21 de enero de 2011, 19:18.

¹⁷³ Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Fallo del 20 de abril del 2010, op.cit. § 42.

principal para frustrar la intención de crear una comisión de expertos que realice un estudio global independiente sobre la posible contaminación fronteriza¹⁷⁴ y finalmente impidió la resolución de la controversia bilateral.

Del lado argentino siempre existió una grave preocupación acerca de la contaminación transfronteriza que podrían causar las plantas celulósicas, justamente por compartir este recurso natural hídrico con Uruguay. Es así como los habitantes de Gualeguaychú perteneciente a la provincia de Entre Ríos, comunidad más próxima a las plantas celulósicas uruguayas, se sintieron amenazados por la construcción de las mismas, en vista que su actividad económica principal se centra en la pesca y turismo rural ecológico¹⁷⁵, por esta razón realizaron manifestaciones pacíficas provocando los cortes de vías alegados por Uruguay, a partir de los cuales hubieron acercamientos con el Congreso de la Nación y de una manera más próxima, con el primer mandatario argentino Néstor Kirchner, quienes les ofreció su total comprensión y apoyo, al afirmar lo siguiente durante un discurso realizado en esta ciudad:

*Debemos respetar la soberanía e integridad territorial de todos los estados y de conformidad a ese estatuto y las normas del derecho internacional todo uso proyectado por uno de los Estados de este curso de agua debe ser informado. Cuando la actividad proyectada tiene entidad suficiente para causar un eventual daño transfronterizo, como es el caso de la plantas, su localización y la falta de previsión respecto de sus residuos líquidos, sólidos o gaseosos, el Estado que las permite debe consultar a los fines de negociar de buena fe el emplazamiento, las técnicas y las modalidades del emprendimiento, para impedir el daño ambiental. Si esa actividad se manifiesta de efecto nocivo transfronterizo no puede llevarse adelante sin consentimiento o autorización explícita del país afectado. [...] Si existe daño transfronterizo y no existe consentimiento o autorización, el Estado responsable debe cesar en su actividad haciéndose responsable del daño causado.*¹⁷⁶

Alegó además la necesidad de vivir en un espacio sano y libre de toda contaminación ambiental, a fin de alcanzar un desarrollo sustentable nacional que no

¹⁷⁴ NB: El grupo de expertos iba a crearse a partir de la Declaración presidencial conjunta sobre la preservación del Río Uruguay y su ecosistema, más conocida como la Declaración de Anchorena del 3 de abril del 2006, la cual jamás salió a la luz, justamente por declarar finalizadas las negociaciones.

¹⁷⁵ Gualeguaychú, Turismo Rural en Gualeguaychú, Entre Ríos, Internet. <http://www.gualeguaychu.info/trural.htm>, Acceso: 7 de febrero del 2011, 20:10.

¹⁷⁶ Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, Palabras del Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner el 5 de mayo de 2006 – Corsódromo de Gualeguaychú, Internet. <http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2519>, Acceso: 7 de febrero del 2011, 20: 17.

interfiera en la integración regional¹⁷⁷, sin que esto signifique alentar los cortes de vías, tal como lo reconoció el Tribunal AD-HOC del MERCOSUR, razón por la cual es posible demostrar una postura sosegada por parte de las autoridades argentinas que respeta la soberanía nacional pero a su vez insiste en el cumplimiento de los tratados internacionales.

A partir de las actuaciones de ambas partes, es posible evidenciar el rechazo de Uruguay respecto de la necesidad de cumplimiento del Estatuto, ya que insistió en que sí entregó a CARU la información requerida y que además el arreglo podía fácilmente realizarse mediante la negociación directa con Argentina, descartando la valoración a la participación e intervención de CARU; aunque cabe reconocer que sí mantuvo altas intenciones para alcanzar este acuerdo bilateral, el cual se vio contrarrestado con evidenciada negativa de entrega de información solicitada en reiteradas ocasiones tanto por Argentina como por CARU. Uruguay rechazó toda acusación de Argentina respecto del incumplimiento del Estatuto, defendiendo su posición en base a la aplicación de su legislación nacional en cuanto a las AAP concedidas a favor de ambas plantas de producción de celulosa.

En contrapartida, Argentina insistió en que la actuación unilateral de Uruguay vulneró las disposiciones esenciales contenidas en el Estatuto y demostró su alarma respecto de la seguridad de sus conciudadanos habitantes en la zona cercana a la construcción de la planta Orion. Durante todo el transcurso de las negociaciones, brindó su participación activa tendiente a solucionar el conflicto, aunque, tal como lo determinó el Tribunal AD-HOC del MERCOSUR, mantuvo erróneamente una actitud demasiado pacífica respecto de los cortes de rutas en los puentes internacionales unidos a Uruguay. Este hecho constituyó una agravación al conflicto, a partir del cual inicio toda una serie de actuaciones en sede de jurisdicción internacional.

Es evidente que las relaciones entre ambos países se deterioraron a partir de estos hechos, justamente debido a las acusaciones mutuas sobre cortes de vías que impidieron la libre circulación de bienes, al igual que inculpaciones sobre el incumplimiento a procedimientos establecidos en un tratado internacional bilateral firmado entre ambos países. El conflicto se agravó cuando una de las partes declaró finalizadas las negociaciones directas, impidiendo la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos por la vía diplomática, fue

¹⁷⁷ Id.

así como Argentina decidió ingresar una solicitud el cuatro de mayo del dos mil seis a la Corte Internacional de Justicia a fin de que resuelva el conflicto acerca de la aplicación e interpretación del Estatuto del Río Uruguay¹⁷⁸.

3. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ESTATUTO EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

3.1 Competencia

La Corte Internacional de Justicia constituye el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas¹⁷⁹, cuya sede se encuentra establecida en La Haya, Países Bajos, donde ejerce sus funciones desde mil novecientos cuarenta y seis, como sucesora a la Corte Permanente de Justicia Internacional¹⁸⁰. Está reglada por su propio estatuto constitutivo que forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, complementado igualmente de un reglamento¹⁸¹, ambos instrumentos dirigidos a normar la conformación de sus miembros, sus competencias, los procedimientos que debe seguir y todo su funcionamiento interno.

La Corte cumple dos funciones principales, la primera consiste en resolver según el derecho internacional, los conflictos sometidos a su conocimiento por parte de los Estados¹⁸² que hayan suscrito el Estatuto¹⁸³ o que sean miembros de las Naciones Unidas¹⁸⁴. La segunda consiste en emitir dictámenes sobre distintas cuestiones jurídicas planteadas por órganos de las Naciones Unidas y/o por organizaciones especializadas y autorizadas por la

¹⁷⁸ Ver: República Argentina, Solicitud Introductoria de instancia: Plantas de paste celulósica sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay), 4 de mayo del 2006, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/10778.pdf>, Acceso: 21 de mayo del 2010, 13:42.

¹⁷⁹ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, op.cit. artículos1, 92 al 96.

¹⁸⁰ Corte Internacional de Justicia, Una mirada a la Corte Internacional de Justicia: Breve reseña sobre la misión y el funcionamiento de la Corte, Internet. <http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/notice.pdf>, Acceso: 17 de febrero de 2011, 17:45.

¹⁸¹ Corte Internacional de Justicia, Reglamento de la Corte, adoptado el 14 de abril de 1978, entró en vigor el 1 de julio de 1978, Internet. <http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php>, Acceso: 18 de febrero del 2011, 16:11.

¹⁸² NB: El artículo 34 numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional establece que solo los Estados pueden ser partes en los casos llevados ante la Corte, descartando a todo organismo internacional, colectivo y persona privada.

¹⁸³ NB: El artículo 35 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia da la apertura de la Corte a todos los Estados partes del Estatuto, ofreciendo posibilidad de acceso a los Estados no miembros, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones calificadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¹⁸⁴ “*Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*”. Carta de las Naciones Unidas, op.cit. Artículo 93, § 1.

Asamblea General para hacerlo. De todas maneras, es necesario explicar cada una de sus funciones a fin de esclarecer sus competencias.

3.1.1 Competencia en materia contenciosa

Al ejercer la competencia contenciosa, la Corte resuelve todo punto de hecho o de derecho que haya generado una controversia entre Estados y que haya llegado a su conocimiento por alguna de sus partes. Es preciso mencionar que la Corte no puede conocer un diferendo si las partes no han aceptado su competencia, en tal razón ningún Estado será parte de un asunto delante de la Corte si no ha consentido de alguna manera¹⁸⁵. Es así como existen varias formas en que los Estados pueden aceptar su competencia, sea a través de un acuerdo especial entre Estados en el cual hayan decidido someter su controversia a conocimiento de la Corte¹⁸⁶, en virtud de una cláusula jurisdiccional prevista en el Tratado Internacional¹⁸⁷, o mediante declaraciones unilaterales de aceptación a la jurisdicción de la Corte como obligatoria¹⁸⁸.

Todo Estado parte del Estatuto puede iniciar un proceso ante lo Corte, sobre cualquier tema que verse sobre la interpretación de un tratado, una cuestión de derecho internacional, o, todo hecho que podría constituir la violación a una obligación internacional además de su correspondiente reparación¹⁸⁹. En todos estos casos, la Corte está obligada a resolver conforme al derecho internacional, aplicando:

- a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;*
- b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;*
- c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;*

¹⁸⁵ NB: El artículo 38 numeral 5 del Reglamento de la Corte determina que existe la posibilidad de que un Estado reconozca la competencia luego de que se haya establecido una solicitud introductoria de instancia en su contra, a fin de que la Corte resuelva el caso.

¹⁸⁶ Ver: Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, op.cit., artículo 36 numeral 2.

¹⁸⁷ Ver: *ibíd.*, artículo 36 numeral 1.

¹⁸⁸ Ver: *Ibíd.*, artículo 36 numeral 5.

¹⁸⁹ Cfr. *Ibíd.*, artículo 36 numeral 2.

*d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho[...].*¹⁹⁰

Aplicando estas fuentes de derecho, la Corte prosigue un procedimiento oral y escrito donde analiza los alegatos y actuaciones de las partes, analizando las pruebas entregadas y realizadas para finalmente emitir un fallo definitivo e inapelable¹⁹¹ cuya obligatoriedad de cumplimiento es exigible únicamente a la partes del litigio¹⁹².

Cabe mencionar que el resguardo de los derechos de las partes es primordial en el desarrollo del proceso, por esta razón en cualquier momento alguna de las partes puede solicitar a la Corte que dicte medidas provisionales, explicando ampliamente qué derechos corren riesgo de ser violados, las posibles consecuencias en caso de rechazar su solicitud y qué medidas solicita¹⁹³. La importancia del resguardo de los derechos de las partes se evidencia en su prioridad para resolver las solicitudes antes que otros asuntos¹⁹⁴.

3.1.2 Competencia consultiva

Consiste en un procedimiento especial que exclusivamente los órganos de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas autorizadas están habilitados a iniciar¹⁹⁵, solicitando a la Corte que emita una opinión no vinculante acerca de alguna cuestión jurídica¹⁹⁶. Es empleada como un “*instrumento de diplomacia preventiva*”¹⁹⁷ debido a su perfil pacífico que incluso esclarece y fomenta el desarrollo del derecho internacional, por lo que pese a no tener una finalidad coactiva respecto de su ejecución, mantiene una alta autoridad moral.

Luego de emitida la opinión consultiva, el organismo requirente es quien decide qué efecto otorgarle y a qué finalidad destinarla, para absolver el cuestionamiento que dio nacimiento a su solicitud y que a su vez permita complementar la motivación que justifique un pronunciamiento oficial respecto a un asunto pendiente o controversia internacional generada.

¹⁹⁰ Ibid., artículo 38 numeral 1.

¹⁹¹ Ibid., artículo 60.

¹⁹² Ibid., artículo 59.

¹⁹³ Ibid., artículo 73.

¹⁹⁴ Ibid., artículo 74 numeral 1.

¹⁹⁵ Carta de las Naciones Unidas, op.cit., artículo 96 numerales 1 y 2.

¹⁹⁶ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, op.cit., artículo 65 numeral 1.

¹⁹⁷ Corte Internacional de Justicia, Competencia en materia consultiva, Internet. <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=2>, Acceso: 19 de febrero de 2011, 17:51.

Tanto en la competencia contenciosa como en la consultiva, la Corte dispone de varias herramientas que le permiten esclarecer los hechos y obtener las pruebas suficientemente claras para decidir correctamente, aunque cabe recordar que sus decisiones no siempre son unánimes y existe la posibilidad de que existan opiniones disidentes de algunos de los jueces.

3.1.3 Jurisdicción en el caso particular

La controversia surgida entre Argentina y Uruguay llegó a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia mediante la solicitud introductoria de instancia de Argentina, alegando el incumplimiento de Uruguay respecto del Estatuto del Río Uruguay, tratado bilateral suscrito por ambos países.

La competencia de la Corte se justifica inicialmente en la cláusula jurisdiccional prevista en el Estatuto, específicamente en su artículo sesenta:

*Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del Tratado y del Estatuto que no pudiese solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las Partes, a la Corte Internacional de Justicia [...]*¹⁹⁸

Esta cláusula claramente señala que en caso de agotar los intentos de solucionar la controversia a través de negociaciones directas diplomáticas, tal como ocurrió en el presente caso, cualquiera de las partes está facultada a iniciar un procedimiento ante la Corte a fin de que resuelva el caso.

Igualmente, Argentina alegó la extensión de la competencia, en base a lo previsto en el artículo 36 numeral 1 del Estatuto de la Corte:

*La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigente.*¹⁹⁹

Es así como nos encontramos frente al caso de un tratado internacional a través del cual ambas partes voluntariamente se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, órgano que explícitamente reconoce la cláusula compromisoria de este texto, como uno de los varios tratados expresos que aceptan la obligatoriedad de sometimiento a su

¹⁹⁸ Estatuto del Río Uruguay, op.cit., artículo 60, § 1.

¹⁹⁹ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, op.cit., artículo 36, numeral 1.

jurisdicción en cuanto a materia contenciosa²⁰⁰, tal como ocurre en la actual práctica internacional.

Por otro lado, tanto Argentina como Uruguay son miembros de las Naciones Unidas y por tanto son partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia *ipso facto*²⁰¹. Incluso Uruguay presentó su declaración unilateral de aceptación de sometimiento a la competencia de la Corte para resolver cualquier controversia con otro Estado²⁰².

Es así como se justifica claramente la legalidad de la solicitud introductoria de instancia presentada por Argentina en contra de Uruguay, el cuatro de mayo del dos mil seis, la cual pese a haber sido negada por Uruguay, fue aceptada por la Corte, quien dio paso la continuación del proceso, solicitando proseguir con las actuaciones respectivas de ambas partes, practicó pruebas y emitió su fallo respectivo.

3.2 Desarrollo del proceso

Es necesario realizar el análisis de los hechos que motivaron a Argentina a presentar la solicitud introductoria de instancia ante la Corte Internacional de Justicia, además de identificar sus necesidades principales y solicitudes durante el desarrollo de todo el proceso contencioso. Por otro lado, la contestación y réplica de Uruguay es igualmente importante a fin de considerar su posición y defensa ante las acusaciones de Argentina.

3.2.1 Alegaciones y actuaciones de Argentina

El cuatro de mayo del año dos mil seis, Argentina presentó ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia la solicitud en relación al diferendo suscitado por la alegada violación de Uruguay a las obligaciones establecidas en el Estatuto del Río Uruguay²⁰³. El punto central de la solicitud se basa en la actuación unilateral de Uruguay al otorgar la

²⁰⁰ Corte Internacional de Justicia, Tratados, Internet. <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4>, Acceso: 19 de febrero del 2011, 19:14.

²⁰¹ NB: Argentina fue admitida como miembro el 24 de octubre de 1945 y Uruguay el 18 de diciembre de 1945. Organización de las Naciones Unidas, Estados Miembros de las Naciones Unidas, Internet. <http://www.un.org/es/members/index.shtml#u>, Acceso: 19 de febrero de 2011, 19:03.

²⁰² NB: Uruguay presentó su declaración el 28 de enero de 1921 a la entonces Corte Permanente de Justicia Internacional. Corte Internacional de Justicia, Declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria, Internet. <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3>, Acceso: 19 de febrero de 2011, 19:07.

²⁰³ Cfr. República Argentina, Solicitud introductoria de instancia (Argentina contra Uruguay), Corte Internacional de Justicia, 4 de mayo del 2006, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/10779.pdf>, Acceso: 13 de agosto del 2010, 13:40.

autorización, permitir la construcción y eventual puesta en servicio de dos plantas industriales de producción de celulosa en el Río Uruguay, todo esto sin consideración de los posibles efectos que dichas actividades pueden causar en la calidad de las aguas del Río Uruguay y su zona de influencia, resaltando que se trata de un recurso hídrico compartido entre ambos países.

Primeramente, Argentina afirmó que la autorización de ENCE para la construcción de la planta celulósica CMB fue otorgada sin respetar el procedimiento obligatorio de información y consulta previa establecidos en el Estatuto, sin considerar los riesgos significativos al ambiente y a la salud que una planta como ésta es susceptible de causar. Afirmó además que Uruguay no cumplió con su palabra de no conceder autorización alguna mientras aun existan dudas de parte de Argentina, sino que simplemente le notificó el otorgamiento de la autorización ambiental previa para la construcción esta planta celulósica, acompañada del reporte ambiental sumario realizado por ENCE, al igual que el reporte técnico del MVOTMA, ambos documentos altamente insuficientes según Argentina porque particularmente no hacen mención a los posibles impactos transfronterizos y desconsideran el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estatuto del Río Uruguay, por lo que inmediatamente Argentina hizo saber a Uruguay que una autorización como tal no guardaba conformidad con el Estatuto del Río Uruguay ni con otras reglas de derecho internacional²⁰⁴.

Por otro lado, acusó a Uruguay de falta de cooperación al frustrarse la negociación directa debido al persistente rechazo de parte de Uruguay en transmitir la información requerida incluso a través de CARU; Argentina determinó que la controversia se agravó aún más cuando Uruguay concedió una nueva autorización previa a favor de la finlandesa Oy Metsä-Botnia AB en octubre del dos mil cuatro, para la construcción de una segunda planta celulósica en la misma zona, denominada Orion. Esta falta de cooperación se repitió en el otorgamiento de una tercera autorización, esta vez para la construcción propiamente dicha de la planta Orion y posterior autorización de construcción de un puerto de uso exclusivo a su favor; concedida igualmente sin notificar previamente a CARU ni a Argentina, basada nuevamente en informes de contenido contradictorio e incompleto, todo lo cual resulta contradictorio por el hecho de constituir el proyecto industrial más grande jamás visualizado en la sección compartida del río Uruguay. Así Argentina afirmó que Uruguay faltó a sus obligaciones previstas en el Estatuto del Río Uruguay y a otras reglas del derecho

²⁰⁴ *Ibíd.*, cfr. § 9 y 10.

internacional a las cuales este hace referencia, especialmente sobre precaución y toma de medidas para evitar la contaminación de las plantas.

Argentina resaltó la negativa de una negociación directa para solucionar la controversia, negada también por parte de los representantes de una de las plantas celulósicas, ya que en un último intento de negociación, Néstor Kirchner solicitó la suspensión de la construcción de ambas plantas por noventa días para que una comisión de expertos independientes realicen un estudio global e independiente del impacto acumulado de las dos plantas sobre el ambiente transfronterizo y proponga las medidas a adoptarse en consecuencia, a lo cual Botnia respondió con un rechazo parcial, frustrando definitivamente las negociaciones directas²⁰⁵, tal como lo declararon ambos gobiernos.

Argentina ha logrado demostrar un patrón de comportamiento de Uruguay respecto al otorgamiento unilateral de autorizaciones para construcción de obras de alto impacto ambiental y económico capaces de causar afectaciones transfronterizas, ya que pese a la reiterada solicitud de Argentina y CARU, Uruguay no concedió la información solicitada, no corrigió su actuación y continuó con los procesos de construcción, desconociendo su obligación de cumplir lo dispuesto en un tratado internacional en el cual otorgó su libre consentimiento desde un inicio, incurriendo en una violación sustancial principalmente del procedimiento de consulta establecido entre los artículo siete y doce del Estatuto²⁰⁶, considerando que el Estatuto debería interpretarse de acuerdo a los instrumentos, principios y reglas pertinentes de derecho internacional, en base a lo prescrito en los artículos uno y cuarentaiuno del antes mencionado tratado, obligando a ambos Estados a actuar “*en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las Partes*”²⁰⁷ y proteger el medio acuático previniendo su contaminación a través de la adopción de medidas “de conformidad con los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales”²⁰⁸, así Argentina pronunció

²⁰⁵ NB: Finalmente no se dio lugar a la reunión presidencial en Anchorena Uruguay, donde se pretendía formalizar el acuerdo de concertar la Comisión de Expertos para estudiar los impactos ambientales que permitan una solución diplomática de la controversia generada.

²⁰⁶ República Argentina, Plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina / Uruguay) Réplica de la República Argentina, Libro I, Corte Internacional de Justicia, 29 de enero del 2008, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15430.pdf>, § 1.78, Acceso: 20 de agosto del 2010, 19:55.

²⁰⁷ Estatuto del Río Uruguay, op.cit. artículo 1.

²⁰⁸ Ibíd., artículo 41 literal a.

que se tratan de cláusulas de reenvío a otros instrumentos internacionales aplicables al caso²⁰⁹.

A través de todas sus acciones y alegaciones, Argentina ha afirmado que Uruguay violó el principio del *pacta sunt servanda* al incumplir las disposiciones establecidas en un tratado bilateral, cuyo contenido y significación es primordial considerando al texto íntegro como una unidad, sin distinción entre cláusulas procedimentales y substanciales, ya que ambas son partes esenciales y complementarias del mismo para que sus disposiciones tengan alguna significación²¹⁰. Es así como afirmó que Uruguay no puede hacer tal distinción entre cláusulas, porque no constituye una interpretación de buena fe acerca del Estatuto²¹¹.

Adicionalmente, ha transmitido su preocupación por el bienestar de sus pobladores de Gualeguaychú y demás alrededores, quienes peligran de ser afectados en sus actividades económicas y turísticas locales debido a la posible contaminación de las plantas celulósicas sobre la biodiversidad, salud y desarrollo social comunitario. Es así como orientó sus principales preocupaciones basándose en el posible impacto negativo que obras de tal naturaleza podrían causar, considerando la falta de búsqueda de otras opciones de la ubicación de las mismas pese a su proximidad a aglomeraciones urbanas, acompañada de la masiva producción prevista por sus promotores que en consecuencia causaría un aumento profuso de sus efluentes al Río, perturbando a la calidad del agua que por ende afecta al consumo y fructífera producción pesquera de los habitantes de la zona, todo lo cual evidencia la insuficiencia de medidas preventivas para reducir los impactos ambientales que causen todos los residuos líquidos, gaseosos y sólidos provenientes de las plantas celulósicas²¹².

En base a todas estas exposiciones manifestadas en su solicitud introductoria de instancia, exposiciones escritas y orales, Argentina solicitó a la Corte que falle y declare que Uruguay violó la obligación internacional de tomar medidas necesarias para la utilización racional del Río, justamente por no informar previamente a CARU y al gobierno argentino sobre la construcción de ambas plantas, incumpliendo así el procedimiento previsto en el

²⁰⁹ República Argentina, Plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina / Uruguay) Memoria de la República Argentina, Libro I, Corte Internacional de Justicia, 15 de enero del 2007, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15426.pdf>, § 3.230, Acceso: 30 de agosto del 2010, 19:40.

²¹⁰ Plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina / Uruguay) Réplica de la República Argentina, op.cit., § 1.41.

²¹¹ Ibíd., § 1.43.

²¹² Cfr. Solicitud introductoria de instancia (Argentina contra Uruguay), op. cit., § 21.

capítulo segundo del Estatuto del Río Uruguay, y por tanto desobedeciendo la obligación de preservar el medio acuático que evite cualquier contaminación transfronteriza mediante la adopción de medidas y evaluaciones de impacto completas que reflejen prácticas ambientales adecuadas²¹³ complementadas de una cooperación bilateral que permita cumplir con lo establecido en otros instrumentos internacionales aplicables. Conjuntamente, Argentina solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional de Uruguay y por lo tanto sus actuaciones deberían cesar, además de reparar a Argentina por el perjuicio causado a partir del incumplimiento de las obligaciones Uruguay mediante la *restitutio in integrum*, es decir desmantelando la planta celulósica Orion que finalmente sí se construyó, cuyos costos serían menores a comparación de la contaminación que causaría al Río en un futuro cercano²¹⁴.

3.2.2 Respuesta y argumentos de defensa de Uruguay

Ante todas las acusaciones de parte de Argentina, la defensa de Uruguay se centró en interpretar el contenido del procedimiento de consulta establecido en el Estatuto del Río Uruguay, además de defender la construcción de las papeleras describiendo su alta tecnología aplicada y ofreciendo una alternativa de control que satisfaga las inquietudes de Argentina.

La principal defensa de Uruguay consistió en afirmar que el Estatuto del Río Uruguay no fue creado con la finalidad de otorgar un derecho de veto a favor de la otra parte, es decir que no se requería previa autorización de Argentina y CARU para la construcción de las obras proyectadas. Afirma que el Estatuto habla de una notificación a la CARU mas no de un acuerdo previo, por lo tanto no estaba obligado a actuar según alega Argentina²¹⁵; Uruguay además afirmó que incluso no estaba en la obligación de notificar a CARU antes de conceder las AAP a ENCE y Botnia, alegando que el Estatuto y Digesto de CARU permiten que la notificación sea incluso después de que el proyecto haya sido autorizado, mas aun tratándose de obras a construirse únicamente dentro de su propia jurisdicción²¹⁶. Uruguay

²¹³ *Ibíd.*, § 5.31.

²¹⁴ Plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina / Uruguay) Réplica de la República Argentina, *op.cit.*, § 5.32.

²¹⁵ Cfr. República Oriental de Uruguay, Plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina vs. Uruguay) Contramemoria de Uruguay, Corte Internacional de Justicia, Volumen I, 20 de julio del 2007, § 2.111, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15428.pdf>, Acceso: 30 de agosto de 2010, 19:55.

²¹⁶ *Ibíd.*, *op.cit.*, § 3.7.

alegó que de todas maneras, Argentina y CARU si tenían conocimiento de los proyectos con prolongada anterioridad al otorgamiento de las AAP ya que este tema se discutía de manera extraoficial entre representantes de la delegación argentina en CARU²¹⁷, además que un año previo al otorgamiento de la AAP a favor de ENCE, CARU ya disponía de un resumen de la EIA que ENCE había entregado al gobierno Uruguayo²¹⁸, al igual que CARU mantuvo reuniones previas con los promotores de Botnia²¹⁹, todo lo cual sustenta la tesis de afirmar que si se concedió información previa a la emisión de las AAP.

Adicionalmente, Uruguay defendió el proyecto de construcción de las plantas celulósicas afirmando que sí se tomaron todas las medidas necesarias para prevenir todo tipo de contaminación exigiendo el cumplimiento íntegro de las disposiciones legales uruguayas, además que Argentina no ha logrado demostrar que las plantas sobrepasarían los estándares de vertimiento de efluentes establecidos por CARU²²⁰; suplementariamente, Uruguay refutó alegando que no existe tal incumplimiento a las disposiciones establecidas en instrumentos internacionales en materia ambiental, ya que al cumplir con los estándares establecidos, es decir utilizando el río de manera equitativa y razonable, no existe contaminación alguna²²¹, ejerciendo así un uso legítimo del Río.

En base a estas afirmaciones, Uruguay considera que no sería necesario buscar otras locaciones alternativas para la construcción de las plantas²²², gracias a la tecnología empleada para la construcción y manejo de las mismas, las cuales incluso han permitido que Botnia se posicione entre las mejores plantas celulósicas del mundo²²³. Así consideró fuera de lugar la posibilidad de desmantelarla, tal como lo solicitó Argentina. Alegó que en caso de comprobarse el incumplimiento al procedimiento de consulta del Estatuto, de todas maneras sería una violación a una obligación procedimental mas no substancial²²⁴, por lo que el

²¹⁷ Ibid., op.cit. § 3.16.

²¹⁸ Ibid., op.cit., § 3.18.

²¹⁹ Ibid., op.cit., § 3.25.

²²⁰ Ibid., op.cit., § 4.32.

²²¹ Ibid., op.cit., § 4.62.

²²² República Oriental de Uruguay, Plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina vs. Uruguay) Contrarréplica de Uruguay, Corte Internacional de Justicia, Volumen I, 29 de julio del 2008, § 5.89, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15431.pdf>, Acceso: 30 de agosto del 2010, 22:45.

²²³ Ibid., § 6.31.

²²⁴ Ibid., § 7.4.

desmantelamiento sería una reparación inapropiada y desproporcionada²²⁵ que causaría un beneficio mínimo a favor de Argentina y perjudicando considerablemente a Uruguay²²⁶.

Finalmente, Uruguay demostró una distinta interpretación a las negociaciones diplomáticas con Argentina, afirmando que estas pretendieron subsanar cualquier incumplimiento del Estatuto implicando la aceptación de construcción de ambas plantas²²⁷, pero que Argentina al contrario solicitaba información exageradamente que ni siquiera guardaba relación con el Estatuto y sus obligaciones, lo cual resulta contradictorio al afirmar que Uruguay siempre mantuvo un alto espíritu de cooperación que le permitió cumplir con todas sus obligaciones procedimentales durante la consulta²²⁸.

Tanto Argentina como Uruguay defendieron sus posiciones con argumentaciones sustentadas y válidas, aunque es evidente la clara discordia y constante diferenciación en cuanto a la interpretación de sus negociaciones directas diplomáticas, cuyas tesis se basan en cierta incertidumbre, ya que la mayoría de estas se realizaron mediante conversaciones sin respaldos en documentos y demás instrumentos escritos que realmente reflejen la voluntad concreta de ambas partes. Existe además una clara distorsión en cuanto a la interpretación de las cláusulas del Estatuto del Río Uruguay, ya que cada parte la analiza a su parecer basándose en la defensa de principios medioambientales y obligación de cumplimiento de los tratados internacionales, tesis confrontada con el rechazo a aceptar el posible desmantelamiento de una obra de alto impacto económico nacional, alegando que en todo caso se trataría de una violación procedimental de mínima importancia, la cual no sería razón suficiente para pedir tal reparación.

3.2.3 Procedimientos incidentales: medidas provisionales

Tal como lo menciona el artículo cuarentaiuno del Estatuto de la Corte, es posible presentar una solicitud de medida provisional en cualquier momento del proceso, a fin de salvaguardar algún derecho que se encuentre en riesgo de ser vulnerado. Es así como Argentina y Uruguay solicitaron la adopción de medidas cuyas motivaciones fueron distintas en cada caso. A continuación analizaremos las razones y fundamentación de ambas,

²²⁵ *Ibíd.*, § 7.10.

²²⁶ *Ibíd.*, § 7.14

²²⁷ *Ibíd.*, § 7.7 y 7.8.

²²⁸ *Ibíd.*, § 3.100.

además de la decisión de la Corte respecto a este procedimiento incidental dentro del caso principal.

En primer lugar, conjuntamente con la solicitud introductoria de instancia, Argentina solicitó la adopción de medidas provisionales respecto a Uruguay, insistiendo en que la construcción de ambas plantas celulósicas pueden causar un grave perjuicio económico y social a los ciudadanos que habitan a orillas del río Uruguay, causando una disminución a las actividades turísticas y al valor a bienes inmuebles de la zona, provocando en consecuencia una alta tasa de desempleo, todo lo cual no sería reparable pecuniariamente ni a través de otra prestación material²²⁹. Afirmó que la puesta en servicio de las plantas estaba prevista a realizarse incluso antes de que la Corte emita su fallo final, por lo que consideró que estas medidas deberían sean tomadas de manera urgente a fin de evitar estos perjuicios irreparables²³⁰. Fue así como solicitó a la Corte que ordene la suspensión de toda autorización a construir y la construcción misma de las plantas celulósicas además que Uruguay se comprometa de buena fe a no tomar otra medida unilateral que pueda agravar la controversia²³¹.

Ante esta solicitud, Uruguay respondió defendiendo su actuación nacionalista respecto de las precauciones ambientales tomadas antes de conceder las AAP a las plantas CMB y Orion, cumpliendo con las disposiciones establecidas en su legislación nacional²³². Prontamente, Uruguay también presentó su solicitud de medidas provisionales, alegando que era necesaria la intervención de la Corte a fin de cesar y prevenir futuros cortes de rutas provocados por ciudadanos argentinos, los cuales, asevera Uruguay, fueron alentados por el Gobierno argentino a manera de presión para que no se construyan definitivamente ambas plantas celulósicas²³³. Finalmente, acusó a Argentina de ser internacionalmente responsable por los bloqueos, tal como ya lo había pronunciado el Tribunal Arbitral del MERCOSUR²³⁴,

²²⁹ República Argentina, Solicitud de medidas provisionales presentada por el Gobierno de la República Argentina, Corte Internacional de Justicia, 4 de mayo del 2006, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/10780.pdf>, § 12, Acceso: 25 de febrero del 2011, 14:05.

²³⁰ *Ibíd.*, § 11.

²³¹ *Ibíd.*, § 16.

²³² República Oriental de Uruguay, Observaciones escritas de Uruguay sobre la solicitud de medidas provisionales de Argentina, Volumen I, Corte Internacional de Justicia, 10 de mayo del 2006, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/13405.pdf>, p.5, Acceso: 01 de marzo del 2011.

²³³ República Oriental de Uruguay, Solicitud de medidas provisionales presentadas por Uruguay, Corte Internacional de Justicia, 30 de noviembre del 2006, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/13485.pdf>, § 4.

²³⁴ *Ibíd.*, § 8.

causando graves perjuicios económicos comerciales y por lo tanto, impidiendo una solución pacífica y diplomática de la controversia²³⁵.

3.2.3.1 Providencias denegatorias emitidas por la Corte Internacional de Justicia

Luego de analizar las circunstancias y motivaciones de las partes, la Corte resolvió negar ambas solicitudes de medidas provisionales; respecto de Argentina, afirmó que “no existe evidencia que demuestre que la decisión de Uruguay de autorizar la construcción de las plantas celulósicas implican una amenaza inminente de daño irreparable al medio acuático del Río Uruguay o a los intereses económicos y sociales de los habitantes ribereños del lado Argentino del Río”²³⁶; en adición a aquello, afirmó que:

*En base a los elementos de prueba de los cuales dispone actualmente, la Corte no está convencida por el argumento según el cual los derechos reivindicados por Argentina ya no podrían seguir estando resguardados si la Corte no ordena en este punto de la instancia, la suspensión de la autorización de construir las plantas celulósicas y la suspensión de los trabajos de construcción propiamente dichos.*²³⁷

Respecto de la solicitud de Uruguay, es necesario rescatar lo siguiente de la providencia emitida por la Corte:

*Considerando que la Corte, sin examinar la cuestión de saber si las obstaculizaciones pueden haber causado o pueden continuar causando daños a la economía uruguaya, no está convencida, en base a lo que precede, que estos bloqueos amenazan causar un perjuicio irreparable a los derechos que Uruguay reclama en el presente caso dentro del Estatuto de 1975 como tales.*²³⁸

²³⁵ *Ibíd.*, § 26.

²³⁶ “...ne contient cependant aucun élément démontrant que la décision de l'Uruguay d'autoriser la construction des usines créerait un risque imminent de préjudice irréparable pour le milieu aquatique du fleuve Uruguay ou pour les intérêts économiques et sociaux des populations riveraines établies du côté argentin du fleuve.”(Texto original). Corte Internacional de Justicia, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), medidas provisionales, providencia del 13 de julio del 2006, Corte Internacional de Justicia Recopilación de fallos, opiniones consultivas y providencias, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/11234.pdf>, § 73, Acceso: 2 de marzo del 2011, 10:40.

²³⁷ *Ibíd.*, § 76 “...au vu les éléments de preuve dont elle dispose actuellement, la Cour n'est pas convaincu par l'argument selon lequel les droits revendiqués par l'Argentine ne pourrait plus être protégés si la Cour décidait de ne pas ordonner à ce stade de l'instance la suspension de l'autorisation de construire les usines de pâte a papier et la suspension des travaux de construction proprement dits” (Texto original).

²³⁸ “Considérant que la Cour, sans examiner la question de savoir si les barrages peuvent avoir causé ou peuvent continuer de causer des dommages a l'économie uruguayenne, n'est pas convaincue au

A partir de esta declaración, es posible determinar que no existe relación alguna entre los bloqueos realizados y la construcción de la planta, permitiendo desmentir la aseveración uruguaya que afirmaba que la presión ejercida por Argentina a través de los bloqueos habría impedido la continuación de la construcción de las plantas. Es así como la Corte mencionó lo siguiente:

*Considerando que la Corte, habiendo escuchado a los alegatos de las Partes, estima que, a pesar de la obstaculización, la construcción de la planta Botnia ha progresado considerablemente desde el verano del 2006, dos nuevas autorizaciones habrían sido concedidas, y que en la actualidad se encuentra bastante avanzada; que la construcción de la planta prosigue.*²³⁹

Tal como la jurisprudencia de la Corte lo ha señalado en varias ocasiones, es preciso recordar que las medidas provisionales “*cumplen el objeto de salvaguardar el derecho de cada una de las partes mientras ésta emite su decisión, y presupone que un perjuicio irreparable no debe causarse a los derechos en litigio dentro de un procedimiento judicial*”²⁴⁰, es decir que deben ser aplicadas “*en espera del fallo definitivo de la Corte en el fondo y en consecuencia, no son justificadas a menos que se trate de una urgencia, es decir que sea probable que una acción prejudicial a los derechos de una u otra parte será cometida antes de que tal fallo definitivo sea pronunciado*”²⁴¹. Tomando en consideración estos condicionantes, es posible determinar que la continuación de la construcción de la planta

vu de ce qui précède que ces barrages risquent de causer un préjudice irréparable aux droits que l'Uruguay prétend en l'espèce tirer du statut de 1975 en tant que tels.” (Texto original) Corte Internacional de Justicia, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), medidas provisionales, providencia del 23 de enero del 2007, Corte Internacional de Justicia, Recopilación de fallos, opiniones consultivas y providencias, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/13614.pdf>, § 41, Acceso: 02 de marzo de 2011, 11:02.

²³⁹ “*Considérant que la Cour, ayant entendu les Parties en leurs plaidoiries, estime que, en dépit des barrages, la construction de l'usine Botnia a considérablement progressé depuis l'été 2006, deux nouvelles autorisations ayant été accordées, et qu'elle est a présent bien avancée; que la construction de l'usine se poursuit donc*” (Texto original) *Ibíd.*, § 40.

²⁴⁰ “*...a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant qu'elle rende sa décision, et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire*” (Texto original). Corte Internacional de Justicia, Providencia sobre medidas provisionales en el Asunto de ciertos procedimientos criminales en Francia, República del Congo contra Francia, 17 de junio de 1993, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/129/8203.pdf>, § 16, Acceso: 7 de abril del 2011, 22:54.

²⁴¹ “*en attendant l'arrêt définitif*» de la Cour au fond et ne sont par conséquent justifiées qui s'il y a urgence, c'est-à-dire s'il est probable qu'une action préjudiciable aux droits de l'une ou l'autre Partie sera commise avant qu'un tel arrêt définitif ne soit rendu. (Texto original). Corte Internacional de Justicia, Providencia sobre medidas provisionales en el Asunto del pasaje por el Gran Belt, Finlandia contra Dinamarca, Corte Internacional de Justicia, 29 de julio de 1991, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/86/6968.pdf>, § 23, Acceso: 7 de abril del 2011, 22:00.

Orion durante el desarrollo del caso ante la Corte, sí podría causar un perjuicio irreparable a Argentina, respecto de la posible contaminación ambiental que esta le acarrearía por lo tanto se evidencia la urgencia que justifique la necesidad de la adopción de medidas provisionales; la Corte debió haber considerado que si al finalizar el proceso se demostraba irrefutablemente la futura contaminación de la planta e incumplimiento del Estatuto por parte de Uruguay, ésta hubiera emitido su fallo obligándole a ejecutar la debida reparación a favor de Argentina por los perjuicios causados, lo que hubiera sido contradictorio y poco práctico considerando que la construcción de la planta estaría prácticamente finalizada, por lo que se procedería al desmantelamiento de la misma; para evitar incurrir en estas posibles consecuencias y considerando que *“la Corte debe preocuparse de salvaguardar mediante tales medidas, los derechos que el fallo que emita ulteriormente pueda eventualmente reconocer sea a favor del demandante, o a favor del acusado”*²⁴², hubiera sido más prudente que la Corte declare la suspensión de los trabajos de construcción hasta que emita su fallo final sobre el caso principal.

Además, reconociendo que se trata de una obra de alto riesgo contaminante, incluso reconocido por las mismas autoridades ambientales uruguayas, es imprescindible la aplicación de los principios preventivo y precautorio sobre contaminación ambiental, recurridos en varios tratados internacionales de protección medioambiental²⁴³, conjuntamente con la necesaria protección de la salud y bienestar de los habitantes de la zona ribereña, derechos que han sido varias veces defendidos por la misma Corte Internacional de Justicia, tal como ocurrió en el caso del personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, donde la Corte consideró necesaria la adopción de medidas provisionales *“considerando la persistencia de la situación que forma parte del objeto de la solicitud expone a los seres humanos sujetos a privaciones, a una suerte penosa y angustiosa, incluso a peligros de vida y salud, y en consecuencia a una posibilidad seria de perjuicio irreparable”*²⁴⁴, lo que evidencia la seria incidencia que implica la protección no solo

²⁴² *Ibíd.*, *“la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par le telles mesures les droits que l’arret qu’elle aura ultérieurement a rendre pourrait éventuellement reconnaître soit au demandeur, soit au défendeur”* (Texto original). Providencia sobre medidas provisionales en el Asunto de ciertos procedimientos criminales en Francia, República del Congo contra Francia, § 22.

²⁴³ *Infra* (p.80).

²⁴⁴ *“Considérant que la persistance de la situation qui fait l’objet de la requête expose les êtres humains concernés a des privations, a un sort pénible et angoissant et même a des dangers pour leur vie et leur santé et par conséquent a une possibilité sérieuse de préjudice irréparable.”* (Texto original) Corte Internacional de Justicia, Providencia sobre Medidas Provisionales sobre el Asunto concerniente al personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, Estados Unidos de América contra

del ambiente, sino de los seres humanos respecto de su bienestar y salud, cuya valoración y protección internacional supera inmensurablemente toda construcción de obras físicas.

Es así como la Corte tenía la obligación de prevenir no solo un daño ambiental sino la afectación a los derechos de las personas que habitan próximas a los puntos de vertimiento y contaminación, todo mientras continuaba el proceso de fondo, ya que justamente se planteaban dudas sobre la eficacia y certeza de las medidas preventivas tomadas por las autoridades ambientales uruguayas y promotores de los proyectos.

Al contrario, las medidas provisionales solicitadas por Uruguay a fin de evitar cortes de vías constituyen un incidente referente a la libre circulación y libertad de comercio, tema ya tratado y resuelto por el Tribunal del MERCOSUR, en base al Tratado de Asunción, el cual no guarda relación alguna con el Estatuto del Río Uruguay y por lo tanto concede competencia alguna a la Corte para resolverlo²⁴⁵.

Respecto a la actuación de la Corte en esta etapa incidental del proceso, insisto en cuestionar qué constituiría un posible daño inminente por el cual sí aplique medidas provisionales, ya que a criterio de la Corte, la construcción de obras de alto riesgo contaminante no constituyen un hecho determinante que requiera la aplicación de una medida consistente en la suspensión de la construcción hasta la resolución del final caso, pese a que una pausa de construcción sería reparable, mientras que un río contaminado no lo sería en su totalidad.

3.2.4 Examen al fallo de la Corte

Luego de concluir todas las etapas del proceso, finalmente la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo final, definitivo e inapelable, en cinco puntos principales, donde analiza cada una de las alegaciones de las partes, procediendo a su confrontación con las pruebas actuadas y entregadas a fin de esclarecer la verdad.

Inicialmente, la Corte realizó una distinción entre las obligaciones procedimentales y de fondo, es decir, acogiendo la posición de Uruguay, al alegar que las primeras son el medio para alcanzar las segundas, por lo tanto, según la Corte, es posible que se incurra en

Irán, Corte Internacional de Justicia, 15 de diciembre de 1979, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6283.pdf>, § 42, Acceso: 12 de abril del 2011.

²⁴⁵ Ver: Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Medidas Provisionales, Providencia del 23 de enero del 2007, op.cit., § 21.

la violación de alguna de ellas, sin que esto acarree una violación automática de las segundas, concluyendo en que es posible establecer el incumplimiento en distintos tipos de categorías según las cláusulas de que se traten²⁴⁶.

Una vez realizada esta distinción, la Corte reconoció la importancia de informar a CARU previo a la realización de un proyecto de tal magnitud, como son las plantas celulósicas, todo para alcanzar el objetivo principal del Estatuto²⁴⁷; lo cual resulta contradictorio según sus posteriores afirmaciones de que Uruguay sí cumplió con sus obligaciones de fondo, es decir, permitiendo alcanzar el mismo objetivo del Estatuto.

Adicional a esto, reconoció la importancia imprescindible de CARU, descartando la visión de reducirla a un simple mecanismo de consulta establecido a discreción de las partes, tal como lo afirmaba Uruguay²⁴⁸, al contrario afirmó lo siguiente:

*Al valer CARU como cuadro de concertación entre las partes, notamente para los proyectos de obras enfocados en el primer párrafo del artículo 7 del Estatuto de 1975, ninguna de ellas puede librarse unilateralmente en el momento en que lo considere oportuno, y sustituirlo con otros canales de comunicación. Al crear CARU y al dotarle de todos los medios necesarios para su funcionamiento, las partes pretendieron conceder las mejores garantías de estabilidad, continuidad y eficacia destinada a su voluntad de cooperar en la «utilización racional u óptima del río».*²⁴⁹

En tal razón, la Corte pronunció que Uruguay no informó a CARU ni a Argentina, previamente a la construcción de la planta Orion, por lo tanto violó el artículo siete del Estatuto²⁵⁰, el cual claramente prevé la obligación de notificar:

La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad

²⁴⁶ Corte Internacional de Justicia, Asunto relativo a las plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay) Fallo del 20 de abril del 2010, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15878.pdf>, § 78, Acceso: 27 de agosto del 2010, 13:23.

²⁴⁷ Ibid., § 81.

²⁴⁸ Ibid., § 91.

²⁴⁹ Ibid., § 90: *La CARU servant de cadre de concertation entre les parties, notamment pour les projets d'ouvrages envisagés au premier alinéa de l'article 7 du statut de 1975, aucune d'entre elles ne peut sortir unilatéralement et au moment qu'elle juge opportun de ce cadre et lui substituer d'autres canaux de communication. En créant la CARU et en la dotant de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, les parties ont entendu donner les meilleures garanties de stabilité, de continuité et d'efficacité à leur volonté de coopérer à «l'utilisation rationnelle et optimale du fleuve».* (Texto original).

²⁵⁰ Ibid., § 111.

suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte.

Si así se resolviera o no se llegara a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión.

En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas.²⁵¹

Es así como en el tercer punto del fallo, la Corte descartó las alegaciones uruguayas que insistían en que el acuerdo presidencial del dos de marzo del dos mil cuatro y la posterior creación de GTAN hayan pretendido derogar la aplicación del Estatuto o exonerar a las partes de su cumplimiento²⁵².

Pese a este reconocimiento de incumplimiento por parte de Uruguay, en el cuarto punto la Corte indica por qué consideró que Argentina no logró demostrar el incumplimiento uruguayo respecto de las obligaciones de fondo, es decir que la falta de uso racional del río, la modificación a su equilibrio ecológico, la contaminación al medio acuático, y la falta de la mejor tecnología aplicada, no fueron probados y por lo tanto, no se declaró nada en contra de Uruguay respecto de este tema, pese a que la misma Corte admitió que “*los elementos de prueba no permiten establecer claramente un relación entre la presencia incrementada de dioxano y furano en el río y la explotación de la planta Orion (Botnia)*”²⁵³, evidenciando cierta duda acerca de su real existencia o no, a pesar de que el antes mencionado principio de precaución exige que la duda o falta de certeza científica, no justifica la falta de toma o aplazamiento de medidas preventivas de contaminación. Es así como la Corte emitió su fallo sin considerar la necesaria e incluso obligatoria aplicación de principios de derecho internacional del medio ambiente, por lo que para emitir su fallo únicamente estudió las acusaciones de parte de Argentina de forma tradicional, sin hacer uso de todas sus

²⁵¹ Estatuto del Río Uruguay, op.cit., artículo 7.

²⁵² Asunto relativo a las plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay) Fallo del 20 de abril del 2010, op. cit. § 131 y 149.

²⁵³ Ibíd., “...les éléments de preuve me permettent pas d'établir clairement un lien entre la présence accrue de dioxines et de furanes dans le fleuve et l'exploitation de l'usine Orion (Botnia)”. (Texto original) § 259.

facultades y herramientas que le permitan esclarecer la verdad respecto de las pruebas aportadas.

Finalmente, la Corte consideró que:

*La constatación del comportamiento ilícito de Uruguay en lo concerniente a sus obligaciones de naturaleza procedimental constituye en sí misma una medida de satisfacción para Argentina. Respecto del incumplimiento de Uruguay a las obligaciones de naturaleza procedimental que hayan tenido lugar en el pasado y hayan finalizado, no cabe ordenar su cesación.*²⁵⁴

Es decir que la Corte consideró satisfactoriamente suficiente para Argentina, el reconocimiento del incumplimiento de Uruguay respecto de las obligaciones procedimentales del Estatuto, debido a la construcción de la planta Orion antes de que finalicen las negociaciones bilaterales; por lo tanto, descartó la reparación a manera de restitución, descartando la posibilidad de regresar a las circunstancias iniciales previo al cometimiento del hecho ilícito. La Corte finalizó con una recomendación a ambas partes, respecto de la necesidad de cooperación para mantener un control de una instalación industrial colosal, como es una planta productora de pasta celulósica²⁵⁵.

Pese a que esta constituya la decisión final de la Corte, existieron varias opiniones disidentes e individuales de los jueces que la conforman, y aportaron con varios elementos que permitieron aclarar la posición de la Corte al igual que contrariarla con ciertos criterios bastante válidos.

3.2.4.1 Opiniones Disidentes: falta de debida diligencia de la Corte

En aplicación del artículo cincuenta y siete del Estatuto de la Corte, los jueces tuvieron el derecho de presentar sus opiniones disidentes e individuales, en caso de que el fallo no sea emitido en unanimidad al no expresar en todo o en parte, las opiniones vertidas por ellos. Fue así como las opiniones disidentes e individuales tuvieron dos posturas contrarias, por una parte dos de los jueces insistieron en sus opiniones individuales que

²⁵⁴ Ibid., § 269 “La Cour considère que al constatation du comportement illicite de l'Uruguay en ce qui concerne ses obligations de nature procédurale constitue en elle-même une mesure de satisfaction pour l'Argentine. Les manquements de l'Uruguay aux obligations de nature procédurale ayant eu lieu par le passé et ayant pris fin, il n'y a pas lieu d'en ordonner la cessation”. (Texto original)

²⁵⁵ Ibid., § 281.

Uruguay no violó sus obligaciones de fondo establecidas en el Estatuto²⁵⁶, incluso el juez AD-HOC nombrado por Uruguay llegó a afirmar que Uruguay no incurrió en ninguna violación, al actuar de buena fe en las negociaciones con Argentina²⁵⁷; finalmente acordaron en que la Corte analizó correctamente las pruebas aportadas por las partes y por lo tanto no fue necesario recurrir a otros medios para esclarecer dudas²⁵⁸.

A contrapartida de esto, seis jueces coincidieron que tras el análisis de las pruebas aportadas la Corte aun demostraba dudas en cuanto a la credibilidad y viabilidad de las mismas²⁵⁹, ya que refutó únicamente alegando que Argentina no había probado en su totalidad la contaminación mencionada, sin mostrarse convincente respecto de la certeza de las pruebas aportadas por Uruguay; castigan el uso de “peritos fantasmas” internos²⁶⁰ en un caso tan complejo, al contrario insisten en la necesidad de recurrir a otras herramientas como el peritaje independiente, a fin de dotar al proceso de amplia transparencia e imparcialidad en la práctica de las pruebas:

*Mientras los Estados continúen aportando casos que envuelvan aspectos científicos y tecnológicos complejos ante la Corte, ellos necesitarán observar que los hechos relacionados a sus casos sean apreciados y comprendidos en su totalidad por la Corte. Por lo tanto serviría bastante a la Corte que en el futuro haga mejor uso de los poderes concedidos por el Estatuto para resolver casos con intensidad de hechos y complejidad científica y desarrolle, en este propósito, una estrategia clara que le permita evaluar la necesidad de un peritaje en una etapa temprana de sus deliberaciones en un caso.*²⁶¹

²⁵⁶ Juez Kenneth Keith, Opinión Individual, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15881.pdf>, § 16, Acceso: 4 de marzo del 2011, 9:20. Y: Juez Christopher Greenwood, Opinión individual, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15889.pdf>, § 10, Acceso: 4 de marzo del 2011, 9:40.

²⁵⁷ Juez AD-HOC Santiago Torres Bernárdez, Opinión individual, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15892.pdf>, § 104, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:05.

²⁵⁸ Juez Kenneth Keith, op.cit., § 24; Juez AD-HOC Santiago Torres Bernárdez, op.cit. §1; y, Juez Christopher Greenwood, op.cit., § 25.

²⁵⁹ Juez AD-HOC Raúl Vinuesa, Opinión Disidente, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15893.pdf>, § 70, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:10.

²⁶⁰ Jueces Aw Shawkat Al-Khasawneh y Bruno Simma, Opinión Disidente Común, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15879.pdf>, § 14, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:20.

²⁶¹ “As States continue to bring cases involving complex scientific and technological aspects before the Court, they will need to see that the facts related to their case are fully understood and appreciated by the Court. It would therefore serve the Court well in the future to make better use of the powers granted

Exigieron que la práctica de pruebas tenía que ser más estricta que de costumbre, ya que se trata de un tema de contaminación ambiental transfronteriza, para lo cual la Corte omitió analizar el caso de acuerdo a los principios generales de derecho ambiental, justamente por no entender el carácter progresivo del Estatuto, instrumento que logró institucionalizar obligaciones de informar, notificar y cooperar, todas destinadas a proteger el medioambiente en este caso específico²⁶². Dentro de este grupo, se encuentran tres jueces que afirman rotundamente que Uruguay sí incumplió sus obligaciones de fondo²⁶³, consideran que el procedimiento de consulta establecido en los artículos siete al doce del Estatuto, constituye parte integral del objetivo y propósito del instrumento internacional como tal:

*[...] el artículo 1 debe ser considerado como una cláusula paraguas que establece un mecanismo conjunto para la observancia de obligaciones sustanciales a fin de alcanzar una utilización óptima y racional del río. Mientras que el contenido del artículo 27, considerado por la Corte como “la esencia del desarrollo sustentable” [...], constituye por sí mismo una obligación sustancial.*²⁶⁴

En tal razón, afirman que sí existía una obligación de no construir, en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo a través de las negociaciones bilaterales, es decir que en este caso, la parte que proyectaba la obra, tenía la opción de desistir del proyecto o someterlo a decisión de la Corte²⁶⁵.

to it by its Statute to deal with fact-intensive and scientifically complex cases and to develop, for that purpose, a clear strategy which would enable it to assess the need for an expert opinion at an early stage of its deliberations on a case.” (Texto original) Ibid., § 17. Juez Raúl Vinuesa, op.cit., § 93; Y: Juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, Declaración, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15887.pdf>, § 7 y 14, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:40.

²⁶² Juez Antonio Augusto Cançado Trindade, Opinión Individual, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15885.pdf>, § 53, 98 y 220. Y: Jueces Aw Shawkat Al-Khasawneh y Bruno Simma, op.cit., § 22.

²⁶³ Juez Raúl Vinuesa, op.cit., § 1. Y: Juez Leonid Skotnikov, Declaración, Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15883.pdf>, § 2.

²⁶⁴ *[...] article 1 should be considered as an umbrella clause establishing joint machinery for the observance of substantial obligations to accomplish the optimum and rational utilization of the river. Meanwhile, the content of Article 27, considered by the Court as “the essence of sustainable development” [...], constitutes in itself a substantial obligation.* (Texto original) Juez Raúl Vinuesa, op.cit., § 47.

²⁶⁵ Juez Leonid Skotnikov, op.cit., § 3 y 9.

En suma, consideran que la Corte realizó una interpretación indebida de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Río Uruguay, restándoles su importancia meritoria, a causa de la carencia de aplicación de principios generales de derecho ambiental, que indiscutiblemente son elementos que integran al Estatuto²⁶⁶.

En base a todas estas declaraciones y opiniones individuales de los jueces de la Corte, es evidente que no existió un criterio unánime acerca del fallo que castiga la actuación de Uruguay en este caso particular. Hay quienes reafirman la decisión de la Corte, otros que no la rechazan en su totalidad, existen desacuerdos respecto de la factibilidad y credibilidad de las pruebas actuadas, critican la falta de peritajes independientes aportados por la misma Corte; otros difieren respecto del grado de responsabilidad de Uruguay, cuestionando si su actuación vulneró obligaciones sustanciales y no solo procedimentales, se evidencian además, distintas interpretaciones de las cláusulas constitutivas del Estatuto, alegando la aportación ineludible de principios de derecho ambiental.

A partir de todas estas alegaciones integrantes del desarrollo del caso, es posible evidenciar que la materia de la controversia versa sobre la interpretación y aplicación del Estatuto del Río, ante lo cual es necesario esclarecer su contenido, objetivos, intenciones de las partes que lo crearon, los principios de derecho internacional aplicables, y demás elementos que permitan determinar claramente los propósitos de sus cláusulas integrantes de dicho instrumento, antes de establecer cualquier grado de responsabilidad en contra de una de las partes, porque si no están despejadas dudas acerca de las intenciones y objetivos del instrumento internacional base de la controversia, el caso no puede ser resuelto correctamente; en tal razón, procederemos a continuación a interpretar el Estatuto del Río Uruguay.

3.3 Análisis de las reglas generales de interpretación de los tratados aplicadas al caso particular

Tal como lo tratamos en el capítulo primero de esta obra, la interpretación es una herramienta útil que permite esclarecer el significado de una norma, en este caso convencional, mediante el análisis del texto, de su fin, considerando el comportamiento e intención de las partes, además de los trabajos previos a la conclusión final del texto, incluso

²⁶⁶ Juez Antonio Augusto Cançado Trindade, op.cit., § 67.

analizando las circunstancias sociales anteriores y presentes al momento de la creación del mismo; todo con el objetivo de precisar el sentido del instrumento y determinar su alcance, para luego aplicarlo y establecer la responsabilidad en contra de la Parte que lo haya violado.

En este caso puntual, la Corte no realizó la interpretación del Estatuto del Río Uruguay en su fallo, el máximo acercamiento constituyó la alegada distinción entre obligaciones procedimentales y sustanciales además de la explicación superficial y literal del procedimiento de consulta establecido entre los artículos siete y doce del Estatuto. Justamente esta falta de análisis causó opiniones disidentes dentro de los mismos jueces que conforman la Corte, en tal razón es necesario analizar todos los elementos que rodean este Tratado bilateral a fin de determinar su debida aplicación y de ser el caso la responsabilidad de alguna de las Partes respecto de su incumplimiento.

3.3.1 Interpretación del Estatuto del Río Uruguay según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Pese a las distintas posturas acerca de la obligatoriedad de aplicación de las reglas de interpretación contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, es preciso resaltar que este instrumento constituye el parámetro de aceptación universal para interpretar una norma convencional, en tal razón es preciso aplicar sus criterios para realizar la interpretación del Estatuto del Río Uruguay. Es preciso resaltar que la siguiente interpretación se realizará de buena fe²⁶⁷, en concordancia con el sentido corriente de los términos empleados, únicamente con el objetivo de dilucidar el sentido y alcance del Tratado.

3.3.1.1 Objetivo y fin

Primeramente, es posible identificar el objetivo y fin del Estatuto establecido en el artículo uno del capítulo primero, el cual claramente define que el Tratado fue creado “*con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay*”²⁶⁸, a partir del cual se establecen los temas subsiguientes que abarca el Tratado, comprendiendo la navegación, construcción de obras, practicaje, facilidades portuarias, alijos y complementos de carga, salvamento

²⁶⁷ Ver: Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, op.cit., artículo 31 (1).

²⁶⁸ Estatuto del Río Uruguay, op.cit. artículo 1.

aprovechamiento de aguas, recursos del lecho y del subsuelo, conservación, utilización y explotación de otros recursos naturales, contaminación, investigación, la creación de una comisión administradora del Río, y finalmente, el procedimiento conciliatorio para resolver cualquier controversia que surgiera entre las partes. A partir del contenido del Tratado, es posible determinar que su objetivo principal consiste en actuar de acuerdo a un procedimiento establecido por ambas partes, orientado a utilizar un recurso natural hídrico de forma limitada empleando medios inmejorables que permitan alcanzar un máximo beneficio sin causar graves estragos que afecten las condiciones originales del Río.

3.3.1.2 Contexto

Una vez establecido el objetivo y fin del Tratado, es necesario esclarecer el contexto bajo el cual este instrumento fue creado, el cual en este caso en particular, evidencia una práctica común constante entre Argentina y Uruguay de reglar mediante convenios bilaterales temas como son el uso de ríos, creación de comisiones administradoras técnicas mixtas y construcción de obras; todos estos constituyen un precedente que evidencia el comportamiento de arreglo diplomático bilateral que han mantenido ambos países antes de crear el Estatuto del Río Uruguay²⁶⁹.

²⁶⁹ NB: Algunos de los tratados relacionados son: Protocolo sobre la navegación y uso de las aguas del río de la Plata entre la República Argentina y la República Oriental de Uruguay (Montevideo, 5 de enero de 1910); Convenio relativo al aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona del Salto Grande entre Argentina y Uruguay (Montevideo, 30 de diciembre de 1946); Acta de constitución de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (Buenos Aires, 26 de septiembre de 1958); Nombramiento de Comisión para la construcción del puente internacional sobre el Río Uruguay (Montevideo, 23 de noviembre de 1960); Protocolo del río de la Plata entre el Gobierno de la República Argentina y la República Oriental de Uruguay (Buenos Aires, 14 de enero de 1964); Acuerdo sobre regulación del tráfico aéreo sobre el río de la Plata entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental de Uruguay (Montevideo, 5 de octubre de 1964); Acuerdo por notas reversales sobre el funcionamiento de la Comisión Mixta para el levantamiento integral del río de la Plata, entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental de Uruguay (Montevideo, 31 de diciembre de 1964); Plan definitivo y reglamento de la Comisión Mixta para el levantamiento integral del río de la Plata (Montevideo, 8 de junio de 1965); Acuerdo argentino-uruguayo donde se establece la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (Montevideo, 15 de julio de 1974); Acuerdo sobre el Estatuto de la Comisión administradora del río de la Plata (Montevideo, 15 de julio de 1974); Acuerdo por canje de notas complementario del Tratado del río de la Plata y su frente marítimo relativo al trazado correspondiente al límite lateral marítimo, zona común de pesca, zona común de prohibición de vertimiento de hidrocarburos y otras acciones contaminantes, (Montevideo, 15 de julio de 1974). En: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y culto de la República Argentina, Biblioteca Digital de Tratados, <http://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php?consulta=si&modo=c&pg=8>, Acceso: 9 de marzo del 2011, 19:20.

En particular es necesario resaltar la Declaración Argentino-Uruguay sobre el Recurso del Agua²⁷⁰, creado con el fin de “*obtener una razonable y equitativa participación de los Estados en los usos y beneficios de las aguas de los ríos internacionales y sus afluentes*”²⁷¹, el cual constituye una clara muestra del contexto político y normativo que mantenían ambos países previo a la celebración del Estatuto del Río Uruguay, ya que su preámbulo resalta “*el espíritu de tradicional solidaridad y amistosa cooperación que preside las relaciones mutuas de sus Gobiernos y pueblos*”²⁷². Esta Declaración, incluso constituye un antecedente al Estatuto, ya que además de compartir la misma estructura textual, reconoce que ambos países ya han iniciado el aprovechamiento del río Uruguay y por lo tanto resalta el “*adelanto de los trabajos conjuntos para la elaboración del Estatuto del Río Uruguay, lo que constituye una demostración concreta de amplio entendimiento y estrecha colaboración entre ambas partes*”²⁷³. Es así como ambas partes coincidieron en los siguientes principios básicos para el uso de ríos internacionales y sus afluentes:

1. *La utilización de las aguas fluviales se harán en forma equitativa y razonable.*
2. *Se evitará cualquier forma de contaminación de los ríos internacionales y sus afluentes y, asimismo, se preservarán los recursos ecológicos en las zonas de sus respectivas jurisdicciones.*
3. *Cuando un Estados se proponga realizar un aprovechamiento del recurso, facilitará previamente a los Estados interesados el proyecto de la obra, el programa de operación y los demás datos que permitan determinar los efectos que esa obra producirá en el territorio de dichos Estados.*
4. *La parte requerida deberá comunicar, dentro de un plazo razonable, si hay aspectos del proyecto o del programa de operación que puedan causarle perjuicios sensibles. En tal caso, indicará las razones técnicas y cálculo en que se funde o las sugerencias de modificación del proyecto o del programa de operación notificado, destinadas a evitar aquel perjuicio.*
5. *Los diferendos que por esta razón se suscitaren serán sometidos a la decisión de una Comisión Técnica Mixta. En caso de desacuerdo entre los técnicos, éstos elevarán un informe*

²⁷⁰ República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración argentino-uruguay sobre el recurso agua, suscrito en Buenos Aires el 9 de julio de 1971, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=6630&tipo=1, Acceso: 10 de marzo de 2011, 11:34.

²⁷¹ *Ibíd.*, preámbulo.

²⁷² *Id.*

²⁷³ *Id.*

*a los Gobiernos expresando sus puntos de vista. Los Gobiernos tratarán de encontrar una solución por la vía diplomática o por otro medio que escojan de común acuerdo, procurando siempre llegar a una solución amistosa y equitativa.*²⁷⁴

Si realizamos una comparación entre estos principios enunciados con los artículos contenidos en el Estatuto, podemos evidenciar claramente que ambos mantienen los mismos objetivos orientados a un uso equitativo y racional de los recursos hídricos compartidos, además de destacar la importancia de protección a la biodiversidad y prevención de todo tipo de contaminación²⁷⁵. Adicionalmente, ambos tratados coinciden en la necesidad de la cooperación mutua plasmada en la notificación previa que debe realizar la Parte que proyecta la realización de una obra, además de la participación constante y activa de una comisión técnica mixta como CARU en la aplicación del Estatuto.

Siguiendo la misma tendencia de arreglo diplomático conjunto de problemáticas acerca del uso de ríos internacionales, Argentina y Uruguay celebraron el Tratado de Límites en el río Uruguay, un instrumento internacional que abrió la puerta a la creación del Estatuto y que a su vez permitió determinar el contexto previo al mismo, ya que al igual que en anteriores tratados, este Tratado establece claramente en su artículo séptimo, la necesidad de crear un estatuto que regule las siguientes materias:

- a) Reglamentación común y uniforme para la seguridad de la navegación.*
- b) Régimen de pilotaje que respete las prácticas actualmente vigentes.*
- c) Reglamentación para el mantenimiento del dragado y balizamiento [...].*
- d) Facilidades recíprocas para relevamientos hidrográficos y otros estudios relacionados con el río.*
- e) Disposiciones para la conservación de los recursos vivos.*
- f) Disposiciones para evitar la contaminación de las aguas.*²⁷⁶

Efectivamente, todas estas materias fueron tratadas y reguladas en el Estatuto del río Uruguay en cada uno de los artículos que lo componen, a fin de cumplir con el objetivo

²⁷⁴ Id.

²⁷⁵ NB: Tema tratado en los capítulos IX (Conservación, Utilización y Explotación de otros recursos naturales) y X (Contaminación) en el Estatuto del Río Uruguay.

²⁷⁶ Tratado de límites en el Río Uruguay, op.cit. artículo 7.

principal de aprovechar el río de forma óptima y racional. A partir de la creación de este tratado, las prácticas bilaterales evidenciaron una satisfacción mutua respecto del contenido del Estatuto creado²⁷⁷ y continuaron demostrando un patrón de conducta enfocado en actuar en base “*el principio de acuerdo previo para toda obra o actividad que cualquiera de las partes proyecte realizar en su tramo compartido*”²⁷⁸ complementado con la cooperación mutua entre los Estados.

La Convención de Viena señala claramente que para interpretar un tratado se debe analizar no solo el texto, sino también el preámbulo y anexos que lo componen. En este caso concreto, cabe hacer mención al preámbulo del Estatuto, el cual hace expresa referencia al Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo²⁷⁹, reconociéndolo como la inspiración para crearlo²⁸⁰. Dicha inspiración se evidencia en la paridad en que ambos instrumentos destacan la importancia de la prevención de contaminación²⁸¹, establecen el régimen del practica²⁸², reglan la investigación científica a realizarse²⁸³, pero sobretodo ambos crean una Comisión Administradora con competencias prácticamente idénticas²⁸⁴, entre ellas, la de receptar la notificación de la Parte que proyecte construir una obra susceptible de afectar el régimen del Río, es así como lo establece el Tratado del Río de la Plata:

²⁷⁷ “Reconocen, en especial, en el Estatuto del Río Uruguay, el alto significado que encierra para los dos países, dada su calidad de co-ribereños en su tramo inferior, el hecho de que allí se establezcan las normas aplicables a las jurisdicciones, a la navegación, a los usos y aprovechamientos del régimen fluvial, a la conservación de la calidad de sus aguas [...] y comprueban con honda satisfacción [...] el Estatuto, ahora puesto en vigor [...]”. República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración Conjunta de los presidentes de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay, Guleguaychú, 18 de septiembre de 1976, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=3948&tipo=1, página 3, Acceso: 10 de marzo de 2011, 16:40.

²⁷⁸ Id.

²⁷⁹ República Argentina y República Oriental del Uruguay, Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, 19 de noviembre de 1973, Montevideo, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=8278&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 16:57.

²⁸⁰ “El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, animados del espíritu fraterno que inspira el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscrito en Montevideo el 19 de noviembre de 1973, ha convenido lo siguiente [...]”. Estatuto del Río Uruguay, op.cit., preámbulo.

²⁸¹ Ver: En Tratado del Río de la Plata: artículos 47 al 52 y 78; En Estatuto del Río Uruguay: artículos 40 al 43.

²⁸² Ver: En Tratado del Río de la Plata: artículos 23 al 26; En Estatuto del Río Uruguay: artículos 14 al 18.

²⁸³ Ver: En Tratado del Río de la Plata: artículo 79; En Estatuto del Río Uruguay: artículos 44 y 45.

²⁸⁴ Ver: En Tratado del Río de la Plata: artículos 59 al 67; En Estatuto del Río Uruguay: artículos 49 al 57.

*La Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible al interés de la navegación de la otra Parte o al régimen del Río.*²⁸⁵

De forma paralela, el Estatuto del Río Uruguay menciona lo siguiente:

*La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte.*²⁸⁶

Otra competencia idéntica que mantienen ambas comisiones, consiste en presidir todo procedimiento conciliatorio durante ciento veinte días, acerca de toda controversia sometida por las partes, el cual una vez vencido dará paso a las negociaciones directas entre ambos Estados²⁸⁷; y si finalmente no se llega a un acuerdo, las partes tienen la libertad de presentar ante la Corte Internacional de Justicia toda controversia acerca de la interpretación y aplicación del tratado, en ambos casos²⁸⁸. A partir de todas estas concordancias y similitudes, es posible demostrar la fuerte influencia que marcó el Tratado del Río de la Plata para la creación del Estatuto del Río Uruguay.

Una vez establecidos los factores anteriores a la creación del Estatuto y continuando con la aplicación de las disposiciones prescritas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados²⁸⁹, es preciso describir el contexto posterior, es decir el comportamiento, actuaciones y práctica ulterior de las partes luego de la creación del Estatuto; a partir de lo cual, podemos evidenciar múltiples acuerdos bilaterales que hacen referencia expresa e incluso fueron creados en razón al Estatuto del Río Uruguay. Estos tratados establecen la

²⁸⁵ Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, op.cit., artículo 17.

²⁸⁶ Estatuto del Río Uruguay, op.cit., artículo 7.

²⁸⁷ Ver: En Tratado del Río de la Plata: artículos 68 y 69; En Estatuto del Río Uruguay: artículos 58 y 59.

²⁸⁸ Ver: En Tratado del Río de la Plata: artículo 87; En Estatuto del Río Uruguay: artículo 60.

²⁸⁹ Ver: *Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos; (a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo a la celebración del tratado.* Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, op.cit., artículo 31 (2).

constitución de la comisión administradora del Río²⁹⁰ y su correspondiente Digesto²⁹¹, la necesidad de alcanzar la cooperación bilateral científica y tecnológica²⁹² tal como lo establece el capítulo décimo primero del Estatuto, a fin de reforzar el objetivo de preservar las aguas del Río utilizándolas de forma racional²⁹³, y, finalmente resaltando la importancia trascendental de la aplicación del Estatuto, a tal punto que fue necesaria la compatibilización de este Tratado con normas preexistentes²⁹⁴.

²⁹⁰ República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo argentino-uruguayo por el que se establece el Estatuto de la Comisión Administradora del Río Uruguay, 18 de septiembre de 1976, Gualeguaychú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1736&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 12:36. // República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración argentino-uruguayo por el que se constituye la Comisión Administradora del Río Uruguay, 22 de noviembre de 1978, Paysandú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1760&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:00. // República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración argentino-uruguayo de Paysandú, 22 de noviembre de 1978, Paysandú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1721&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 12:56.

²⁹¹ Ver: República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas aprobando capítulos, generalidades, obras y recursos del lecho y subsuelo del Digesto sobre el uso y aprovechamiento del Río Uruguay, 7 de abril de 1986, Paysandú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1879&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:02. // República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y República Oriental de Uruguay aprobando las normas sobre contaminación del Digesto sobre uso y aprovechamiento del Río Uruguay, 27 de noviembre de 1990, Montevideo, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1768&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:05 // República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y República Oriental de Uruguay relativo a la aprobación del Digesto sobre uso y aprovechamiento del Río Uruguay, Buenos Aires, 29 de noviembre de 1995, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1858&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:11.

²⁹² Ver: República Argentina y República Oriental del Uruguay, Convenio de cooperación científica y tecnológica entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Oriental de Uruguay, 30 de junio de 1977, Montevideo, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1727&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:14.

²⁹³ Ver: República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo argentino-uruguayo por el que se aprueba el acuerdo sobre normas aplicables al control de la calidad de las aguas del río Uruguay en la zona de influencia de Salto Grande, 5 de noviembre de 1977, Buenos Aires, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1728&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:20. // República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración conjunta de los Presidentes de la República Argentina y de la República Oriental de Uruguay, 5 de noviembre de 1977, Buenos Aires, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1722&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:24.

²⁹⁴ Ver: República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas argentino-uruguayas creando al comisión binacional para conciliar disposiciones del Estatuto del Río Uruguay y del Acuerdo de Transporte Vial (Hidrovía), 6 de diciembre de 1995, Punta del Este, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1821&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:27. // : República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas sobre compatibilización del acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paysandú y del Estatuto

El análisis del contexto previo y posterior a la creación del Estatuto del Río Uruguay, demuestran una clara tendencia bilateral de solución de materias mediante tratados, a través de los cuales se reitera la amistosa y fraterna relación entre Argentina y Uruguay, además de su preocupación por la preservación del medioambiente asociado con la cooperación mutua que se plasma en la necesidad de crear organismos administradores conjuntos para que controlen y autoricen toda actividad u obra a realizarse en puntos compartidos del río entre ambos países. La práctica política y diplomática de los Estados vecinos, evidencian la gran importancia concedida a cada una de las disposiciones contenidas en el Estatuto, razón por la cual en base a ellas se fueron creando y cumpliendo hasta la actualidad, posteriores acuerdos e incluso reformas a la normativa ya existente, a fin de armonizar el sistema legal de ambas jurisdicciones, todo con el objetivo principal de cumplir con lo dispuesto en el Estatuto del Río Uruguay.

3.3.1.3 Análisis de principios de Derecho internacional aplicables al caso y conflictos para su cumplimiento

Luego de analizar el contexto, acuerdos y práctica ulterior de las partes, resulta necesario determinar “*toda forma de derecho internacional aplicable a las relaciones de las partes*”²⁹⁵ posible a establecer a partir de varios artículos del Estatuto que versan sobre protección medioambiental en incluso constituyen cláusulas de reenvío, como son las siguientes:

*Las partes acuerdan el presente Estatuto [...] con el fin de establecer mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes pata cualquiera de las Partes.*²⁹⁶ (El subrayado me pertenece)

*Las partes se obligan a adoptar las medidas necesarias a fin de que el manejo del suelo y de los bosques, la utilización de las aguas subterráneas y la de los afluentes del río, no causen una alteración que perjudique sensiblemente el régimen del mismo o la calidad de sus aguas.*²⁹⁷ (El subrayado me pertenece)

del Río Uruguay, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1788&tipo=1, 11 de febrero de 1997, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:30.

²⁹⁵ Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, op.cit., artículo 31 (3) (c).

²⁹⁶ Estatuto del Río Uruguay, artículo 1.

²⁹⁷ Ibíd., artículo 35.

*Las partes coordinarán, por intermedio de la Comisión, las medidas adecuadas a fin de evitar la alteración del equilibrio ecológico y controlar plagas y otros factores nocivos en el río y sus áreas de influencia.*²⁹⁸

*Las partes acordarán las normas que regularán las actividades de pesca en el río en relación con la conservación y preservación de los recursos vivos.*²⁹⁹

Adicional a estos enunciados de protección ambiental, el Estatuto contiene un capítulo destinado a la Contaminación donde establece lo siguiente:

Sin perjuicio de las funciones asignadas a la Comisión en la materia, las partes se obligan a:

a) Proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad con los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales;

b) No disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos:

1. Las exigencias técnicas en vigor para prevenir la contaminación de las aguas, y

2. La severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción.

*c) Informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar con relación a la contaminación de las aguas, con vistas a establecer normas equivalentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos*³⁰⁰. (El subrayado me pertenece)

Por otro lado, establece como funciones de la Comisión Administradora, la prevención de todo tipo de contaminación, la necesidad de conservar y preservar los recursos vivos, acorde con la obligación del establecimiento de volúmenes máximos de pesca³⁰¹.

A partir de la enunciación de estas cláusulas y en concordancia con la Opinión Individual del Juez Cançado Trindade acerca del fallo de la Corte, es posible determinar la relación indiscutible que mantiene el Estatuto con los principios generales de derecho

²⁹⁸ *Ibíd.*, artículo 36.

²⁹⁹ *Ibíd.*, artículo 37.

³⁰⁰ *Ibíd.*, artículo 41.

³⁰¹ Cfr. Estatuto del Río Uruguay, op.cit., artículo 56.

ambiental internacional, contenidos en múltiples tratados internacionales vigentes aplicables al caso particular.

Primeramente cabe mencionar el deber general de todos los Estados para proteger el medio ambiente, el mismo que conlleva “*el deber de intercambiar información relevante para la protección del medio ambiente*”³⁰². A partir de lo cual se desprende la necesidad del uso equitativo de los recursos, la diligencia debida y en definitiva la buena fe de cumplir las disposiciones de protección ambiental. Así, el primer principio rector en materia ambiental constituye la prevención, previsto en razón a la evidente posibilidad de que el daño que la obra cause sea irreversible; en concordancia con el reconocimiento de que incluso la más mínima actividad industrial contamina, la prevención va de la mano con el principio precautorio, cuya enunciación es la siguiente:

*Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.*³⁰³ (El subrayado me pertenece)

Este principio resulta aplicable al caso, ya que como lo analizamos anteriormente, la Corte en su fallo demostró aún ciertas dudas acerca de la certeza de las pruebas aportadas por Uruguay, debido a la constante impugnación contra determinados estudios y evaluaciones realizadas en torno a la construcción de la planta celulósica Orion, actuación que resulta contraria a este principio universal, razón por la cual la Corte no debía emitir su fallo hasta esclarecer dichas dudas tras la realización de un peritaje independiente designado por ésta.

A partir de los principios preventivo y precautorio, nace el principio de la prevención de daño ambiental transfronterizo, el cual dispone la responsabilidad de cada de Estado de evitar que sus actividades internas causen un perjuicio al medio ambiente de otros Estados y

³⁰² José Juste Ruiz, El Derecho Internacional del Medio Ambiente, Madrid, McGraw Hill, Segunda edición, 1999, p.71.

³⁰³ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 3 al 14 de junio de 1992, Río de Janeiro, Internet. http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml, Acceso: 11 de marzo del 2011, 17:04, principio 15.

demás zonas fuera de su jurisdicción³⁰⁴. La forma de evitar este perjuicio, se plasma en la obligación de informar, notificar consultar y cooperar con el país vecino, principio ya establecido y aplicado hace más de tres décadas atrás:

*Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y el mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados*³⁰⁵.

A continuación evidenciamos la reiteración de la relevancia y su necesidad de cumplimiento:

*Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.*³⁰⁶

Es así como la Corte Internacional de Justicia ha fallado en concordancia con este principio:

El hombre no ha dejado de intervenir en la naturaleza por razones económicas y otras. En el pasado, lo ha hecho sin tener le cuenta los efectos sobre el ambiente. Gracias a las nuevas perspectivas que ofrece la ciencia y la conciencia creciente sobre los riesgos que implican estas intervenciones a un ritmo desconsiderado y mantenido, representarían para la humanidad – implicando generaciones actuales y futuras-, nuevas normas y exigencias que [...] fueron enunciadas en un alto número de instrumentos durante las últimas dos décadas. Estas nuevas normas deben ser consideradas y estas nuevas exigencias convenientemente apreciadas no solamente cuando los Estados contemplan nuevas actividades, sino también cuando persiguen actividades emprendidas en el pasado. El concepto de desarrollo

³⁰⁴ Cfr. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, principio 2.

³⁰⁵ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, 16 de junio de 1972, Estocolmo, Internet. <http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php>, Acceso: 12 de marzo del 2011, 13:50, principio 24.

³⁰⁶ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, op.cit. principio 19.

*sustentable traduce bien esta necesidad de conciliar el desarrollo económico con la protección del ambiente.*³⁰⁷

Otro principio vinculado con la cooperación es el de la participación ciudadana y acceso a la información a la que tienen derecho todos los ciudadanos interesados, a fin de que puedan conocer la información que dispongan las autoridades públicas acerca de los materiales y actividades que pueden afectar a las comunidades, además de concederles la oportunidad de participar en todos los procesos de toma de decisiones³⁰⁸.

En último lugar, el principio que recoge a todos los anteriores constituye el desarrollo sustentable, el cual propone una dimensión más allá de la interestatal, a fin de proteger la salud humana y bienestar de todas las personas, a partir del cual no cabe el *laissez faire*, *laissez passer*, ya que es necesaria la cooperación y participación de todos los Estados para que el desarrollo no se considere de forma aislada, al contrario, toda actividad tecnológica y financiera deben ir de la mano con la protección ambiental³⁰⁹.

Descritos así los principios de derecho ambiental internacional, es posible determinar que el procedimiento de consulta establecido en el Estatuto del Río Uruguay, no constituye un simple conjunto de reglas procedimentales, al contrario, constituye el mecanismo idóneo y único que permite poner en práctica los principios de prevención de contaminación,

³⁰⁷ “*L’homme n’a cessé d’intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres. Dans le passé, il l’a souvent fait sans tenir compte des effets sur l’environnement. Grâce aux nouvelles perspectives qu’offre la science et à une conscience croissante des risques que la poursuite de ces interventions a un rythme inconsidéré et soutenu représenterait pour l’humanité - qu’il s’agisse des générations actuelles ou futures-, de nouvelles normes et exigences [...] ont été énoncées dans un grand nombre d’instruments au cours des deux dernières décennies. Ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées non seulement lorsque des Etats envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu’ils poursuivent des activités qu’ils ont engagées dans le passé. Le concept de développement durable traduit bien cette nécessité de concilier développement économique et protection de l’environnement.*” (Texto original) Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al Proyecto Gággikovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia) Fallo del 25 de septiembre de 1997, Corte Internacional de Justicia, 25 de septiembre de 1997, Internet. <http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7374.pdf>, Acceso: 12 de marzo del 2011, § 140.

³⁰⁸ NB: “*El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.*” Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, op.cit., principio 10.

³⁰⁹ Cfr. *Ibíd.*, principios 4 y 7.

cooperación y consulta previa, todos orientados a evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente, tal como lo disponen los distintos tratados internacionales, es así como en temas de protección ambiental, no cabe distinción entre normas procedimentales y de fondo del Estatuto, ni entre normas de conducta y de resultado como lo alegó erróneamente Uruguay al igual que la Corte en su fallo³¹⁰.

Es preciso mencionar que la problemática principal que rodea a la aplicación del derecho internacional del medio ambiente, constituye el insuficiente grado de cumplimiento eficaz de las normas, debido a *“cierto rechazo por parte de los Estados respecto del establecimiento de procedimientos de fiscalización y control que puedan poner límites a su capacidad de acción autónoma o cortapisar su libertad de acción soberana”*³¹¹.

Actitud que claramente evidenció Uruguay a lo largo de sus actuaciones, al alegar que la concesión de las AAP fueron concedidas en apego a sus disposiciones legales internas, rechazando cualquier otro requerimiento internacional. Además de considerar que:

Los factores económicos condicionan poderosamente la aplicación efectiva de las normas ambientales por parte de los Estados. En los países desarrollados, las instancias gubernamentales y administrativas son proclives a eludir las exigencias de las normas ambientales que pueden tener una repercusión relevante en la economía o afectar a sectores industriales estratégicos o sensibles. En los países en desarrollo, el cumplimiento de las normas ambientales adoptadas en el marco internacional se hace todavía más difícil, dado que las implicaciones económicas de las mismas vienen a agravar una situación que es ya de por sí, por un lado, una cierta contención en la configuración de las exigencias de las normas ambientales internacionales y, por otro, la puesta a disposición de los países necesitados de la asistencia técnica y financiera imprescindible para poder asegurar su cumplimiento efectivo. (El subrayado me pertenece)³¹²

Dicha negativa de aplicación de este principio, es contrarrestada con la obligación de *“no invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”*³¹³. Es así como Uruguay, se encontraba en obligación de cumplir con estos preceptos, sin excusa alguna.

³¹⁰ Cfr. Juez Antonio Augusto Cançado Trindade, op.cit., § 174.

³¹¹ José Juste Ruiz, op.cit., p.92.

³¹² Id.

³¹³ Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, op.cit., artículo 27.

En concordancia con lo antes mencionado, es preciso resaltar la insistencia sobre la importancia que Uruguay otorga a la construcción de las plantas de producción de celulosa, afirmando que constituyen las mayores obras de inversión realizadas en su país, por lo que la suspensión de su construcción acarrearía graves daños a sus promotores y un perjuicio a su economía nacional³¹⁴. Este comportamiento evidencia la alta connotación económica y financiera que abarcan las plantas en Uruguay, a partir del cual es posible cuestionar su disposición a aceptar las limitaciones a esta obra justamente por disconformidades en cuanto a la regulación ambiental.

Finalmente, es necesario reconocer la importancia de la protección ambiental, recogida en varios tratados internacionales y tratada en múltiples sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; todo lo cual evidencia la alta relevancia de su necesidad de cumplimiento, considerando que dicha necesidad no nace a partir de los distintos instrumentos legales creados, sino que estos constituyen su reconocimiento para proceder a su debida protección y garantía a través de un orden jurídico, debido a su previa existencia y aseguramiento de cumplimiento anteriores. Es así, como analógicamente podemos compatibilizar la protección del derecho ambiental con la protección de los derechos humanos, considerando que ambos derechos se relacionan íntimamente a fin de alcanzar el desarrollo sustentable ya múltiples veces proclamado.

Por esta razón, es imperiosa la necesidad de interpretar todo instrumento que contenga disposiciones de protección ambiental, de acuerdo a las reglas análogas de interpretación de las convenciones sobre derechos humanos³¹⁵; por lo que *“no cabe plantear la cuestión de si la Convención debe interpretarse con un criterio restrictivo respecto de los*

³¹⁴ Supra. Capítulo II de esta obra.

³¹⁵ Ver: *“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y; d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”* (Texto original). Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, San José, Internet. <http://www.cidh.org/basicos/basicos2.htm>, artículo 29, Acceso: 12 de marzo del 2011, 13:40,.

*derechos garantizados y protegidos, o si, por el contrario, cabe una interpretación expansiva, siempre favorable a éstos”.*³¹⁶

Es preciso tener en cuenta el carácter progresivo que ha alcanzado la protección del ambiente, al igual como ha ocurrido respecto de la protección de los derechos humanos; por lo que cabe recalcar, que incluso en su época de creación, el Estatuto ya revestía este carácter³¹⁷, el cual la Corte no llegó a analizar ni reconocer, justamente por desacreditar la valoración a ciertas cláusulas del mismo, resultando contradictorio con la necesaria aplicación análoga del siguiente criterio *“la Convención debe interpretarse de manera de darle un pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Convención y de la Corte adquiera todo su efecto útil”.*³¹⁸

En concordancia con esta disposición, cabe reiterar la necesidad de conceder el efecto útil a cada una de las cláusulas que componen el Estatuto, por lo que no es posible restar importancia a aquellas de contenido procedimental, justamente porque permiten consolidar la ejecución del objetivo del mismo además de la concreción de los principios ambientales que el texto envuelve.

3.3.1.4 Aplicación de medios complementarios de interpretación

Siguiendo las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cabe recurrir a medios complementarios a fin de confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo treintauno en caso de que exista alguna ambigüedad u oscuridad³¹⁹. En tal razón, cabe mencionar que los trabajos preparatorios coinciden con el contexto previo a la creación del Estatuto, es decir, los tratados bilaterales ya antes mencionados, aunque cabe aclarar que las intenciones de ambos países para crear este instrumento, se vieron plasmadas ya en la Declaración de San Juan³²⁰, donde se prevé el

³¹⁶ Héctor Gros Espiell, Los métodos de interpretación utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia contenciosa, San José, La Corte Interamericana y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, 1994, p.226.

³¹⁷ Jueces Aw Shawkat Al-Khasawneh y Bruno Simma, op.cit., § 1.

³¹⁸ Héctor Gros Espiell, op.cit., p.236.

³¹⁹ Cfr. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 32.

³²⁰ República Argentina y República Oriental de Uruguay, Declaración de San Juan. Declaración Conjunta de los señores Presidentes de la República Argentina y República Oriental de Uruguay, 18 de febrero de 1971, Colonia, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1702&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 19:28.

inicio de las negociaciones para la creación del Estatuto, conforme a lo dispuesto en el Tratado de Límites del Río Uruguay.

Luego, respecto de las circunstancias de la celebración del Tratado, en el recuento de todos los Tratados bilaterales suscritos, podemos evidenciar el alto espíritu de fraternidad y cooperación inicial de las partes para crear este mecanismo conjunto dirigido por una comisión mixta, tal como se venía regulando ya con anterioridad. La práctica regional y bilateral, demuestra que las acciones conjuntas tendían a regular toda materia de forma conjunta, es así como las circunstancias que rodearon la creación del Estatuto fueron favorables para su creación y posterior aplicación por ambas partes.

Finalmente, como último medio complementario aplicable al caso, podemos referirnos al efecto útil de las cláusulas contenidas en el Estatuto; es así como resulta posible concluir que cada una de ellas fue creada a fin de solucionar un tema específico. En particular, el procedimiento de consulta establecido entre los artículos siete y doce, cumple la finalidad de materializar el objetivo intangible y etéreo de crear este mecanismo conjunto bilateral para el uso equitativo y racional del Río Uruguay. La falta de cumplimiento de este procedimiento de consulta provocaría que el Tratado pierda su validez y fuerza de ejecución, ya que cada parte realizaría sus obras independientemente, sin considerar posibles afectaciones a la otra parte, además de la violación a principios de derecho internacional general y medioambiental; en tal razón, cada cláusula que conforma el Estatuto en general, tiene su finalidad crucial para que el texto sea coherente y aplicable a las partes.

Tras la realización de la interpretación del Estatuto conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, es posible concluir que este instrumento fue creado luego de ya evidenciarse una práctica bilateral constante entre Argentina y Uruguay, a través de la cual resolvieron varios asuntos relacionados al uso de sus recursos hídricos compartidos. A partir de estos tratados fue posible concluir la importancia otorgada a las comisiones administradoras cuya personalidad jurídica independiente se refleja en las distintas competencias otorgadas, más aún, fue posible clarificar su intención de realizar la consulta y notificación previa a la realización de alguna obra a fin de prevenir toda contaminación. Finalmente, los posteriores tratados demostraron la relevancia de la aplicación del Estatuto, ya que algunos incluso fueron creados o modificados a fin de armonizarlos con sus disposiciones.

En fin, el Estatuto del Río Uruguay constituye un instrumento regulador de un recurso hídrico compartido, compuesto por múltiples cláusulas que tratan distintas materias procedimentales o substanciales, donde ambas categorías mantienen la misma jerarquía al envolver la obligatoria aplicación de varios principios de derecho internacional ambiental principalmente; en tal razón, no es posible realizar la distinción y menos aún el descrédito de varias de sus cláusulas, ya que atentaría a la finalidad propuesta inicial de dicho instrumento.

3.4 Determinación de violación del Estatuto del Río Uruguay por parte de Uruguay y efectos del fallo

Luego de realizar la interpretación del Estatuto considerando el fallo de la Corte Internacional de Justicia, podemos claramente resaltar el incumplimiento de Uruguay respecto de las obligaciones procedimentales contenidas en dicha tratado; tal como se trató previamente, la Corte realizó una distinción entre cláusulas de fondo y de procedimiento y alegó que Uruguay únicamente había incumplido las últimas, por lo tanto consideró que el simple reconocimiento a favor de Argentina constituiría una reparación suficiente³²¹, pese a que la Corte reconoció que el informar y notificar, constituye una etapa del mecanismo procedimental del mismo Estatuto³²², más aun cuando ambos países reconocen que la planta celulósica constituye una obra suficientemente importante para proceder según lo establecido en el Estatuto.

En particular, el procedimiento de consulta establecido en el Estatuto constituye una pieza vital para la aplicación del mismo, ya que cumple el objetivo de prevenir toda acción unilateral que no guarde conformidad con las demás disposiciones sustanciales del Estatuto. La relevancia de este procedimiento incluso es varias veces reiterado en distintas cláusulas del Tratado, como lo podemos observar a continuación:

*Las normas establecidas en los artículos 7 a 12 se aplicarán a todas las obras a que se refiere el artículo 7, sean nacionales o binacionales, que cualquiera de las partes proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el río Uruguay fuera del tramo definido como río y en las respectivas áreas de influencia de ambos tramos.*³²³

³²¹ Asunto relativo a las plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay) Fallo del 20 de abril del 2010, op.cit., § 269.

³²² Ibíd., § 94.

³²³ Estatuto del Río Uruguay, op.cit., artículo 13.

*El derecho de cada parte de aprovechar las aguas del río, dentro de su jurisdicción para fines domésticos, sanitarios, industriales y agrícolas, se ejercerá sin perjuicio de la aplicación del procedimiento previsto en los artículos 7 a 12 cuando el aprovechamiento sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.*³²⁴

*Serán aplicables, en lo pertinente, las normas establecidas en los artículos 7 a 12 cuando la exploración y explotación de los recursos del lecho y del subsuelo tengan entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.*³²⁵

Mediante el establecimiento de este procedimiento de consulta, sí es posible establecer una obligación de no construcción, ya que en caso de que fallen las negociaciones, simplemente el proyecto de construcción no procede hasta alcanzar una solución. No resulta lógico que la Corte haya reconocido que la construcción de la Planta Orión sí empezó antes de la finalización de las negociaciones bilaterales³²⁶ resaltando la necesidad de la cooperación mutua para cumplir con los objetivos del Estatuto³²⁷, para luego desacreditar este procedimiento de consulta elemental para su cumplimiento.

La Corte no realizó una correcta interpretación del Estatuto, al realizar un análisis separado de su composición, contrario a las reglas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, donde expresamente determina la necesidad de tomar al texto en su conjunto, incluso mediante el estudio a su preámbulo, anexos y contexto³²⁸.

En concordancia con lo indicado, la Corte debía adoptar una posición más preventiva antes que lógico-compensatoria³²⁹, al tratarse de un tema de prevención de contaminación ambiental. Al contrario, demostró una extrema elasticidad y generalidad respecto de los principios sustantivos involucrados en el caso, como son el uso racional y equitativo, el deber de no causar daño, el desarrollo sustentable, etc.³³⁰, pese a considerar que la contaminación ambiental puede tener un carácter irreversible.

El Estatuto del Río Uruguay constituye la máxima evidencia de institucionalización de una cooperación permanente y estricta, cuyo elemento central constituye CARU, con

³²⁴ *Ibíd.*, artículo 27.

³²⁵ *Ibíd.*, artículo 34.

³²⁶ Asunto relativo a las plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay) Fallo del 20 de abril del 2010, op.cit., § 275.

³²⁷ *Ibíd.*, § 281.

³²⁸ Cfr. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, op.cit., artículo 31.

³²⁹ Jueces Aw Shawkat Al-Khasawneh y Bruno Simma, op.cit., § 22.

³³⁰ *Ibíd.*, § 26.

suficiente personalidad jurídica dotada de competencias y atribuciones; en tal razón el resguardo para su cumplimiento es indispensable a fin de que mantenga su fuerza de aplicación y necesidad de ejecución entre las partes, caso contrario perdería su razón de ser.

En así como es posible establecer que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, infringiendo el principio del *pacta sunt servanda* previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados³³¹ y constituyendo la violación de una obligación internacional, al recordar que “*todo comportamiento del Estado que no se adecue a lo prescrito por una obligación internacional, acarrea su responsabilidad*”³³². Es preciso señalar que a pesar de que la violación haya sido respecto de una obligación procedimental, esto no desacredita su valoración, importancia e interdependencia con las de fondo, por lo tanto el simple reconocimiento de dicha violación no constituye reparación suficiente y satisfactoria a favor de Argentina. La responsabilidad de Uruguay generó la necesidad de que este país siga cumpliendo con las disposiciones del Estatuto en casos futuros, además de poner fin a la violación alegada, reparar íntegramente el perjuicio, pero sobretodo, ofrecer las garantías y seguridades necesarias de no repetición³³³, puntos determinantes que la Corte no consideró al momento de rechazar las medidas cautelares solicitadas por Argentina y en su fallo acerca del fondo del asunto.

Tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia, se evidencia una incertidumbre acerca de la seguridad jurídica a favor de Argentina, ya que en futuros proyectos similares, Uruguay puede volver a obviar el procedimiento de consulta establecido en el Estatuto, justificándose en que éste solo constituye una formalidad vana y superficial, causando un perjuicio a Argentina respecto de una violación sustancial grave al Tratado sin que exista mayor connotación ni posibilidad de una reparación debida; en un entorno más global, se ven en alto grado de riesgo de afectación los derechos de protección al medio ambiente, en vista a la ligera apreciación y estudio de los mismos en este caso particular y posiblemente en futuros, si la Corte continua fallando en base al procedimiento tradicional en lugar de hacerlo en base a la interpretación progresista y extensiva que otorgue la importancia respectiva a la obligación de los Estados para cumplir los tratados internacionales que hayan suscrito, más aun si éste tiene connotaciones significativas de protección ambiental.

³³¹ Artículo 26.

³³² Arturo Santiago Pagliari, Curso de Derecho Internacional Público, Córdoba, Advocatus, 2007, p.475.

³³³ *Ibíd.*, p.484.

Conclusiones

Luego de analizar cada uno de los aspectos que envuelven la controversia generada entre los países vecinos de Argentina y Uruguay respecto del incumplimiento a las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay, pese a haber sido resuelto por la Corte Internacional de Justicia, generó numerosas críticas y desacuerdos en contra de su fallo, respecto de la interpretación y aplicación de un tratado internacional como éste, cuyas implicaciones envuelven ciertos principios de derecho internacional general, al igual que ámbitos más específicos, como es el medioambiental. Luego de tratar cada uno de estos elementos, fue posible alcanzar las siguientes conclusiones:

- La interpretación de un tratado internacional es una herramienta necesaria cuando existen divergencias respecto de la aplicación del mismo. Es decir que resulta primordial interpretar el texto legal previo a aplicarlo, ya que las partes pueden diferir en cuanto a su entendimiento y significación, lo que puede fácilmente generar controversias respecto de su aplicación y así incurrir en evidentes violaciones a su contenido.
- Un principio que genera la necesidad de interpretar un tratado constituye el *pacta sunt servanda*, el cual obliga a los Estados a cumplir de buena fe cada una de las disposiciones contenidas en el documento, justamente debido a su compromiso voluntario de ejecutarlo. El hecho de discrepar respecto del sentido de alguna de las cláusulas del tratado, no es motivo suficiente para justificar su incumplimiento; en tal razón, las partes deben recurrir a la útil herramienta de la interpretación a fin de esclarecer el sentido y significación de dicha cláusula para proceder a su inmediata aplicación. Es así como este principio insiste en la necesaria aplicación de todas y cada una de las cláusulas y disposiciones que contenga un tratado internacional, motivo por el cual no es posible justificar su violación basándose en la errónea distinción entre cláusulas procedimentales y de fondo, ya que cada una de ellas complementa al resto otorgándoles un sentido y valoración particular, las mismas que integran el texto final a ser obligatoriamente aplicado.

- El principio *pacta sunt servanda* concede mayores repercusiones respecto de la materia medioambiental, a través de la cual, varios principios de prevención de contaminación envuelven una necesidad cumplir irrevocablemente con los tratados que los contienen. Es decir que si un tratado envuelve aspectos de materia ambiental, no cabe desatenderlos al momento de resolver si existió o no violación al mismo, y además se deben considerar todas las medidas precautorias disponibles y necesarias que eviten generar mayor contaminación al medioambiente.
- El Estatuto del Río Uruguay es un tratado suscrito de buena fe y de manera voluntaria por ambos países vecinos, Argentina y Uruguay. El mismo que evidencia una clara costumbre bilateral de reglar mediante tratados, los usos de recursos hídricos compartidos, límites marítimos y ribereños, al igual que compromisos de cooperación mutua respecto de la investigación y promoción de desarrollo bilateral. Todo pese a lo cual, se vieron envueltos en una controversia respecto de la interpretación y aplicación de este tratado particular, lo cual llevó al sometimiento del caso a decisión de la Corte Internacional de Justicia.
- El fallo de la Corte Internacional de Justicia no realiza una debida interpretación del Estatuto, al contrario solo se enfoca en desmentir o confirmar las alegaciones de las partes de una manera tradicional, sin considerar las implicaciones en materia medioambiental al igual que en materia de aplicación obligatoria de los tratados. Fue así como existieron numerosas opiniones disidentes e individuales de los jueces que la integran, al afirmar que el estudio de las pruebas aportadas fue insuficiente, por la falta de la recurrencia a un peritaje independiente, lo que provocó que la Corte emita su fallo sin una total certeza en la mayoría de sus afirmaciones.
- Conjuntamente con el desarrollo del caso principal, la Corte desestimó la necesidad aplicar la medida provisional solicitada por Argentina, consistente en suspender los trabajos de construcción de la planta Orion hasta la emisión del fallo final. Lo cual evidenció la falta de diligencia debida por parte de la Corte al descartar toda necesidad de prevención de contaminación que salvaguarde los derechos de los habitantes ribereños, mientras el caso se resuelva.

- La Corte desvalorizó el carácter y finalidad de las cláusulas procedimentales del Estatuto, considerándolas como un simple medio para la consecución de las cláusulas de fondo. Esta indebida distinción desembocó en el simple reconocimiento del incumplimiento de Uruguay respecto de ellas, sin dar lugar a reparación alguna a favor de Argentina.
- Es necesario determinar que no se trata de un fallo aislado emitido por la Corte, sino que constituye un precedente jurisprudencial, por el cual los Estados pueden justificarse y escudarse a fin de incumplir cláusulas procedimentales sin repercusiones graves que pongan en juego la valoración de una gama amplia de principios desde el *pacta sunt servanda* hasta el principio precautorio en materia ambiental.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ÁLVAREZ LODOÑO Luis Fernando S.J., Derecho Internacional Público. Santafé de Bogotá, Centro Editorial Javeriano, 1998.

ARELLANO GARCÍA Carlos, Primer Curso de Derecho Internacional Público, México, Editorial Porrúa, quinta edición, 2002.

BARBOZA Julio, Derecho Internacional Público. Argentina, Editor Zavallia S.A., 2001.

BERHARDT Rudolf, Encyclopedia of Public International Law. Volumen II. Holanda, Editorial Elsevier Science B.V., 1995.

BROTÓNS Antonio Remiro, Derecho Internacional. Madrid, Editorial McGraw.Hill, 1997.

GONZÁLEZ CAMPOS Julio D. et al., Curso de derecho internacional Público. Madrid, Editorial Civitas, 1998.

GROS ESPIELL Héctor, Los métodos de interpretación utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia contenciosa, San José, La Corte Interamericana y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, 1994.

HARRIS FERNÁNDEZ Jaime y CAMPUSANO PUELMA Enrique, El juez nacional y la interpretación de los tratados internacionales, En: Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Interpretación, integración y razonamiento jurídicos. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992.

JUSTE RUIZ José, El Derecho Internacional del Medio Ambiente, Madrid, McGraw Hill, Segunda edición, 1999.

MONROY CABRA Marco Gerardo, Derecho de los Tratados. Santafé de Bogotá, Editorial Leyer, segunda edición, 1995.

NOVAK TALAVERA Fabián y CORROCHANO MOYANO Luis García, Derecho Internacional Público, Tomo I, Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000.

PAGLIARGI Arturo Santiago, Curso de Derecho Internacional Público, Córdoba, Advocatus, 2007.

PALLARES BOSSA Jorge, Derecho Internacional Público. Santafé de Bogotá, Editorial Leyer, 1996.

QUINTANA Juan José, Derecho Internacional Público Contemporáneo. Medellín, Ediciones Jurídicas

REUTER Paul, Introducción al Derecho de los Tratados. México, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 2001.

SORENSEN Max, Manual de Derecho Internacional Público. México, Fondo de Cultura Económica, México, séptima edición, 2000.
Gustavo Ibañez, 2001.

VASCO Miguel Antonio, Diccionario de Derecho Internacional. Quito, Editorial del Ministerio de Educación, 1963.

NORMATIVA INTERNACIONAL

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 3 al 14 de junio de 1992, Río de Janeiro, http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml, Acceso: 11 de marzo del 2011, 17:04.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, 16 de junio de 1972, Estocolmo, <http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php>, Acceso: 12 de marzo del 2011, 13:50.

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, San José, <http://www.cidh.org/basicos/basicos2.htm>, Acceso: 12 de marzo del 2011, 13:40.

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Tratado de Asunción, otorgado el 26 de marzo de 1991 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Artículo 1, http://www.MERCOSUR.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf, Acceso: 27 de enero de 2011, 17:11.

Organización de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945, San Francisco, <http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm>, Acceso: 18 de noviembre del 2010, 16:33.

Organización de las Naciones Unidas, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Otorgado el 23 de mayo de 1969, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, Acceso: 18 de noviembre de 2010, 17:14.

Organización de las Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, adoptado el 16 de junio de 1945, <http://www.un.org/spanish/aboutun/icjstat.htm>, Acceso: 18 de noviembre del 2010, 16:29.

Corte Internacional de Justicia, Reglamento de la Corte, adoptado el 14 de abril de 1978, <http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php>, Acceso: 18 de febrero del 2011, 16:11.

TRATADOS BILATERALES

República Argentina y República del Brasil, Convención Complementaria de Límites, <http://www.mrecic.gov.ar/portal/sereee/ditra/br1.html>, Acceso: 09 de diciembre del 2010, 19:17.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo argentino-uruguayo por el que se establece el Estatuto de la Comisión Administradora del Río Uruguay, 18 de septiembre de 1976, Guleguaychú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1736&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 12:36.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo argentino-uruguayo por el que se aprueba el acuerdo sobre normas aplicables al control de la calidad de las aguas del río Uruguay en la zona de influencia de Salto Grande, 5 de noviembre de 1977, Buenos Aires, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1728&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:20.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas aprobando capítulos, generalidades, obras y recursos del lecho y subsuelo del Digesto sobre el uso y aprovechamiento del Río Uruguay, 7 de abril de 1986, Paysandú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1879&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:02.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas sobre compatibilización del acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paysandú y del Estatuto del Río Uruguay, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1788&tipo=1, 11 de febrero de 1997, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:30.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y República Oriental de Uruguay aprobando las normas sobre contaminación del Digesto sobre uso y aprovechamiento del Río Uruguay, 27 de noviembre de 1990, Montevideo, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1768&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:05

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y República Oriental de Uruguay relativo a la aprobación del Digesto sobre uso y aprovechamiento del Río Uruguay, Buenos Aires, 29 de noviembre de 1995, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1858&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:11.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Acuerdo por canje de notas argentino-uruguayas creando la comisión binacional para conciliar disposiciones del Estatuto del Río Uruguay y del Acuerdo de Transporte Vial (Hidrovía), 6 de diciembre de 1995, Punta del Este, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1821&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:27.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Convenio de cooperación científica y tecnológica entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Oriental de Uruguay, 30 de junio de 1977, Montevideo, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1727&tipo=1, Acceso. 11 de marzo de 2011, 13:14.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración argentino-uruguaya sobre el recurso agua, suscrito en Buenos Aires el 9 de julio de 1971,

http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=6630&tipo=1, Acceso: 10 de marzo de 2011, 11:34.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración argentino-uruguaya por el que se constituye la Comisión Administradora del Río Uruguay, 22 de noviembre de 1978, Paysandú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1760&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:00.

República Argentina y Republica Oriental del Uruguay, Declaración argentino-uruguaya de Paysandú, 22 de noviembre de 1978, Paysandú, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1721&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 12:56.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración conjunta de los Presidentes de la República Argentina y de la República Oriental de Uruguay, 5 de noviembre de 1977, Buenos Aires, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1722&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 13:24.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Declaración Conjunta de los presidentes de la República Argentina y de la Republica Oriental del Uruguay, Guleguaychú, 18 de septiembre de 1976, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=3948&tipo=1, página 3, Acceso: 10 de marzo de 2011, 16:40.

República Argentina y República Oriental de Uruguay, Declaración de San Juan. Declaración Conjunta de los señores Presidentes de la República Argentina y República Oriental de Uruguay, 18 de febrero de 1971, Colonia, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=1702&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 19:28.

República de Argentina y República Oriental de Uruguay, Estatuto del Río Uruguay. Otorgado el 26 de febrero de 1975 en Salto, Uruguay, Registro de Naciones Unidas No. 21425, http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/10/6/00018251.pdf, Acceso: 10 de noviembre de 2010, 14:30.

República Argentina y la República Oriental de Uruguay, Tratado de Límites del Río Uruguay, otorgado el 7 de abril de 1961 en Montevideo, Uruguay, Registro en Naciones Unidas No. 9074., http://untreaty.un.org/unts/1_60000/18/24/00035184.pdf, Acceso: 20 de noviembre del 2010, 13:21.

República Argentina y República Oriental del Uruguay, Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, 19 de noviembre de 1973, Montevideo, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?id=8278&tipo=1, Acceso: 11 de marzo de 2011, 16:57.

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-16/99 “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, solicitada por México, 1 de octubre de 1999, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf, Acceso: 22 de noviembre del 2010, 22:40.

Corte Internacional de Justicia, Caso relativo al Proyecto Gacikovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia) Fallo del 25 de septiembre de 1997, Corte Internacional de Justicia, 25 de septiembre de 1997, <http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7374.pdf>, Acceso: 12 de marzo del 2011.

Corte Internacional de Justicia, Fallo sobre el Asunto del Canal de Corfú: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Albania. 9 de abril de 1949, <http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf>, Acceso: 23 de noviembre del 2010, 18:57.

Corte Internacional de Justicia, Fallo sobre el caso de la Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine entre Canadá y Estado Unidos de América. 12 de octubre de 1984, <http://www.icj-cij.org/docket/files/67/6369.pdf>, Acceso 15 de noviembre del 2010, 12:32.

Corte Internacional de Justicia, Fallo sobre el Asunto de Lotus. 7 de septiembre de 1927, http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf, Acceso: 23 de noviembre del 2010, 13:26.

Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva acerca de la competencia de la Asamblea General para la admisión de un Estado en las Naciones Unidas. 3 de marzo de 1950, <http://www.icj-cij.org/docket/files/9/1883.pdf>, Acceso: 17 de noviembre del 2010, 19:50.

Corte Internacional de Justicia, Opinión Consulta sobre el Estatuto Internacional del África Sudoccidental. 11 de julio de 1950, <http://www.icj-cij.org/docket/files/10/1891.pdf>, Acceso: 22 de noviembre del 2010, 14:12.

Corte Internacional de Justicia, Providencia sobre medidas provisionales en el Asunto de ciertos procedimientos criminales en Francia, República del Congo contra Francia, 17 de junio de 1993, <http://www.icj-cij.org/docket/files/129/8203.pdf>, Acceso: 7 de abril del 2011, 22:54.

Corte Internacional de Justicia, Providencia sobre medidas provisionales en el Asunto del pasaje por el Gran Belt, Finlandia contra Dinamarca, Corte Internacional de Justicia, 29 de julio de 1991, <http://www.icj-cij.org/docket/files/86/6968.pdf>, Acceso: 7 de abril del 2011, 22:00.

Corte Internacional de Justicia, Providencia sobre Medidas Provisionales sobre el Asunto concerniente al personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán 15 de diciembre de 1979, <http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6283.pdf>, Acceso: 12 de abril del 2011.

Corte Internacional de Justicia, Publicaciones de la Corte Permanente de Justicia, <http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9>, Acceso: 18 de noviembre de 2010, 16:45.

Corte Permanente de Justicia Internacional, Fallo sobre el asunto del Estatuto Jurídico de Groenlandia Oriental, 5 de abril de 1933, http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf, Acceso: 19 de noviembre del 2010, 20:46.

Corte Permanente de Justicia Internacional, Opinión Consulta sobre la Interpretación de la Convención de 1919 relativa al trabajo nocturno de mujeres, 15 de noviembre de 1932, http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_50/01_Travail_de_nuit_Avis_consultatif.pdf, Acceso: 23 de noviembre del 2010. 12:40.

Corte Permanente Internacional de Justicia, Opinión Consultiva sobre los Servicios Postales Polacos en el Danzig, Serie B, No.11, 16 de mayo de 1925, http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_11/01_Service_postal_polonais_a_Danzig_Avis_consultatif.pdf, Acceso: 17 de noviembre de 2010, 18:40.

Organización de las Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General No. 174 (II), 21 de noviembre de 1947, [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRes%2F174+\(II\)&Submit=Search&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRes%2F174+(II)&Submit=Search&Lang=E), Acceso: 24 de noviembre, 22:14.

Tribunal Arbitral AD-HOC del MERCOSUR, Laudo del Tribunal Arbitral “AD-HOC” de MERCOSUR constituido para entender de la controversia presentada por la República Oriental de Uruguay a la República Argentina sobre “Omisión del Estado Argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a los puentes internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la República Argentina con la República Oriental del Uruguay”, 6 de septiembre del 2006, <http://www.MERCOSUR.org.uy/innovaportal/file/Laudo%20de%20Cortes%20de%20Ruta%20-20ES.pdf?contentid=375&version=1&filename=Laudo%20de%20Cortes%20de%20Ruta%20-%20ES.pdf>, Acceso: 20 de diciembre del 2010, 13:45.

DESARROLLO DEL CASO

Corte Internacional de Justicia, Asunto relativo a las plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), medidas provisionales, Providencia del 13 de julio del 2006, Corte Internacional de Justicia Recopilación de fallos, opiniones consultivas y providencias, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/11234.pdf>, Acceso: 2 de marzo del 2011, 10:40.

Corte Internacional de Justicia, Asunto relativo a las plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), medidas provisionales, Providencia del 23 de enero del 2007, Corte Internacional de Justicia, Recopilación de fallos, opiniones consultivas y providencias, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/13614.pdf>, Acceso: 02 de marzo de 2011, 11:02.

Corte Internacional de Justicia, Asunto relativo a las plantas celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Fallo del 20 de abril del 2010, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15878.pdf>, Acceso: 27 de agosto del 2010, 13:23.

Juez AHMED YUSUF Abdulqawi, Declaración, Asunto sobre las Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15887.pdf>, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:40.

Jueces AL-KHASAWNEH Aw Shawkat y SIMMA Bruno, Opinión Disidente Común, Asunto sobre las Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15879.pdf>, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:20.

Juez GREENWOOD Christopher, Opinión individual, Asunto sobre las Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15889.pdf>, Acceso: 4 de marzo del 2011, 9:40.

Juez KEITH Kenneth, Opinión Individual, Asunto sobre las Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15881.pdf>, Acceso: 4 de marzo del 2011, 9:20.

Juez SKOTNIKOV Leonid, Declaración, Asunto sobre las Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15883.pdf>.

Juez TORRES BERNÁRDEZ Santiago, Opinión individual, Asunto sobre las Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15892.pdf>, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:05.

Juez VINUESA Raúl, Opinión Disidente, Asunto sobre las Plantas celulósicas sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Corte Internacional de Justicia, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15893.pdf>, Acceso: 4 de marzo del 2011, 10:10.

República Argentina, Solicitud Introductoria de instancia: Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), 4 de mayo del 2006, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/10778.pdf>, Acceso: 21 de mayo del 2010, 13:42.

República Argentina, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Memoria de la República Argentina, Libro I, Corte Internacional de Justicia, 15 de enero del 2007, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15426.pdf>, Acceso: 21 de mayo del 2010, 19:40.

República Argentina, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Solicitud de medidas provisionales presentada por el Gobierno de la República Argentina, Corte Internacional de Justicia, 4 de mayo del 2006, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/10780.pdf>, Acceso: 25 de febrero del 2011, 14:05.

República Argentina, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Réplica de la República Argentina, Libro I, Corte Internacional de Justicia, 29 de enero del 2008, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15430.pdf>, Acceso: 20 de agosto del 2010, 19:55.

República Oriental de Uruguay, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Contramemoria de Uruguay, Corte Internacional de Justicia, Volumen I, 20 de julio del 2007, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15428.pdf>, Acceso: 30 de agosto de 2010, 19:55.

República Oriental de Uruguay, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Observaciones escritas de Uruguay sobre la solicitud de medidas provisionales de Argentina, Volumen I, Corte Internacional de Justicia, 10 de mayo del 2006, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/13405.pdf>, Acceso: 01 de marzo del 2011.

República Oriental de Uruguay, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Contrarréplica de Uruguay, Corte Internacional de Justicia, Volumen I, 29 de julio del 2008, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15431.pdf>, Acceso: 30 de agosto del 2010, 22:45.

República Oriental de Uruguay, Asunto relativo a las Plantas Celulósicas sobre el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay), Solicitud de medidas provisionales, Corte Internacional de Justicia, 30 de noviembre del 2006, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/13485.pdf>.

INTERNET GENERAL

Cancillería de la República Argentina, Biblioteca Digital de los Tratados, Ficha del Tratado Estatuto del Río Uruguay, convenido entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=3119, Acceso: 29 noviembre de 2010, 11:24.

Cancillería de la República Argentina, Ficha del Tratado de Límites en el Río Uruguay entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=3046, Acceso: 29 de noviembre del 2010, 12:43.

Cancillería de la República Argentina, Noticias de la Cancillería, 14 de febrero del 2006, <http://www.cancilleria.gov.ar/portal/novedades/060214.htm>, Acceso: 02 de enero del 2011, 23:45.

CARU, Digesto de la CARU acerca de las disposiciones relativas a la prevención de la contaminación ambiental, <http://www.caru.org.uy/digestotemacontaminacion.pdf>, Acceso: 20 de enero del 2011, 22:42.

CARU, Plan de Monitoreo, <http://www.caru.org.uy/planmonitoreo091104.html>, Acceso: 21 de enero 2011, 2:19.

Comisión de Derecho Internacional, Introducción. <http://www.un.org/law/ilc/index.htm>, Acceso: 24 de noviembre del 2010, 22:03.

Comisión de Derecho Internacional, Libro Anual de 1966, Volumen II, p.94, [http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes\(e\)/ILC_1966_v2_e.pdf](http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1966_v2_e.pdf), Acceso: 25 de noviembre de 2010, 0:37.

Corte Internacional de Justicia, Declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria, <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3>, Acceso: 19 de febrero de 2011, 19:07.

Corte Internacional de Justicia, Competencia en materia consultiva, <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=2>, Acceso: 19 de febrero de 2011, 17:51.

Corte Internacional de Justicia, Tratados, <http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4>, Acceso: 19 de febrero del 2011, 19:14.

Corte Internacional de Justicia, Una mirada a la Corte Internacional de Justicia: Breve reseña sobre la misión y el funcionamiento de la Corte, <http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/notice.pdf>, Acceso: 17 de febrero de 2011, 17:45.

DINAMA, Detalles para Celulosas de M'Bopucúa – Gabenir S.A. – Dpto. de Río Negro, Acchttp://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=73&tmpl=component&Itemid=372, eso: 2 de enero del 2011, 19:12.

ENCE, Visión, <http://www.ence.es/es/index.html>, Acceso: 20 de enero del 2011, 17:22.

Oy Metsä-Botnia AB, Visión, <http://www.botnia.com/Products/Pages/Default.aspx>, Acceso: 20 de enero de 2011, 17:33.

DINAMA, Informe actualización AAP Botnia – Actualización de la información sobre el proceso de Autorización Ambiental de las Plantas de Celulosa al 26 de abril de 2006, http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=177, Acceso: 3 de enero del 2011, 18:19.

Ecometrix, Actividades, <http://www.ecometrix.ca/aboutus.html>, Acceso: 21 de enero de 2011, 19:18.

Guauguaychú, Turismo Rural en Guauguaychú, Entre Ríos, <http://www.guauguaychu.info/trural.htm>, Acceso: 7 de febrero del 2011, 20:10.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto de la República Argentina, Biblioteca Digital de Tratados, <http://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php?consulta=si&modo=c&pg=8>, Acceso: 9 de marzo del 2011, 19:20.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina, Informe de la Delegación Argentina al Grupo de Trabajo de Alto Nivel, 3 de febrero del 2006, <http://www.mrecic.gov.ar/portal/novedades/informe.pdf>, Acceso: 1 de febrero de 2011, 23:24.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, COMUNICADO DE PRENSA N° 34/06, <http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,1,154,O.S.0,PAG:CONP:276;3;P:1791;1;PAG:MNU:E:106;6:MNU>, Acceso: 21 de enero de 2011, 3:27.

MVOTMA , Decreto 349/005 – Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, http://www.mvotma.gub.uy/dinama/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=376, Acceso: 2 de febrero de 2011, 17:34.

MVOTMA, Resolución número 342/2003, http://www.mvotma.gub.uy/dinama/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&limit=5&limitstart=5&order=date&dir=DESC&Itemid=377, Acceso: 13 de diciembre del 2010, 13:12.

MVOTMA, Resolución número 63/2005, http://www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=177, Acceso: 13 de diciembre del 2010, 13:20.

Ontur Internacional, Terminal Multipropósito, <http://www.ontur.com.uy/espanol.htm>, Acceso: 2 de febrero de 2011, 0:23.

Organización de las Naciones Unidas, Resumen sobre la Convención de Viena, http://untreaty.un.org/ilc/summaries/1_1.htm, Acceso: 25 de noviembre del 2010, 13:34.

Parlamento de la República de Uruguay, Ley No. 13.462, <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=13462&Anchor=>, Acceso: 29 de noviembre del 2010, 13:03.

Parlamento de la República de Uruguay, Ley No. 14.521, <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14521&Anchor=>, Acceso: 29 de noviembre del 2010, 11:27.

Presidencia de Uruguay, Comunicado de prensa del 6 de abril del 2006, <http://www.presidencia.gub.uy/web/noticias/2006/04/2006040704.htm>, Acceso: 26 de enero de 2011, 18:00.

UPM, Visión, http://www.upmuruguay.com.uy/upm/internet/upm_fray_bentos.nsf/sp2?open&cid=planta&nav1nf=ESP\Navigation\20.%20Planta&nav1nfa=o, Acceso: 1 de febrero de 2011, 22:26.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, Argentina desmintió haber prestado consentimiento para la construcción de Botnia, Coordinación de Prensa y Difusión, <http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=7822>, Acceso: 7 de febrero del 2011, 19:51.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, Palabras del Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner el 5 de mayo de 2006 – Corsódromo de Gualeguaychú, <http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2519>, Acceso: 7 de febrero del 2011, 20: 17.

Organización de las Naciones Unidas, Estados Miembros de las Naciones Unidas,
<http://www.un.org/es/members/index.shtml#u>, Acceso: 19 de febrero de 2011, 19:03.

ANEXO

ESTATUTO DEL RIO URUGUAY

El gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Oriental del Uruguay animados del espíritu fraterno que inspira el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscrito en Montevideo el 19 de noviembre de 1973, han convenido lo siguiente:

CAPITULO I

Propósitos y definiciones

Artículo 1º — Las partes acuerdan el presente estatuto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7º del Tratado de Límites en el Río Uruguay de 7 de abril de 1961, con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes.

Art. 2º — A los efectos de este estatuto se entiende por:

- a) Partes: La República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
- b) Tratado: El Tratado de Límites entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay en el Río Uruguay, suscrito en Montevideo el 7 de abril de 1961.
- c) Río: El Río Uruguay en el tramo señalado en el art. 1º del tratado.
- d) Estatuto: El presente instrumento jurídico.
- e) Comisión: La Comisión Administradora del Río Uruguay que se crea por el estatuto.
- f) Protocolo: El Protocolo sobre demarcación y caracterización de la línea de frontera argentino-uruguaya en el Río Uruguay, suscrito en Buenos Aires el 16 de octubre de 1968.

CAPITULO II

Navegación y obras

Art. 3º — Las partes se prestarán la ayuda necesaria a fin de otorgar a la navegación las mayores facilidades y seguridad posibles.

Art. 4º — Las partes acordarán las normas reglamentarias sobre seguridad de la navegación en el río y uso del canal principal.

Art. 5º — La Comisión adjudicará a las partes previo planeamiento en común, la realización del dragado, el balizamiento y las obras de conservación de los tramos del canal principal que fije periódicamente, en función del uso del mismo y de la disponibilidad de medios técnicos.

Art. 6º — A los fines expresados en el art. 5º, cada parte autoriza a que, en su jurisdicción, los servicios competentes de la obra efectúen las tareas respectivas, previa notificación a través de la Comisión.

Art. 7º — La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte.

Si así se resolviera o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión.

En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas.

Art. 8º — La parte notificada dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para expedirse sobre el proyecto, a partir del día en que su delegación ante la Comisión haya recibido la notificación.

En el caso de que la documentación mencionada en el art. 7º fuere incompleta, la parte notificada dispondrá de treinta días para hacérselo saber a la parte que proyecte realizar la obra, por intermedio de la Comisión.

El plazo de ciento ochenta días precedentemente señalado comenzará a correr a partir del día en que la delegación de la parte notificada haya recibido la documentación completa.

Este plazo podrá ser prorrogado prudencialmente por la Comisión si la complejidad del proyecto así lo requiere.

Art. 9º — Si la parte notificada no opusiere objeciones o no contestare dentro del plazo establecido en el art. 8º, la otra parte podrá realizar o autorizar la realización de la obra proyectada.

Art. 10. — La parte notificada tendrá derecho a inspeccionar las obras que se estén ejecutando para comprobar si se ajustan al proyecto presentado.

Art. 11. — Si la parte notificada llegare a la conclusión de que la ejecución de la obra o el programa de operación puede producir perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas, lo comunicará a la otra parte por intermedio de la Comisión dentro del plazo de ciento ochenta días fijado en el art. 8º.

La comunicación deberá precisar cuáles aspectos de la obra o del programa de operación podrán causar perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río, o a la calidad de sus aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones que sugiera al proyecto o programa de operación.

Art. 12. — Si las partes no llegaren a un acuerdo, dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la comunicación a que se refiere el art. 11, se observará el procedimiento indicado en el capítulo XV.

Art. 13. — Las normas establecidas en los arts. 7º a 12 se aplicarán a todas las obras a que se refiere el art. 7º, sean nacionales o binacionales, que cualquiera de las partes proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el río Uruguay fuera del tramo definido como río y en las respectivas áreas de influencia de ambos tramos.

CAPITULO III

Practicaje

Art. 14. — La profesión de práctico en el río sólo será ejercida por los profesionales habilitados por las autoridades de cualquiera de las partes.

Art. 15. — Todo buque que zarpe de puerto argentino o uruguayo tomará práctico, cuando deba hacerlo, de la nacionalidad del puerto de zarpada.

El buque que provenga del puerto de un tercer Estado tomará práctico, cuando deba hacerlo, de la nacionalidad del puerto de destino.

El contacto que el buque tenga, fuera de puerto, con las autoridades de cualquiera de las partes, no modificará el criterio inicialmente seguido para determinar la nacionalidad del práctico.

En los demás casos, el práctico deberá ser, indistintamente, argentino o uruguayo.

Art. 16. — Terminadas sus tareas, los prácticos argentinos y uruguayos podrán desembarcar libremente en los puertos de una u otra parte a los que arriben los buques en los que cumplieron su cometido.

Las partes brindarán a los mencionados prácticos las máximas facilidades para el mejor cumplimiento de su función.

CAPITULO IV

Facilidades portuarias, alijos y complementos de carga

Art. 17. — Las partes se comprometen a realizar los estudios y adoptar las medidas necesarias con vistas a dar la mayor eficacia posible a sus servicios portuarios, de modo de brindar las mejores condiciones de rendimiento y seguridad, y ampliar las facilidades que mutuamente se otorgan en sus respectivos puertos.

Art. 18. — Las tareas de alijo y complemento de carga se realizarán, exclusivamente, en la zona que en cada caso fije dentro de su respectiva jurisdicción la autoridad competente de acuerdo con las necesidades técnicas y de seguridad, especialmente en materia de cargas contaminantes o peligrosas.

CAPITULO V

Salvaguardia de la vida humana

Art. 19. — Cada parte tendrá a su cargo la dirección de las operaciones de búsqueda y rescate dentro de su jurisdicción.

Art. 20. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 19 la autoridad que inicie una operación de búsqueda y rescate lo comunicará a la autoridad competente de la otra parte.

Art. 21. — Cuando la magnitud de la operación lo aconseje, la autoridad de la parte que lo necesite podrá solicitar a la de la otra el concurso de medios, reteniendo cada una de las partes el control de las operaciones que se realicen dentro de su jurisdicción.

Art. 22. — Cuando por cualquier causa la autoridad de una de las partes no pudiese iniciar o continuar una operación de búsqueda y rescate, solicitará a la de la otra que asuma la responsabilidad de la dirección y ejecución de la misma, facilitándole toda la colaboración posible.

Art. 23. — Las unidades de superficie o aéreas de ambas partes que se hallen efectuando operaciones de búsqueda y rescate podrán entrar o salir de cualquiera de los respectivos territorios, sin cumplir las formalidades exigidas normalmente.

CAPITULO VI

Salvamento

Art. 24. — El salvamento de buques será realizado por las autoridades o las empresas de la parte en cuya jurisdicción haya ocurrido el siniestro, sin perjuicio de lo que establecen los artículos siguientes.

Art. 25. — El salvamento de un buque en el canal principal será realizado por las autoridades o las empresas de la parte en cuya jurisdicción haya ocurrido el siniestro, de conformidad con los criterios establecidos en el art. 48.

Art. 26. — Cuando las autoridades o las empresas de la parte a la que corresponde el salvamento desistan de efectuarlo, el mismo podrá ser realizado por las autoridades o las empresas de la otra parte.

El desistimiento a que se refiere el párrafo anterior no será demorado más allá de lo necesario y será notificado de inmediato a la otra parte a través de la Comisión.

CAPITULO VII

Aprovechamiento de las aguas

Art. 27. — El derecho de cada parte de aprovechar las aguas del río, dentro de su jurisdicción para fines domésticos, sanitarios, industriales y agrícolas, se ejercerá sin perjuicio de la aplicación del procedimiento previsto en los arts. 7º a 12 cuando el aprovechamiento sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.

Art. 28. — Las partes suministrarán a la Comisión, semestralmente, una relación detallada de los aprovechamientos que emprendan o autoricen en las zonas del río sometidas a sus respectivas jurisdicciones, a los efectos de que ésta controle si las mismas, en su conjunto, producen perjuicio sensible.

Art. 29. — Lo dispuesto en el art. 13 se aplicará a todo aprovechamiento que sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.

CAPITULO VIII

Recursos del lecho y del subsuelo

Art. 30. — Cada parte podrá explorar y explotar los recursos del lecho y del subsuelo del río en la zona del mismo sometida a su jurisdicción, sin causar perjuicio sensible a la otra parte.

Art. 31. — Las instalaciones u otras obras necesarias para la exploración o explotación de los recursos del lecho y del subsuelo no podrán interferir la navegación en el canal principal.

Art. 32. — El yacimiento o depósito que se extienda a uno y otro lado del límite establecido en el art. 1º del tratado, será explotado de forma tal que la distribución de los volúmenes del recurso que se extraiga de dicho yacimiento o depósito sea proporcional al volumen del mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de dicho límite.

Cada parte realizará la exploración y explotación de los yacimientos o depósitos que se hallen en esas condiciones sin causar perjuicio sensible a la otra parte y de acuerdo con las exigencias de un aprovechamiento integral y racional del recurso, ajustado al criterio establecido en el párrafo anterior.

Art. 33. — En las concesiones para extraer arena, canto rodado o piedra del lecho o del subsuelo del río, la parte otorgante deberá establecer, entre otras, las condiciones siguientes:

a) Que los residuos provenientes del lavado y clasificación de los materiales extraídos sólo sean descargados en los lugares que la Comisión indique como vaciaderos.

b) Que no pueden efectuarse extracciones a distancias menores que las que indique la Comisión con relación a los canales de navegación y a otros sectores del río.

Art. 34. — Serán aplicables, en lo pertinente, las normas establecidas en los arts. 7º a 12 cuando la exploración y explotación de los recursos del lecho y del subsuelo tengan entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.

CAPITULO IX

Conservación, utilización y explotación de otros recursos naturales

Art. 35. — Las partes se obligan a adoptar las medidas necesarias a fin de que el manejo del suelo y de los bosques, la utilización de las aguas subterráneas y la de los afluentes del río, no causen una alteración que perjudique sensiblemente el régimen del mismo o la calidad de sus aguas.

Art. 36. — Las partes coordinarán, por intermedio de la Comisión, las medidas adecuadas a fin de evitar la alteración del equilibrio ecológico y controlar plagas y otros factores nocivos en el río y sus áreas de influencia.

Art. 37. — Las partes acordarán las normas que regularán las actividades de pesca en el río en relación con la conservación y preservación de los recursos vivos.

Art. 38. — Cuando la intensidad de la pesca lo haga necesario, las partes acordarán los volúmenes máximos de capturar por especies, como asimismo los ajustes periódicos correspondientes. Dichos volúmenes de captura serán distribuidos por igual entre las partes.

Art. 39. — Las partes intercambiarán regularmente, por intermedio de la Comisión, la información pertinente sobre esfuerzo de pesca y captura por especie.

CAPITULO X

Contaminación

Art. 40. — A los efectos del presente estatuto se entiende por contaminación la introducción directa o indirecta, por el hombre, en el medio acuático, de sustancias o energía de las que resulten efectos nocivos.

Art. 41. — Sin perjuicio de las funciones asignadas a la Comisión en la materia, las partes se obligan a:

a) Proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad con los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales;

b) No disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos:

1. Las exigencias técnicas en vigor para prevenir la contaminación de las aguas, y

2. La severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción.

c) Informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar con relación a la contaminación de las aguas, con vistas a establecer normas equivalentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Art. 42. — Cada parte será responsable, frente a la otra, por los daños inferidos como consecuencia de la contaminación causada por sus propias actividades o por las que en su territorio realicen personas físicas o jurídicas.

Art. 43. — La jurisdicción de cada parte respecto de toda infracción cometida en materia de contaminación, se ejercerá sin perjuicio de los derechos de la otra parte a resarcirse de los daños que haya sufrido, a su vez, como consecuencia de la misma infracción.

A esos efectos, las partes se prestarán mutua cooperación.

CAPITULO XI

Investigación

Art. 44. — Cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la Comisión con la adecuada antelación e indicado las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazos en que se efectuarán.

Esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados.

La parte autorizante tiene derecho a participar en todas las fases de esos estudios e investigaciones y a conocer y disponer de sus resultados.

Art. 45. — Las partes promoverán la realización de estudios conjuntos de carácter científico de interés común.

CAPITULO XII

Competencias

Art. 46. — El derecho de policía en el río será ejercido por cada parte dentro de su jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, la autoridad de una parte que verifique que se está cometiendo un ilícito en la jurisdicción de la otra, podrá apresar al infractor debiéndolo poner a disposición de la autoridad de esta última, con las excepciones previstas en el art. 48.

Asimismo, la autoridad de cada parte podrá perseguir a los buques que habiendo cometido una infracción en su propia jurisdicción, hayan ingresado en la jurisdicción de la otra parte.

En los casos previstos en los párrafos segundo y tercero, el ejercicio del derecho de policía en jurisdicción de la otra parte deberá ser comunicado de inmediato a ésta, y bajo ninguna circunstancia podrá hacerse efectivo más allá de una distancia de la costa de la misma, que será determinada por la Comisión para cada uno de los tramos.

Las partes coordinarán la acción a que se refiere el presente artículo.

Art. 47. — Las partes ejercerán coordinadamente la vigilancia adecuada a los fines de prevenir la comisión de delitos e infracciones en la zona comprendida entre las líneas definidas en los párrafos a y b, apartado II, inc. B) del art. 1º del tratado.

Art. 48. — Los buques que naveguen por el canal principal se considerarán situados en la jurisdicción de una u otra parte conforme a los siguientes criterios:

- a) En la jurisdicción de cada parte, los buques de su bandera.
- b) En la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay, los buques de terceras banderas que naveguen aguas arriba, y en la de la República Argentina, los que lo hagan aguas abajo, sin perjuicio de lo establecido en los incs. c) y e).
- c) En la jurisdicción de cada parte, los buques de terceras banderas involucrados en siniestros con buques de bandera de dicha parte.
- d) En la jurisdicción de la parte de la bandera del buque de mayor tonelaje cuando en un siniestro se hallen involucrados buques de banderas de las dos partes, salvo que uno de ellos sea un buque de guerra, en cuyo caso se considerarán en la jurisdicción de la bandera de este último.
- e) En la jurisdicción de la parte que corresponda según el criterio del inc. b), aplicable en función del buque de mayor tonelaje, cuando en un siniestro se hallen involucrados exclusivamente buques de terceras banderas.
- f) En los casos no previstos la Comisión decidirá.

Este artículo no será aplicable a los casos en que estén involucrados buques de guerra, sin perjuicio de lo dispuesto en el inc. d).

CAPITULO XIII

Comisión Administradora

Art. 49. — Las partes crean una Comisión Administradora del Río Uruguay, compuesta de igual número de delegados por cada una de ellas.

Art. 50. — La Comisión gozará de personalidad jurídica para el cumplimiento de su cometido.

Las partes le asignarán los recursos necesarios y todos los elementos y facilidades indispensables para su funcionamiento.

Art. 51. — La Comisión tendrá su sede en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay pero podrá reunirse en los territorios de ambas partes.

Art. 52. — La Comisión podrá constituir los órganos subsidiarios que estime necesarios.

Funcionará en forma permanente y tendrá su correspondiente secretaría.

Art. 53. — Las partes acordarán por medio de canje de notas, el estatuto de la Comisión. Esta dictará su reglamento interno.

Art. 54. — La Comisión celebrará oportunamente, con ambas partes, los acuerdos conducentes a precisar los privilegios e inmunidades de los miembros y personal de la misma, reconocidos por la práctica internacional.

Art. 55. — Para la adopción de las decisiones de la Comisión cada delegación tendrá su voto.

Art. 56. — La Comisión desempeñará las siguientes funciones:

a) Dictar, entre otras, las normas reglamentarias sobre:

1. Seguridad de la navegación en el río y uso del canal principal;
2. Conservación y preservación de los recursos vivos;
3. Practicaje;
4. Prevención de la contaminación;
5. Tendido de tuberías y cables subfluviales o aéreos.

b) Coordinar la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, especialmente los relativos al levantamiento integral del río.

c) Establecer, cuando corresponda, los volúmenes máximos de pesca por especies y ajustarlos periódicamente.

d) Coordinar entre las autoridades competentes de las partes la acción en materia de prevención y represión de ilícitos.

- e) Coordinar la adopción de planes, manuales, terminología y sistemas de comunicación comunes en materia de búsqueda y rescate.
- f) Establecer el procedimiento a seguir y la información a suministrar en los casos en que las unidades de una parte, que participen en operaciones de búsqueda y rescate, ingresen al territorio de la otra o salgan de él.
- g) Determinar las formalidades a cumplir en los casos en que deba ser introducido transitoriamente, en territorio de la otra parte, material para la ejecución de operaciones de búsqueda y rescate.
- h) Coordinar las ayudas a la navegación, balizamiento y dragado.
- i) Establecer el régimen jurídico-administrativo de las obras e instalaciones binacionales que se realicen y ejercer la administración de las mismas.
- j) Publicar y actualizar la Carta Oficial del Río, con su taza de límites, en coordinación con la Comisión creada por el protocolo.
- k) Transmitir en forma expedita, a las partes, las comunicaciones, consultas, informaciones y notificaciones que se efectúen de conformidad con el estatuto.
- l) Cumplir las otras funciones que le han sido asignadas por el estatuto y aquellas que las partes convengan en otorgarle por medio de canje de notas u otras formas de acuerdo.

Art. 57. — La Comisión informará periódicamente a los gobiernos de las partes sobre el desarrollo de sus actividades.

CAPITULO XIV

Procedimiento conciliatorio

Art. 58. — Toda controversia que se suscitare entre las partes con relación al río será considerada por la Comisión, a propuesta de cualquiera de ellas.

Art. 59. — Si en el término de ciento veinte días la Comisión no lograre llegar a un acuerdo, lo notificará a ambas partes, las que procurarán solucionar la cuestión por negociaciones directas.

CAPITULO XV

Solución Judicial de Controversias

Art. 60. — Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del tratado y del estatuto que no pudiese solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de Justicia.

En los casos a que se refieren los arts. 58 y 59, cualquiera de las partes podrá someter toda controversia sobre la interpretación o aplicación del tratado y del estatuto a la Corte Internacional de Justicia, cuando dicha controversia no hubiere podido solucionarse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación aludida en el art. 59.

CAPITULO XVI

Disposiciones transitorias

Art. 61. — Lo dispuesto en el art. 56, inc. i), se aplicará a las obras binacionales actualmente en ejecución una vez que se encuentren concluidas y cuando así lo convengan las partes por medio de canje de notas u otras formas de acuerdo.

Art. 62. — La Comisión se constituirá dentro de los sesenta días siguientes al canje de los instrumentos de ratificación del estatuto.

CAPITULO XVII

Ratificación y entrada en vigor

Art. 63. — El presente estatuto será ratificado de acuerdo con los procedimientos previstos en los respectivos ordenamientos jurídicos de las partes y entrará en vigor por el canje de instrumentos de ratificación que se realizará en la ciudad de Buenos Aires.

Hecho en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, a los veintiséis días del mes de febrero del año mil novecientos setenta y cinco, en dos ejemplares originales de un mismo tenor, igualmente válidos.

Por el gobierno de la República Argentina: Alberto Juan Vignes, ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Por el Gobierno de la República del Uruguay: Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, María José Rodríguez Montaña, con C.C. 1716782543 autora del trabajo de graduación intitulado "La Interpretación y aplicación de los tratados en el caso de las Papeleras del Río Uruguay", previa a la obtención del grado académico de **LINCENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 17 de junio del 2011



C.C. 1716782543